

idea
latinoamericana
colección



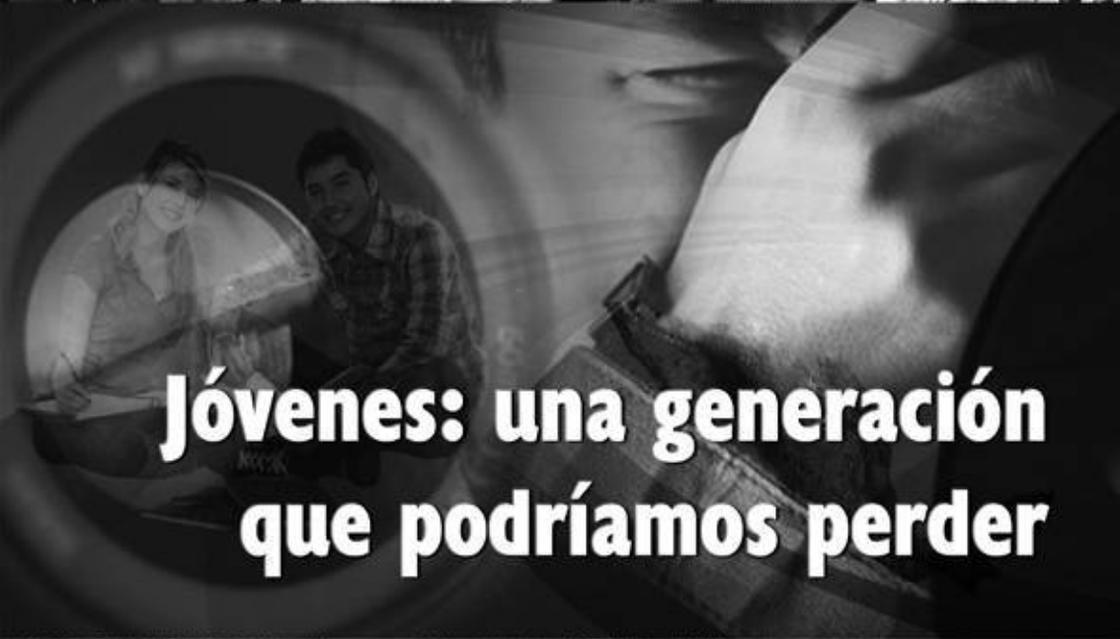
Jóvenes: una generación que podríamos perder



Rafael Cordera Campos • Renward García Medrano

idea
latinoamericana
colección

idea
latinoamericana
colección



Jóvenes: una generación que podríamos perder



Rafael Cordera Campos • Renward García Medrano

Jóvenes: una generación que podríamos perder

RAFAEL CORDERA CAMPOS
RENWARD GARCÍA MEDRANO

Primera Edición, 2012.

D.R. UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE

Edificio UDUAL, Circuito Norponiente del Estadio Olímpico
Ciudad Universitaria, México.

ISBN: 978-607-8066-02-5

Impreso en México / Printed in Mexico

Editora: Lic. Gisela Rodríguez Ortiz
Diseño y formación: Olivia González Reyes

Índice

Nota preliminar	9
Introducción	11
1. ¿Quiénes son los jóvenes?	17
2. Entorno económico y social.	25
3. Desempleo.	34
4. Pobreza.	40
5. Violencia.	48
6. Bono demográfico.	55
7. Educación.	69
Educación en el siglo XXI	73
Educación básica	75
Educación media superior	87
Educación superior	94
8. Democracia	102
9. Políticas Públicas	106
Salud	108
10. Conclusiones y recomendaciones	113
Conclusiones	113
Recomendaciones	113

Para Maca

Nota preliminar

El presente estudio compendia las ideas propuestas y desarrolladas por Rafael Cordera Campos en anteriores libros y numerosos artículos y conferencias sobre asuntos relativos a la juventud. Estas ideas fueron discutidas por Cordera Campos con Renward García Medrano durante muchos meses, y de su revisión crítica surgieron nuevos enfoques y propuestas que están contenidas en los distintos capítulos del libro. La obra fue auspiciada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

Ambos autores compartieron el criterio de que la juventud es un estrato social definido no sólo por razones etarias sino también culturales y socioeconómicas, lo que la convierte en un conjunto humano sumamente heterogéneo. Los dos tuvieron en común la preocupación de que la insuficiente o deficiente atención institucional a la problemática juvenil representa una automutilación de la sociedad como un todo.

Cuando el estudio estaba prácticamente terminado y sólo faltaba incorporarle los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y hacerle algunos ajustes finales de redacción, se produjo el lamentable deceso de Rafael Cordera Campos. Renward García Medrano quiere dejar el testimonio escrito de que Cordera fue el promotor de la investigación y el autor original de la gran mayoría de las ideas contenidas en el texto. García Medrano aportó sus propias reflexiones en numerosas reuniones de trabajo y tuvo a su cargo de la redacción final del texto.

Por lo anterior, el presente libro es la obra póstuma de Rafael Cordera Campos y representa un señalado honor para Renward García Medrano haber participado con él en la discusión y reflexión sobre el tema de los jóvenes, que siempre le apasionó y a cuyo estudio dedicó gran parte de su vida. García Medrano asume toda la responsabilidad por los errores que pueda tener el estudio, habida cuenta de que Rafael Cordera no tuvo ocasión de revisar el borrador final del trabajo ni, obviamente, de hacerle las correcciones que considerara necesarias.

INTRODUCCIÓN

En la complicada circunstancia del México a principios de siglo XXI, los jóvenes representan una oportunidad y un riesgo para la sociedad en su conjunto. Son oportunidad porque constituyen la gran reserva de recursos humanos en todos los ámbitos de la vida nacional y porque tienen la imaginación y las ideas frescas que podrían romper las inercias en que está atrapada la sociedad. Pueden ser un riesgo si continúa deteriorándose el entorno familiar y social y las políticas públicas los siguen empujando a la informalidad, la emigración hacia Estados Unidos y la delincuencia organizada.

México es un país de jóvenes, como resultado de los altos niveles de fecundidad que prevalecieron a finales del siglo XX a pesar de los efectos de las políticas de control de la natalidad aplicadas desde el decenio de 1970. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la población total del país alcanzaba la cifra de 112 336 538 habitantes. De ellos, 29 669 960 tenían entre 15 y 29 años, rango de edades que algunos autores identifican con el concepto de población joven y que, en las fechas de levantamiento del censo constituían el 26.65 por ciento de la población total. La relación hombres-mujeres, que para el conjunto de la población es 95.4, para los jóvenes de 15 a 29 años es 96.8.

Si reducimos el límite máximo de edad a 24 años para seguir los criterios del Consejo Nacional de Población, el número de jóvenes era de 20 951 674 personas, es decir, el 18.65 por ciento del total. De ellos, 11 millones son adolescentes (de 15 a 19 años).

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública considera jóvenes al grupo de edades de 12 a 29 años. En el estudio “Los jóvenes mexicanos: Situación actual y desafíos futuros” indica que el conjunto de jóvenes pasó de 23.8 millones de personas en 1988, a 35.8 millones en 2010, por lo que en México “nunca ha habido tantos jóvenes como ahora”, según el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Cuadro 1. Población joven por grupos de edad y sexo

Estados Unidos Mexicanos	Población Total	Hombres	Mujeres
Población total	112 336 538	54 855 231	57 481 307
15-19 años	11 049 884	5 528 566	5 521 318
20-24 años	9 901 790	4 788 933	5 112 857
25-29 años	8 988 296	4 410 332	4 577 964
Suma 15-29 años	29 939 970	14 727 831	15 212 139

Fuente: elaboraciones con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Aunque la evolución de la pirámide de edades en los últimos treinta años muestra una clara tendencia al envejecimiento de la población, aún existe un fuerte predominio del volumen de población en edad productiva sobre los niños y ancianos que, por razones de edad, son económicamente dependientes. Este bono demográfico constituye un importante recurso potencial para el desarrollo pero ni es permanente ni es suficiente y su aprovechamiento requiere que la política económica asuma el crecimiento económico, la creación de empleos y la disminución de las desigualdades como prioridades superiores.

El bono demográfico no es permanente porque las tasas de crecimiento natural de la población se han contraído, a pesar de que en el primer decenio del siglo XXI se abandonaron los programas de control natal, mientras que la esperanza de vida continuará creciendo con los avances de la medicina.

El bono demográfico no es suficiente porque su aprovechamiento sólo es posible en un entorno económico de crecimiento y con políticas educativas y de capacitación vinculadas a los requerimientos de recursos humanos calificados de la economía.

Para aprovechar la ventaja competitiva que representa la población joven del país se requiere remover todas las inercias que ha arrastrado la política económica desde la segunda mitad del decenio de 1980 y conciliar la estabilidad de las finanzas públicas con los objetivos del crecimiento económico, pero sin perder noción de que lo más importante es crecer, y no al revés.

También requiere revalorar el papel de la Educación Pública, especialmente en los niveles medio-superior y superior, como generadora de la conciencia de ciudadanía y de valores cívicos fundamentales, cuyo desgaste explica en parte los problemas de violencia que afligen al país. Paralelamente, la educación debe ser premeditadamente formadora de los recursos humanos calificados que requiere el desarrollo industrial.

Por razones de edad, la adolescencia y la juventud son etapas formativas para la vida adulta, y los aciertos y errores de la sociedad, la escuela y la familia en su relación con los jóvenes, tendrán repercusiones de muy largo plazo. Las deficiencias de la educación en todos los niveles -que son examinados en el presente estudio- y la ausencia de políticas de crecimiento económico y generación de empleos, transforman la oportunidad en riesgo pues si la escuela y el empleo excluyen a grandes masas de jóvenes y si la vida comunitaria y la institución familiar están en decadencia por diversos factores, entre los que destacan la desigualdad y la violencia, los jóvenes no tienen más opciones que la economía informal, la emigración y la delincuencia.

El abandono de los jóvenes por las instituciones del Estado e incluso por organizaciones sociales, los condena a un porvenir deplorable pero, a la vez, entraña una automutilación de la sociedad: el mundo de los adultos, en especial los que participan en el mercado, acatan más o menos las leyes, tienen alguna información política y económica, votan y participan de alguna forma en la vida social del país, está renunciando a su propia continuidad a través de las nuevas generaciones.

La excepción está constituida por las angostas capas de la sociedad que envían a sus hijos a estudiar al extranjero o en instituciones de educación superior privadas que funcionan como formadoras de los directivos y gerentes que necesitan las grandes empresas y de los políticos que requieren esos mismos grupos para encabezar las instituciones del Estado en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes públicos. En contraste, la educación superior pública ha ido perdiendo terreno como semillero de dirigencias económicas y políticas, que en su momento fue un poderoso factor de democratización, aunque no fuera reconocido como tal.

Si la sociedad y el Estado no lo aprovechan, el bono demográfico puede convertirse en un problema, y en alguna medida ya lo es, pues el hecho de que la quinta parte de la población tenga edades entre los 15 y los 24 años constituye una importante presión sobre el sistema educativo

y sobre el mercado de trabajo. Es inaceptable que los jóvenes soldados, marinos, policías y particulares sean asesinados todos los días en medio de las pugnas entre organizaciones delictivas y la estrategia de combate al crimen organizado.

La cuestión juvenil en México suele enfocarse de distintas maneras, según los propósitos que se busquen con su estudio, pero en general hay dos corrientes: los que consideran a la juventud como un tema en sí mismo y los que la entienden como un asunto de la sociedad en su conjunto. En el marco de las políticas públicas, ambos enfoques son válidos, pero sirven para propósitos distintos.

Desde el primer enfoque se suele diagnosticar la problemática juvenil en su enorme diversidad y arribar a soluciones. Sin embargo, no pocos estudios con esta visión han derivado en el encasillamiento de los jóvenes como un grupo vulnerable de la sociedad, similar a otros conjuntos: los discapacitados, las comunidades indígenas o los adultos mayores, lo que conduce a soluciones tan restringidas e insuficientes como los programas de fomento deportivo o de orientación para el uso del tiempo libre.

El segundo enfoque asume que la juventud, caracterizada por su creatividad y energía, es un recurso de la sociedad como un todo y que su aprovechamiento exige que el fenómeno juvenil se tenga presente en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, especialmente la económica, la educativa y las de salud.

La diferencia de los enfoques facilita el análisis, pero también puede parcializarlo, pues en la realidad concreta, los jóvenes son al mismo tiempo un grupo específico de población, y un valioso capital humano de la sociedad como un todo. Esta doble perspectiva permite identificar políticas públicas que hagan efectivas las garantías individuales y los derechos sociales de los jóvenes y que, al mismo tiempo, los conviertan en el capital humano para el desarrollo económico, social y cultural del país en su conjunto.

Para el análisis se asume el criterio del Consejo Nacional de Población (Conapo),¹ que considera jóvenes a los hombres y mujeres de 15 a 24 años; sin embargo, en algunas partes se extiende la frontera alta del grupo de edad a los 29 años cuando a juicio de los autores lo requieren algunos temas.

1 Consejo Nacional de Población. La situación actual de los jóvenes en México. Serie Documentos Técnicos. México, agosto de 2019. ISBN 970-628-957-7

Los jóvenes no se consideran como pre-adultos sino como un estrato específico y diferenciado de la población que tiene necesidades y potencialidades diferentes a las de otros grupos de edad. Se les conceptualiza como agentes activos del cambio social y, al mismo tiempo, como un conjunto humano con necesidades y demandas específicas.

1. ¿QUIÉNES SON LOS JÓVENES?

La juventud es una etapa de la vida con características biológicas, emocionales, económicas, sociales y culturales que la distinguen del conjunto poblacional y por esos atributos, constituye una gran reserva de vigor, talento, adaptabilidad y capacidad de innovación de la población como un todo.

Para estudiar el fenómeno juvenil y, sobre todo, para elaborar políticas públicas eficaces, los jóvenes no deben ser considerados como una de las minorías que suelen ser atendidas por instituciones *ad hoc*. Se trata de un grupo complejo de la sociedad tan diversificado como la nación misma, cuya cuantía y papel en el presente y el futuro del país les da una relevancia singular.

No se ha adoptado -ni parece viable que se haga- una definición conceptual universalmente aceptada de los jóvenes, pero se cuenta con apreciables avances, tanto en el diagnóstico cuantitativo y analítico del fenómeno, como en las propuestas de política.

Los jóvenes tampoco se encuadran en un perfil único; existen considerables diferencias en las actitudes y oportunidades de los tres subgrupos que se consideran en este trabajo: los adolescentes (de 15 a 19 años), los jóvenes propiamente dichos (de 20 a 24 años) y los adultos jóvenes cuyas edades van de los 25 a los 29 años. Además, dentro de cada uno de estos subgrupos hay hondas disparidades que reflejan la diversidad regional del país, y las diferentes características étnicas, familiares, culturales, educativas, socioeconómicas, geográficas.

El entorno geográfico y socioeconómico suele ser un factor de la mayor relevancia en la caracterización de los jóvenes. Un joven lacandón de 18 años de edad se parece más a un chamula de 30 años que a un coahuilense de los mismos 18. Una adolescente de una familia de altos ingresos tiene pocas características en común con otra de su misma edad que pertenezca a un grupo familiar de la periferia de miseria de las áreas urbanas.

Si tan sólo fuera por esta marcada variedad en la composición de la juventud, sería notoria la inoperancia de los programas y proyectos

Jóvenes: una generación que podríamos perder

indiferenciados que suelen aplicar los órganos públicos creados para atender “la cuestión juvenil”. Pero como los problemas de los jóvenes son mucho más complejos, la brecha entre la necesidad social que representan y las respuestas del Estado es abismal.

Ser joven es vivir cambios permanentes, profundos y difícilmente manejables, en un período muy breve. Los jóvenes atraviesan por importantes transiciones biológicas y sociales. En los distintos subgrupos de edad, los jóvenes transitan ya no sólo de un grado escolar al siguiente, sino entre niveles educativos que, a menudo, tienen diferencias de gran importancia -enseñanza por materias, con profesores y en salones distintos, por ejemplo- y en muchos casos abandonan el proceso educacional ya sea para insertarse al trabajo, pagado y no, por factores asociados a la descomposición familiar y comunitaria o simplemente por rechazo a los métodos y exigencias escolares.

En los subgrupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años de edad, se inicia la vida conyugal, los jóvenes forman su propia familia y abandonan la familia donde nacieron, aunque por limitaciones económicas, una alta porción de familias jóvenes viven en el hogar paterno de alguno de los miembros de la pareja. Éstos y otros factores los obligan a obtener ingresos regulares, lo que plantea serias dificultades en una economía que no crece ni genera empleos suficientes en el sector formal. Las mujeres de estas edades tienen su primer contacto sexual, su primer hijo y, en muchos casos, su primer uso de anticonceptivos.

Juntas e interactuando, estas transiciones hacen de la juventud un período particularmente crítico y vulnerable, en el que son determinantes ámbitos tan disímbolos y a menudo desconectados, como la familia, la escuela, las instituciones de salud, el mercado de trabajo. Estas instituciones están lejos de ser óptimas; debido a factores económicos, sociales, culturales y políticos de gran envergadura, por lo que actúan en contra y no a favor del sano desarrollo de la juventud. Una gran proporción de los jóvenes de menores ingresos no se sienten parte de la sociedad formal: la que está regida por un orden jurídico, económico, social y cultural establecidos e identificables, y este fenómeno ha sido ignorado por los gobiernos.

La juventud es la edad de la energía, tiene una gran capacidad de adaptación a cambios tecnológicos, culturales y sociales, como lo ha demostrado en el convulso inicio del siglo XXI mexicano y está en

condiciones óptimas para adquirir los conocimientos, habilidades y capacidades que exige su entorno económico y social. Las instituciones públicas, sociales y privadas tienen la responsabilidad de entender a los jóvenes en su complejidad y construir políticas y programas que promuevan el desarrollo de los jóvenes y su participación en el ámbito más amplio de la sociedad.

Este estudio propone la hipótesis de que un factor cultural que está cambiando aceleradamente entre los jóvenes de principios del siglo XXI es el desgaste de la conciencia del pasado como patrimonio común, como resultado del deterioro de la calidad de la función educativa, de los efectos culturales que ha tenido el vuelco neoliberal de los gobiernos desde mediados del decenio de 1980 y de los estilos de vida y valores de la modernidad. Los niños y niñas nacidos en esa década fueron las primeras generaciones en cuya formación cultural fueron determinantes los recién aparecidos juegos electrónicos con sus paradigmas de predominio de la fuerza, la destrucción y la violencia. La televisión y el cine reproducen y amplifican esos mensajes.

Hay diferencias muy marcadas entre la idiosincrasia de los jóvenes de mediados del siglo XX y los de los primeros lustros del XXI. Aunque aquéllos no vivieron la Revolución Mexicana ni habían nacido en tiempos de la expansión cultural de finales del Porfiriato y los decenios de 1920 y 1930, se reconocían a sí mismos en esos acontecimientos, los entendían como parte de su identidad y se sabían beneficiarios directos de los avances económicos, sociales y culturales del país.

Es probable que la revolución de las telecomunicaciones y el desarrollo de aptitudes para utilizar los modernos artefactos de comunicación entre los jóvenes, hayan profundizado el conflicto transgeneracional en comparación con las diferencias entre jóvenes y adultos que eran habituales hasta el tercer cuarto del siglo XX.

Debido a la formación, la información y la actitud crítica que le dio la universalización de la educación básica y la expansión de los niveles medio y superior, esa juventud desarrolló necesidades y demandas democráticas que se reflejaron en importantes movimientos de insurgencia sindical, agraria y de clase media, y culminaron en el movimiento estudiantil de 1968. La juventud de esos años tenía distancia con las generaciones previas, pero entendía y valoraba los aportes políticos, económicos, sociales y culturales de sus padres y abuelos.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Los jóvenes de nuestro tiempo, por su parte, no vivieron ni imaginan las tensiones de la Guerra Fría y la formación de zonas de influencia de los dos polos militares, económicos y políticos del mundo; no les asombra la colocación en órbita del primer satélite artificial o la llegada del hombre a la Luna. La caída del Muro de Berlín y la transformación de todos los equilibrios del poder mundial no son para ellos más que vagas referencias. No hay avances tecnológicos que los impresionen y ven el surgimiento de nuevos artefactos y su efímera vida útil como algo cotidiano, casi natural.

A pesar de las copiosas campañas publicitarias desplegadas con motivo del bicentenario del inicio de la Independencia y el centenario del inicio de la Revolución, porciones importantes de jóvenes son indiferentes a la historia de México, y este fenómeno debería entenderse como un riesgo para la identidad nacional.

Los jóvenes de hoy nacieron en los últimos quinquenios del siglo XX y tomaron conciencia de sí mismos y de su entorno en una realidad tecnológica radicalmente distinta a la que vivieron las generaciones anteriores. Aunque sea por este solo hecho, les resulta difícil comprender la lentitud con que suelen reaccionar sus padres ante las innovaciones que apenas salen al mercado entran en la obsolescencia porque ya está preparándose el lanzamiento de nuevos modelos de todas las cosas. Las nuevas generaciones no conciben que las que les precedieron hayan tenido una extensísima gama de actividades económicas de reparación de aparatos y toda clase de utensilios. Este fenómeno contribuye a profundizar el abismo de comprensión entre los jóvenes y sus progenitores y educadores.

No es extraño, en estas circunstancias, que los jóvenes encuentren refugio en la “conexión” con sus semejantes a través de medios electrónicos que ya no sólo cumplen la función de proveer de modernas telecomunicaciones a la sociedad, sino también de servir como válvulas de escape para las frustraciones de la soledad y narcóticos tecnológicos para los hondos conflictos existenciales de los hombres y mujeres jóvenes de todas las condiciones sociales. Aquí y en el resto del mundo.

La disponibilidad de las nuevas tecnologías de la información para los jóvenes está diferenciada por estratos socioeconómicos y por peculiaridades regionales. Los efectos de la televisión, la telefonía celular y la Internet son diferentes en los diversos ámbitos socioeconómicos y

culturales inmediatos: a pesar de la uniformidad cultural que generan los medios, son distintos los jóvenes que viven en las áreas urbana y rural, los que tienen una profesión o son obreros calificados y los que no han completado su enseñanza básica, los que viven en los distintos estratos de la pobreza, las clases medias y los grupos de altos ingresos.

En las ciudades, las familias de ingresos altos e intermedios cuentan con telefonía fija, telefonía celular y acceso a Internet; los jóvenes de clase media con menores ingresos e incluso una porción de jóvenes de familias con ingresos insuficientes, suelen participar en las redes sociales ya sea a en establecimientos que rentan computadoras conectadas a Internet o por medio de mensajes escritos que se cruzan a través de la telefonía celular. No conocemos un cálculo sobre los ingresos de las empresas de telefonía móvil en México, pero deben de ser muy elevados habida cuenta de la gran cantidad de jóvenes de apariencia humilde que la utilizan y pagan por ello tarifas desmesuradas en comparación con las de otros países. Es posible que sólo los niños y jóvenes indigentes estén enteramente privados del acceso, así sea ocasional, a los nuevos medios de comunicación.

En el medio rural, el uso de la telefonía celular es menos intensivo, pero aun así, se ha extendido con rapidez inusitada. Es probable que estén completamente al margen de estas tecnologías únicamente los jóvenes de familias que viven en los estratos inferiores de la clasificación de la pobreza, como los habitantes de miles de localidades escasamente pobladas, no comunicadas y dispersas por todo el país, como las comunidades indígenas y las de pequeños poblados más o menos incomunicados.

Éstos y otros factores determinan que entre los jóvenes mexicanos existan hondas disparidades de comprensión del mundo, la vida, la sociedad y la autoridad, y que sea tan diversificado el mosaico de sus expectativas, demandas y perspectivas reales de futuro. Se puede asumir, sin embargo, que existen algunos fenómenos comunes que afectan a los jóvenes al margen de las circunstancias específicas de cada grupo.

Sería un error considerar que las innovaciones tecnológicas en el campo de las telecomunicaciones son sólo enajenantes e inhiben la formación de la conciencia social juvenil. Los cambios políticos que estallaron a principios de 2011 en el norte de África y la insurrección juvenil efímera pero efectiva que tuvo lugar poco después en España, demuestran que los modernos medios de comunicación, autónomos respecto al poder

Jóvenes: una generación que podríamos perder

político y parcialmente respecto al económico, han sido claves para la organización de grandes masas de jóvenes que manifiestan su hartazgo con las viejas élites del poder y que han abierto nuevos cauces históricos para sus respectivos países. Aún no sabemos si esos brotes de insurgencia juvenil concluirán en transformaciones políticas, sociales y económicas de fondo ni cuál será la dirección de esos cambios

En México, las redes sociales están tomando espacios propios en la arena política nacional y pueden ser vehículos eficaces para el avance democrático y la solución de antiguos y nuevos problemas que tienen en vilo a la sociedad. A través de esas redes, la sociedad ha empezado a convocarse a sí misma en respuesta a fenómenos agobiantes, como la violencia asociada al crimen organizado y su combate, que ha cobrado decenas de millones de víctimas, la mayor parte de ellos con edades inferiores a los treinta años. No obstante, el contenido del grueso de los mensajes electrónicos es trivial, lo que podía entenderse como una defensa de los jóvenes frente a la adversidad de la vida real.

Aquí, como en otros países, tanto el comercio organizado como la política han encontrado nuevos y poderosos medios de persuasión en las redes sociales, al grado de que en los primeros meses de 2011 el gobierno federal decidió que cada una de sus dependencias tuviera su propio twitter y los medios tradicionales, incluidos la televisión y la radio, han encontrado en esas redes nuevas fuentes de información.

Como es comprensible, estas novedades han pasado rápidamente a formar parte del instrumental de los jóvenes para comunicarse entre ellos mismos y con los demás, al tiempo que contribuyen a la expansión del monopolio que concentra los ejes troncales de telefonía por los que tienen que transitar los millones de mensajes que cruzan diariamente el espacio cibernético. La adaptación de los adultos ha sido más difícil y en los segmentos poblacionales de mayor edad, casi penosa, al grado de que muchos se han resignado a marginarse de la nueva realidad tecnológica.

Pese a sus dramáticas disparidades, son notorias las características comunes a los jóvenes de distintos ámbitos socioeconómicos y culturales. Una de ellas es su marcada tendencia a diferenciarse de los adultos a través del atuendo, el lenguaje, las costumbres, la formación de comunidades reales y virtuales de personas con edades e intereses similares, entre las que encuentran aceptación y valoración.

Aunque no se dispone de encuestas que cuantifiquen el fenómeno, es perceptible que entre los valores y aspiraciones de los jóvenes de principios de siglo predominan el deseo de ganar dinero, prestigio en el medio social en que viven y sentido de pertenencia a grupos con los que se identifican. Se advierte también el predominio de arquetipos con perfiles del crimen organizado.

La música popular se ha convertido en un medio formidable de formación cultural y creación de arquetipos. Frente a estos fenómenos, la familia y la escuela están en retirada en este aspecto esencial de la formación de la juventud. El contraste puede explicar en parte el debilitamiento de los valores cívicos fundamentales: la honestidad, la justicia, la laboriosidad, el respeto a las leyes y a las personas. Los valores -y antivalores- son reproducidos con tenacidad por los medios de comunicación, cuya influencia sobre la formación de actitudes y concepciones del mundo y de la vida ha rebasado e incluso penetrado a la familia y a la escuela como fuentes de aculturación. El Estado parece haberse desentendido de su función culturizadora que después de la etapa armada de la Revolución se consideró fundamental y se puso a cargo de la escuela pública.

En la formación cultural de los jóvenes incide un complejo grupo de factores entre los que destaca el acentuado individualismo, que es producto, tanto de la ausencia de oportunidades, como de lo que podríamos denominar “autismo” propiciado por los artefactos electrónicos, cuyos contenidos promueven el culto a la violencia, la velocidad y lo efímero. Este fenómeno, sin embargo, tiene como contraparte la proliferación de redes sociales en las que se abordan problemas nacionales y que, como se ha demostrado en otras partes del mundo, pueden llegar a constituir una plataforma formidable de expresión y participación de los jóvenes en los asuntos públicos.

La publicidad y los contenidos de los programas de diversión que transmiten los medios en los países subdesarrollados promueven los modelos de consumo de los altamente industrializados, lo cual genera un doble efecto sobre la juventud de aquéllos: por una parte, funcionan como válvulas de escape de las carencias en que viven y, por la otra, crean necesidades de consumo que, por insatisfechas, los empujan a la frustración.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Las fantasías consumistas se enfrentan a una realidad social de miseria, desigualdad, desplazamientos por motivos económicos o de inseguridad, violación sistemática de sus derechos humanos y los de grupos vulnerables, segregación, brutalidad policiaca contra los jóvenes, contaminación ambiental, incertidumbre, violencia, miedo y desaliento que se va generalizando.

La contradicción entre las condiciones materiales de vida de las familias de los países pobres y la persistente exhibición de satisfactores reales o supuestos que aparecen en los medios, provoca en la juventud sentimientos de frustración y exclusión, una suerte de apartheid que modela su cultura.

De esta manera, en el México del siglo XXI cohabitan -no necesariamente conviven- generaciones separadas no sólo por una “brecha” como en el pasado, sino por experiencias vitales y concepciones del mundo que tienden a ser ajenas entre sí.

Más allá del intercambio de culpas o responsabilidades, es claro que desde el último cuarto del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, las políticas económica y social han creado un entorno particularmente adverso para el desarrollo de los jóvenes, que son excluidos de instituciones fundamentales del país: la educación superior, el empleo en la economía formal; su atuendo y su lenguaje peculiar despiertan desconfianza en los sectores tradicionales de la sociedad y hostilidad e incluso persecución por parte de las corporaciones policiacas.

Las crisis recurrentes de la economía, con sus caudas de inflación intermitente, desempleo y privaciones; la crisis de seguridad que ha convertido a ciudades, caminos y entidades federativas enteras en lugares de extremo peligro; la crisis -o mejor, la degradación- de la representación política en todo el abanico ideológico y las crisis ambientales, forman un marco siniestro y amenazante para el desarrollo de la juventud de nuestro tiempo.

Los problemas nacionales han causado serias lesiones a la familia, el barrio y la comunidad, que conforman el entorno inmediato de la niñez y la juventud. Los jóvenes, excluidos de instituciones fundamentales de la sociedad como la escuela y la actividad económica formal, son empujados a escapar por puertas falsas como la emigración, la informalidad, el nihilismo, la delincuencia o las distintas modalidades de la autodestrucción.

2. ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

Los jóvenes mexicanos, que en su mayoría pertenecen a familias de bajos ingresos, reciben el diario bombardeo de programas de la televisión estadounidense, como quedó dicho, y este solo hecho genera en ellos un alto sentimiento de frustración por el contraste entre los modelos de consumo que existen en otros países y las carencias, incluso de lo esencial, en las que ellos se desarrollan.

La “cultura” difundida por la publicidad predominante en México, refuerza este fenómeno por cuanto asocia el consumo de cualquier mercancía o servicio con una especie de “mundo feliz” que está reservado para aquellos que adquieran lo que se anuncia. Esta misma publicidad incide sobre los niveles no conscientes de los espectadores induciéndolos a hacer cualquier esfuerzo por obtener el bien o el servicio que se promueve y el premio de una atractiva mujer o un hombre joven y apuesto o incluso de un paisaje espléndido que se asocia a mercancías como los cigarros o las bebidas embriagantes.

Los efectos de estos factores tecnológico-comerciales se magnifican en una juventud que siempre ha vivido en crisis económicas y se ha desarrollado en entornos familiares afectados por la incertidumbre. En cinco o seis lustros, la economía mexicana ha crecido a tasas promedio inferiores al crecimiento de la población y en el primer decenio del siglo XXI tuvo el crecimiento menor de medio siglo, lo que significa una contracción permanente de la tasa de ingreso por habitante. En este tiempo, el aparato productivo nacional se ha fraccionado en lo que podríamos denominar “castas empresariales” con delgadas líneas de interconexión:

En la primera casta, están las empresas con tecnología de punta, muchas de las cuales son sucursales de consorcios transnacionales y funcionan con la lógica de sus respectivas matrices. También son extranjeros el capital y la lógica de operación de la casi totalidad del sistema de intermediación del ahorro -bancos y otras instituciones financieras-, uno de cuyos pilares es la virtual ausencia de regulación por parte de las autoridades. A este estrato pertenecen también los monopolios propiedad de grupos empresariales de nacionalidad mexicana - medios de

Jóvenes: una generación que podríamos perder

comunicación, alimentos, construcción, ramas exportadoras- que se han transnacionalizado y cuya lógica empresarial los induce a invertir en otros países en respuesta a las bajas tasas de crecimiento de la economía mexicana, la estrechez del mercado interno y los riesgos derivados de la delincuencia organizada. Dueños de la infraestructura de telecomunicaciones e invulnerables a la actividad regulatoria del gobierno, tímida en unos casos y parcial en otros, estos inversionistas se han convertido en poderosos grupos de presión frente al Estado y en factores decisivos en el ámbito político-electoral.

Una segunda casta empresarial está formada por las industrias pequeñas y medianas, que en su mayoría son propiedad de inversionistas mexicanos, padecen diversos grados de rezago tecnológico, son generadoras de empleos y, no obstante, carecen de suficientes recursos financieros debido a que la banca privada utiliza los recursos de sus ahorradores y depositantes preferentemente en créditos al consumo e hipotecarios.

Las empresas de esta segunda casta tampoco cuentan con apoyo gubernamental suficiente, ya que las instituciones de fomento industrial han sido sistemáticamente debilitadas, no son operadas con eficiencia o de plano han desaparecido. En los últimos lustros ha crecido la tendencia de este tipo de empresas a financiarse con sus proveedores, lo que traslada el problema a otras ramas de la economía, pero no lo resuelve.

En tercer término están las microempresas, que son las principales empleadoras pero operan en sectores de baja productividad y, en una alta proporción, son de carácter familiar y no tienen más fuente de financiamiento que el ahorro de sus propietarios y, en cierta medida, el crédito de sus proveedores. Estas mínimas organizaciones son principalmente prestadoras de servicios elementales -reparaciones, servicios personales, aseo, comercio vecinal, etcétera- y están en el margen de la economía.

Una cuarta casta corresponde a la economía informal: genera la mitad de los empleos y es una actividad multifacética, cuyo componente más visible es el comercio ambulante. En la informalidad tienen lugar prácticas ilegales, como la distribución y venta de productos “pirata”, que tienen mercado, tanto por los altos precios de los productos originales, como por los bajos niveles medios del ingreso personal disponible; también comercializan productos robados y mercancías de contrabando. El suministro de las mercancías ilegales que se venden en la vía pública está a cargo de extensas redes delictivas del crimen organizado, cuya

operación en masa sería imposible sin la corrupción y complicidad de las autoridades aduaneras, municipales y de otras ramas.

La última “casta” económica incluye actividades degradantes como la prostitución y la mendicidad, así como prácticas francamente criminales, como el tráfico de personas, armas y drogas, la venta de protección, los secuestros exprés y los secuestros en gran escala, la extorsión, el robo de automóviles y su venta en el mercado negro de refacciones y otras variadas actividades ilícitas. El manejo de esta modalidad económica suele estar a cargo de la delincuencia organizada, lo que revela los grados y formas extremas de abuso de las personas que están a su servicio.

Las modalidades más temibles del crimen organizado -tráfico de drogas, de armas, de personas, extorsión secuestros, etcétera- pueden considerarse como parte de este grupo empresarial, ya que implican inversiones y administración y dan ocupación e ingresos a porciones amplias de la Población Económicamente Activa.

Esta estructura viciosa de la economía mexicana es causa y efecto de la desigualdad expansiva, que tiene su principal expresión en la pobreza alimentaria en que se encuentran alrededor de 20 millones de personas y la pauperización de las clases medias creadas por el Estado de bienestar en el siglo XX, que ahora están en los límites estadísticos de la miseria.

La conducción política del país en los últimos decenios ha relegado a México en prácticamente todos los órdenes: la economía, el empleo, el mercado interno, las finanzas públicas, la distribución del ingreso y el bienestar, la seguridad pública, la educación, la salud, la presencia internacional. Estos fenómenos han desembocado en la descomposición de la familia, entre cuyas características está la violencia intrafamiliar, el abuso, las adicciones, la insalubridad, el hambre y el saldo inevitable de desesperanza y pérdida de toda forma de autoestima para los integrantes de la familia, pero con especial rigor para las mujeres, niños y jóvenes.

Se conoce como Desarrollo Estabilizador a la política económica que derivó en tasas medias de crecimiento anual del PIB de 6.7 por ciento con un ritmo promedio de inflación de 2 por ciento anual. Entre los grandes objetivos de esta política estuvo la industrialización del país, fincada en el manejo de los sectores estratégicos por parte del Estado y en la operación de un amplio entramado de instrumentos de fomento agropecuario e industrial. La generación masiva de empleos derivada de

Jóvenes: una generación que podríamos perder

las nuevas inversiones fortaleció el mercado interno a largo plazo y el estímulo a la demanda nacional retroalimentó el proceso. En el entorno latinoamericano se desarrollaba el “modelo de sustitución de importaciones” diseñado por la CEPAL para impulsar el llamado “crecimiento hacia adentro” como el ocurrido en México.

El desarrollo económico, junto con la educación, la salud, la garantía del abasto de alimentos a precios accesibles, la vivienda y otros programas sociales que propiciaron la mejora permanente de las condiciones materiales de vida de las familias, hizo que varias generaciones de jóvenes tuvieran una calidad de vida superior a la de sus padres y abuelos, lo cual propició el desarrollo humano antes de que se generalizara este concepto y vinculó las posibilidades de ascenso en la pirámide socioeconómica al esfuerzo individual.

La generación marcada por el movimiento juvenil de 1968 disfrutaba del auge económico pero, debido a los niveles más altos de información y capacidad crítica que los de sus padres, organizó una protesta civil contra el autoritarismo gubernamental que derivaba tanto de la debilidad de otras opciones político-partidarias del país como de la ya para entonces larga permanencia en el poder de un solo partido, en un entorno de apertura de la información que sería preámbulo de la llamada revolución de las telecomunicaciones del último tercio del siglo XX.

Los jóvenes nacidos entre los años ochenta y noventa del siglo pasado no han tenido oportunidades materiales equivalentes sino que, por el contrario, su período de vida consciente ha transcurrido en medio de crisis recurrentes de la economía y tasas muy bajas e inestables de crecimiento del PIB, brechas crecientes de desigualdad social, polarización de los índices de distribución del ingreso y la riqueza y exclusión de grupos muy numerosos de la sociedad. Estas circunstancias han significado depauperación, marginación y discriminación muy acentuadas.

Estas generaciones vieron nacer una democracia que se mantiene estancada en una transición incompleta e incluso fallida, que conserva y exagera la cultura política del viejo régimen y ha extremado vicios como la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad, el desacato expansivo a las leyes y otros lastres que socavan a las instituciones y degradan la calidad de vida de las personas. Los jóvenes escuchan promesas pero su experiencia les dice que nada ha cambiado como no sea para empeorar:

ni la economía ni la democracia ni la política les han ofrecido las condiciones mínimas para su desarrollo.

Estos procesos han moldeado el pensamiento y las conductas de los jóvenes, que son las víctimas principales de la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza en todas sus gradaciones. Sus expectativas están minadas y eso debilita los vínculos sociales, desgasta e incluso invierte los valores y aniquila el interés por los asuntos públicos.

A ello se agrega que las políticas dirigidas a los jóvenes son marginales y no están orientadas a la solución de sus problemas reales, tanto económicos como laborales, educativos, de salud, sociales y culturales. Los gobiernos Federal y estatales no cuentan con una agenda en la que se enumeren, agrupen y jerarquicen los problemas, las políticas y los programas en esta materia.

Frente a este abandono, la juventud desesperanzada se ve atraída por el mundo siniestro de la delincuencia organizada que en varios sentidos ofrece sucedáneos perversos a las soluciones que el Estado es incapaz de generar: empleo (narcomenudeo, vigilancia de posibles víctimas de secuestro), capacitación para el trabajo (entrenamiento en el uso de armas de alto poder o en actividades profesionales de alta especialización como el lavado de dinero), cultura (antihéroes e incluso santos protectores de los delincuentes), autoestima (reconocimiento social en el entorno inmediato).

Frente a estos problemas, el Estado, sus instituciones y los valores tradicionales sólo ofrecen a la mayoría de los jóvenes frustración y desencanto, pues como lo ha observado insistentemente el rector de la UNAM, José Narro Robles, siete y medio millones de ellos no tienen acceso a la educación superior ni al empleo.

Estos procesos han moldeado el pensamiento y las conductas de los jóvenes, que son las víctimas principales de la desigualdad, la falta de oportunidades y la mayor pobreza. Sus expectativas están minadas, se debilitan los vínculos sociales y se propicia un creciente desapego a los asuntos públicos.

El problema para la parte no joven de la sociedad -niños, adultos y viejos- es en extremo grave, porque los grupos de población que viven en condiciones aceptables (empleo en la economía formal, satisfacción de las necesidades básicas, como alimentación, salud, educación, transporte) viven en islas de una normalidad en medio de un mar de degradación

Jóvenes: una generación que podríamos perder

humana que se expresa en formas extremas de violencia y crueldad, tanto entre grupos delictivos como entre ellos y las fuerzas armadas. Cada vez con mayor frecuencia, los medios difunden casos de jóvenes y aun niños que han perpetrado decenas e incluso centenares de crímenes con lujo de crueldad, sin que las instituciones del Estado acusen recibo de síntomas tan alarmantes de la descomposición social. Esos fenómenos son acumulativos y después de cierto punto, desnaturalizan la cultura y envilecen la vida humana.

¿Cómo vivirán su vejez los adultos que hoy tienen menos de cuarenta años? ¿Cómo se conciliará el uso de proporciones crecientes de los recursos públicos en el combate directo a la delincuencia organizada con la asignación presupuestaria para fines pacíficos (educación, salud, seguridad social, inversión en obras de infraestructura, etcétera)? ¿Será de verdad imposible rastrear los circuitos de dinero sucio en el sistema financiero nacional y, a través de convenios con otros países, en los mercados mundiales?

El fraccionamiento de la economía en “castas” se expresa en la polarización del sector industrial con un extremo de modernidad de empresas filiales de consorcios internacionales y fuertes monopolios de inversionistas mexicanos, y otro de empresas pequeñas y medianas que operan con tecnología atrasadas y altos costos. La política industrial -si existe alguna- ha descuidado la formación de cadenas productivas en las que las empresas medianas y aún las pequeñas abastecen a las más grandes de piezas, partes y refacciones y, a su vez, compran materias primas y productos intermedios a empresas de menor complejidad tecnológica y densidad económica.

La ausencia de una política industrial ha propiciado que los bienes de consumo producidos en México tengan elevados contenidos de importación, lo que esteriliza las medidas que tome el Estado para impulsar significativamente la inversión y fortalecer el mercado interno si antes no impulsa la formación de cadenas industriales, pues en las condiciones actuales, un incremento apreciable de la inversión física y la demanda interna podría causar serios desajustes a la balanza comercial porque entrañaría aumentos de importaciones no compensados con exportaciones.

Otra limitación al circuito producción-mercado interno que propicie la productividad y competitividad de empresas mexicanas productoras

de bienes de consumo, es que las mercancías mexicanas que habitualmente consumen las clases medias altas han sido desplazadas dentro de los propios establecimientos comerciales del país por la oferta de mercancías apoyadas por campañas publicitarias internacionales. Esto produce un fenómeno perverso en el que la apetencia del consumidor interno por artículos “de marca” invalida los viejos paradigmas de la calidad, el precio y los servicios al cliente como recursos principales para competir. La necesidad de consumir este tipo de productos por parte de grupos de ingresos medios bajos, ha dado lugar al florecimiento de las industrias de piratería.

Algunos datos recientes ilustran la situación por la que atraviesa la economía del país y la manera como afecta a los segmentos más desprotegidos de la sociedad y, en especial, a los jóvenes. El ingreso medio de las familias disminuyó en poco más de 12 por ciento entre 2008 y 2010 y las mejoras marginales en el Índice de Gini se explican por la caída de los ingresos de las clases medias; la desigualdad es tal, que la cuarta parte de la población apenas puede adquirir bienes básicos de subsistencia y la población mexicana que vive en Estados Unidos alcanza ya la cifra de 12.7 millones de personas. En el primer decenio del siglo XXI, el PIB creció a una tasa promedio de 1.8 por ciento anual mientras que el ingreso por habitante apenas lo hizo en 0.6 por ciento cada año; para apreciar el significado real de esta última cifra, debe tenerse presente que los promedios ocultan las diferencias entre grupos de ingresos desmedidamente elevados y aquellos que viven por debajo de la línea de subsistencia. La tasa abierta de desocupación en el período enero-abril de 2011 fue de 5.1 por ciento, cifra equivalente a la de 2009, cuando aún el país padecía los peores efectos de la Gran Recesión.

En tales circunstancias, la economía no tiene capacidad para generar empleos suficientes, permanentes y de buena calidad en el sector formal, por lo que son escasas las posibilidades de disminuir significativamente la cifra acumulada de desempleo, a la que se suman cada año cerca de un millón de jóvenes que alcanzan la edad de trabajar. Según datos del INEGI, sólo el 26 por ciento de los jóvenes que llegan a la edad de trabajar encuentra empleo en el sector formal de la economía.

La sociedad no sólo se ha hecho incapaz de ofrecer empleo a sus jóvenes y certidumbre económica a las familias, sino que tampoco ha podido dotarlos de las habilidades y aptitudes mínimas necesarias para

Jóvenes: una generación que podríamos perder

la vida decorosa en el mundo del siglo XXI, pues mientras que la educación básica es pedestre en lo general, la media y superior están atrapadas entre la presión de una población joven muy numerosa y la insuficiencia de recursos presupuestales, sin contar con sus propios cánceres como el burocratismo, el sindicalismo degradado, la corrupción y otros. Es evidente que los grupos dirigentes no se han interesado en el carácter estratégico, casi de supervivencia social, que tiene la educación suficiente y de alta calidad para la viabilidad de la nación, o que son indiferentes frente a estos problemas.

La economía mexicana no crece o lo hace débilmente y la política económica ha renunciado al fin original de la economía, que es satisfacer las necesidades de las personas, para volcarse en la lógica perversa del mercado, que no es sino un pretexto, una mentira en la que se sustenta la acumulación inimaginable del ingreso en grupos pequeños, la transferencia del excedente económico a los monopolios y a los consorcios extranjeros, que ya controlan el sistema de pagos del país, participan en el sector Energía gracias a una legislación hecha a modo y a mecanismos legales y reglamentarios que ocultan las violaciones a la Constitución. La apertura de rendijas de dudosa legalidad a la inversión privada en áreas reservadas en exclusiva al Estado, aún no es suficiente: los grandes intereses económicos cabildean intensamente en las esferas del poder o sus personeros mismos ocupan cargos públicos para romper, mediante subterfugios legales, las últimas barreras a la exclusividad de la explotación de los hidrocarburos por parte del Estado.

Éste es el resultado de dos procesos relativamente recientes.

El primer proceso, iniciado a mediados de los años 1980 y llevada a sus últimas consecuencias en el último decenio del siglo XX y el primero del XXI, ha consistido en la supresión del modelo de economía mixta para implantar una política económica que no es tal, pues consiste en la anulación del Estado como agente económico e incluso como regulador, para limitarse a las funciones de policía entre los competidores, tal como lo establece el decálogo de medidas conocido como “Consenso de Washington”.

Este recetario, pensado durante la crisis de la deuda externa para garantizar que los países endeudados cubrieran sus obligaciones, se ha convertido en dogma de fe para los gobernantes recientes y ha implicado el desmantelamiento de las instituciones de fomento económico y el

cambio de una política social que vinculó la educación con la producción y el empleo por otra de corte asistencialista que distribuye dinero entre los grupos de menores ingresos, a menudo con criterios clientelares y fines electorales.

El otro proceso fue la venta a firmas extranjeras de las empresas industriales que fueron creadas en el auge del ciclo largo con base en una cuádruple protección: comercial (barreras a la importación), sectorial (el excedente agrícola se usó para desarrollar la industria a través del mecanismo de precios), factorial (a cargo del sindicalismo oficial que se ha enquistado en la sociedad) y social (el abasto de alimentos baratos para mantener el poder de compra de los salarios). Los antiguos industriales mexicanos se han convertido en representantes o distribuidores de empresas extranjeras en México.

Estos procesos se suman a los cambios constitucionales y legales que condujeron a acabar literalmente con los ejidatarios, comuneros y pequeños agricultores para constituir plantaciones modernas orientadas a la exportación, urbanizar las tierras agrícolas colindantes con las ciudades para elevar exponencialmente sus precios y desintegrar los instrumentos de fomento del Estado al desarrollo agropecuario

Los jóvenes campesinos emigraron y emigran a las ciudades, ya sea para hacer trabajos de servidumbre, engrosar el comercio ambulante o dedicarse a la mendicidad, la prostitución y otras actividades de igual corte. Los más arrojados ingresan irregularmente a Estados Unidos o emigran temporalmente a países como Canadá.

El narcotráfico en particular, y el crimen organizado en general, ofrecen una salida falsa, pero salida al final de cuentas, a los jóvenes que carecen de todo, incluso de futuro. Éste es un fenómeno mucho más grave de lo que a primera vista aparenta, pues significa que la delincuencia organizada está cubriendo -con los fenómenos de descomposición social y de valores que ello entraña- importantes espacios que ha abandonado el Estado en las funciones que le asigna la Constitución de rector de la economía.

3. DESEMPLEO

La presión de cantidades ingentes de jóvenes sobre el mercado de trabajo es consecuencia de las altas tasas de natalidad y la caída vertical de las tasas de mortalidad en la segunda parte del siglo XX frente a una oferta mínima de empleos en el sector formal de la economía. La demanda juvenil de nuevos puestos de trabajo ha saltado drásticamente en medio siglo: de unos 340 000 jóvenes que se sumaban anualmente al mercado de trabajo en los años 1960, la cifra media más que se duplicó en veinte años, al llegar a los 830 000 en el decenio de 1980 y se estima que en la actualidad es de aproximadamente un millón de jóvenes por año.

Las políticas de inducción al control de la natalidad, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, los cambios en la composición y dinámica de las familias y las transformaciones culturales impulsadas por el desarrollo de las telecomunicaciones disminuyeron significativamente el ritmo tradicional del crecimiento natural de la población, pero como los niños de los años ochenta se convirtieron en jóvenes y adultos al final del siglo XX y el inicio del XXI, la pirámide de edades se ha reducido en su base y se han ensanchando los segmentos de jóvenes y adultos jóvenes.

La incorporación al mercado de trabajo es una de las transiciones más trascendentes y difíciles en la vida de los jóvenes, pues no sólo entraña asumir responsabilidades sin precedentes en el empleo, ante la familia y ante la sociedad, sino que deriva de la necesidad de obtener ingresos para sostener a la familia o para contribuir a su manutención. Este cambio es mucho más drástico para los jóvenes que, en los años de su inserción al mundo laboral, acometen una segunda y fundamental transición: la vida en pareja, que habitualmente continúa con la procreación de hijos y la obligación de proporcionarles sustento, salud, educación y la satisfacción de una variada gama de necesidades.

Estas dos transiciones tienen efectos de gran calado en la personalidad de los jóvenes, pues significan el paso definitivo de un mundo en el que las principales responsabilidades recaían en los padres, a otro en el que deben asumirlas ellos mismos, habitualmente sin una adecuada

preparación y con fuertes incertidumbres de la más diversa índole. Esta etapa de la vida, que en México se ubica en una banda de los 18 a los 25 años, en promedio, conlleva retos mayores para los jóvenes que forman su propia familia que para los que permanecen en el hogar paterno.

En general, los procesos de cambio son diferentes en los varones que en las mujeres, porque éstas son responsables de la administración del hogar y la educación de los hijos y, con frecuencia creciente, tienen que cumplir, además, la función de proveedoras, sea porque son madres solteras o porque tienen que complementar los ingresos insuficientes de su pareja.

Pese a que no ha aumentado la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo, se han incrementado notablemente las tasas de desempleo juvenil a consecuencia de una política económica que durante lustros ha renunciado a promover la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas agrícolas e industriales. La crisis financiera internacional de 2008-2009, la aguda recesión que la siguió y la negativa del gobierno a aplicar políticas anti-cíclicas, agravaron considerablemente este fenómeno.

Las oportunidades de empleo son aún menores entre los adolescentes, las mujeres y los jóvenes de uno u otro sexo con grados más altos de estudios, especialmente en el medio urbano.

El Consejo Nacional de Población² dice lo siguiente:

A finales de esta primera década del nuevo milenio, aproximadamente 60 por ciento de los jóvenes ocupados reciben menos de dos salarios mínimos. En el caso de los adolescentes esta situación es aún más grave, ya que 25.4 por ciento de ellos no recibe ingresos y el resto recibe menos de dos salarios mínimos. Entre los adultos jóvenes, 9.3 por ciento no recibe ingresos (casi tres veces menos que los adolescentes) y 75 por ciento percibe menos de tres salarios. La menor percepción de ingresos de los adolescentes ejemplifica claramente las grandes desventajas a las que esta población se expone si se incorpora al mercado de trabajo cuando, idealmente, debería estar estudiando.

² *La situación actual de los jóvenes en México. Serie de Documentos Técnicos.* Primera edición: Agosto 2010. ISBN: 970-628-957-7

En general las mujeres jóvenes perciben menos ingresos que sus contrapartes masculinos, pues son mayoría en las actividades peor remuneradas y minoría entre las más redituables. Esta situación puede tener origen en una inserción laboral femenina menos ventajosa en términos del sector productivo y la posición laboral en la que se emplean, pero quizá también en la discriminación salarial que aún existe entre sexos, sobre todo cuando se observa, por un lado, que no existen diferencias respecto a la posición en el trabajo que ocupan ambos sexos, y, por el otro lado, que las mujeres están insertas en ramas de actividad que, tentativamente, tienen mejores condiciones laborales (comercio y servicio).

Teniendo en cuenta la necesidad que tiene el país de elevar no sólo el perfil académico sino también laboral y económico de la población, para aprovechar de manera amplia y eficiente las condiciones favorables que puede generar el llamado “bono demográfico”, las circunstancias descritas en este capítulo permiten suponer que los esfuerzos en este sentido deberán ser mayúsculos si se espera obtener beneficios de este momento de oportunidad.

Estas tendencias obedecen a diversos factores, entre los que destaca el considerable rezago tecnológico de las empresas medianas y pequeñas que las induce a contratar mano de obra no calificada y significativamente más barata que la de mayor preparación; los agudos desniveles en la calidad de la enseñanza entre distintas instituciones de educación superior, principalmente privadas, que son auténticas fábricas de títulos profesionales para jóvenes sin la información, habilidades y aptitudes mínimas; y, en el otro extremo, la existencia de instituciones educativas muy costosas que son semilleros profesionales para las grandes empresas monopólicas y los cuadros dirigentes de la política, así como las sucursales de consorcios internacionales que se rigen por la lógica de las matrices en el extranjero.

El desempleo entre los jóvenes es socialmente más devastador de lo que podría suponerse a primera vista, por una parte, porque los hombres y mujeres menores de cuarenta años constituyen el grueso de los jefes de familia y, por lo mismo, son el sostén material de los niños y los viejos. En segundo lugar, porque la falta de un espacio en la educación y en la economía formal erosiona la autoestima, produce inestabilidad emocional, debilita aún más a la institución familiar y estrecha el mercado

interno en un proceso perverso que se alimenta a sí mismo y tiende a perpetuarse. Este fenómeno afecta directamente a los jóvenes, pero no sólo a ellos, sino a la sociedad en su conjunto en la que participan y a la que sostienen.

En ausencia de opciones, cientos de miles de jóvenes desempleados se ven forzados anualmente a incorporarse al trabajo informal sin salario en los micro-negocios familiares de supervivencia y la emigración indocumentada hacia Estados Unidos. Se ha observado una tendencia creciente a la emigración de los jóvenes emprendedores y los mejor preparados hacia países desarrollados, lo que significa una hemorragia permanente de talentos y la pérdida del capital humano formado con recursos públicos escasos. Se ha creado un mercado internacional de talentos y los países desarrollados han puesto en operación políticas específicas para atraer a los jóvenes calificados de las naciones subdesarrolladas: la pobreza subsidiando a la riqueza.

Para los egresados de licenciatura e incluso de maestría, las oportunidades de obtener una beca o un financiamiento para continuar sus estudios de posgrado en el exterior se han convertido en un paso hacia la emigración definitiva, debido a la insuficiencia de fuentes de trabajo, los requisitos de experiencia que imponen los empleadores y el bajo nivel de los salarios para el trabajo profesional en México, así como por otros factores de expulsión como la inseguridad pública en estados y ciudades de alto desarrollo económico. A ello se suma el prestigio de numerosas universidades de Estados Unidos y Europa como formadoras de profesionistas e investigadores científicos y tecnológicos de alta calificación. De las 20 mejores universidades del mundo, 13 se ubican en los países desarrollados.

De acuerdo con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, cada año se gradúan 450 mil estudiantes en las universidades e instituciones de Educación Superior del país y, de ellos, emigran anualmente a Estados Unidos 15 mil profesionistas en busca de empleo. Presumible los emigrantes son los de más altas calificaciones. "Si ingresan (a Estados Unidos) 14 mil o 15 mil (profesionistas) anuales y egresan 450 mil jóvenes al año de las universidades, sigue siendo una proporción relativamente

pequeña, aunque ya acumulado no estamos hablando de cifras menores".³

Según la misma fuente, en Estados Unidos residen 865 mil profesionistas de origen mexicano; poco más de la mitad cuentan con licenciatura, cerca de un tercio son técnicos superiores universitarios y 14 por ciento tienen maestría o doctorado, "Aproximadamente uno de cada tres profesionistas son hijos de estadounidenses o están naturalizados, lo cual revelaría que es una migración de muchos años atrás; 2 de cada 3 son todavía mexicanos residentes en EU. En las universidades y los mercados de trabajo europeos participan unos 12 mil 500 jóvenes mexicanos".

Las perspectivas de empleo profesional en México son tan deplorables, que muchos de los profesionistas que emigran a Estados Unidos se ocupan de actividades rudimentarias –jardinería, trabajo doméstico y otros servicios no calificados– en los que reciben ingresos más altos que los disponibles en México. Según el subsecretario Tuirán, el ingreso medio de los profesionistas en el país varía entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales.

El problema, sin embargo, no parece preocupar demasiado a las autoridades educativas, pues de acuerdo con el citado funcionario, el concepto de fuga de cerebros, que se utilizaba en los años 1960 y 1970 ha entrado en desuso. "Ahora se habla de circulación de talentos que es un concepto más positivo, porque el desarrollo de los medios de comunicación ha permitido que una persona se mueva, permanezca algunos años en la sociedad de destino, se enriquezca de muy diversas maneras a través de experiencias profesionales, de especialización, y después regrese a su país".

Otra opción para los jóvenes desempleados es el comercio ambulante y en establecimientos semifijos, que distribuyen productos "pirata" y mercancías ingresadas al país de contrabando o robadas. El medio social y cultural en el que transcurre esta modalidad del comercio reproduce el desdén por la ley y el rencor hacia una sociedad que excluye a los jóvenes y los orilla a ocuparse en actividades que en amplias áreas de la sociedad se consideran indignas, lo cual se traduce en una baja autoestima de los jóvenes y propicia su tránsito hacia actividades delictivas, al principio casi inocuas, pero cuya gravedad va creciendo en poco tiempo.

3 Reforma. Mayo 3 de 2010. Entrevista de Rodolfo Tuirán con Sonia del Valle.

³ *Ibidem. OJO*

El narcotráfico en gran escala y el narcomenudeo, la extorsión a pequeños comercios, el secuestro y el secuestro exprés, la extorsión telefónica, el robo de autos y el tráfico de piezas y refacciones, el asalto en la vía pública y en hogares, etcétera, se han convertido en fuentes de empleos –ilegales, pero empleos– quizá mejor pagados y más atractivos que los del comercio ambulante, hecho que no sólo favorece a la delincuencia sino que obliga a las instituciones del Estado a destinar mayores volúmenes de recursos a la seguridad pública con resultados adversos, tanto desde el punto de vista monetario (costo-beneficio) como humano. Además, los efectos del desempleo y la no escolaridad en el ánimo y actitud de los jóvenes lesionan la unidad nacional y producen una percepción del Estado y la política como entes perniciosos, inútiles y costosos.

Para la sociedad en su conjunto, el desempleo de los jóvenes provoca índices más altos de inseguridad pública, disgregación, desconfianza y miedo como pautas de convivencia social y expansión del desaliento y el pesimismo. Además de las vías de escape que encuentran en la delincuencia, la emigración y la autodestrucción material o psicológica y espiritual.

4. POBREZA

Dos rasgos distintivos de la historia de México han sido el rezago de su economía y la desigualdad social. Lo primero fue consecuencia de la condición tributaria del virreino de las colonias americanas a favor de la metrópoli y lo segundo se debió a que desde el final de la Conquista se estableció una segmentación inflexible de la sociedad, en cuya cúspide estaban los españoles peninsulares y en el escalón más bajo de la pirámide, los indios.

A diferencia de los emigrantes que poblaron las trece colonias originales en América del Norte, los españoles no se plantearon construir su vida en el nuevo continente -aunque muchos de ellos acabaron por asentarse definitivamente en estas tierras- sino aprovechar sus abundantes recursos naturales en beneficio de la Corona, que estaba representada por la nobleza, el alto clero y los jefes militares, y en beneficio propio. Hacia finales del siglo XVIII Nueva España era la región más próspera, al grado de que no sólo enviaba riquezas a la metrópoli sino también a otras colonias, como Perú y Cuba. Once años de guerra de Independencia coincidentes con la ocupación francesa de España y su inestabilidad posterior, deprimieron el crecimiento económico.

Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros Bosch afirman que

En 1800 la Nueva España era una de las regiones relativamente prósperas del mundo, con un producto interno bruto per cápita equivalente a entre la mitad y las dos terceras partes del de Estados Unidos [...] Sin embargo, en las cinco décadas siguientes fue cuando México quedó dramáticamente rezagado de Estados Unidos. Entre 1800 y 1850 la tasa media de crecimiento anual del PIB real per cápita de Estados Unidos fue 1.1%, la del Reino Unido 0.8%, la de Brasil 0.4%, pero México sufrió una contracción promedio anual de 0.7% (Coatsworth, 1993)”⁴

⁴ Moreno-Brid, Juan Carlos y Ros Bosch, Jaime. Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva histórica. Fondo de Cultura Económica. México, 2010. ISBN 978-607-16-0302-9. P. 40.

El tránsito de la prosperidad de la Colonia a la precariedad de México independiente se debió principalmente a la destrucción de la infraestructura, la drástica disminución de las actividades económicas y la exportación masiva de capitales durante los once años de la Guerra de Independencia.

Desde el triunfo final de los conquistadores, la fractura de la sociedad fundada en criterios raciales y económicos, determina el destino de México como la tierra de tremendos contrastes entre pequeños grupos que concentran la riqueza y la gran masa de desposeídos. El estudio del economista mexicano Carlos Tello,⁵ es un auténtico compendio en el que se documenta la historia de México como la reseña de la desigualdad que ya existía en la sociedad pre-colonial pero que asumió dimensiones de tragedia durante los tres siglos de ocupación española y que, salvo períodos relativamente breves de mitigación, ha sido la constante en todas las etapas de la historia.

La sucesión de crisis-recesión de 1976 a 1995 y la llamada Gran Recesión Internacional de 2008-2009, exacerbada en México por la política de estabilización, han elevado los índices de la pobreza en sus distintas modalidades a niveles cercanos a los más agudos de la historia. En su más reciente estudio sobre la pobreza de ingresos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)⁶, sintetiza la situación de la siguiente manera:

De acuerdo con la información de la ENIGH 2008, en ese año, 50.6 millones de mexicanos eran pobres de patrimonio, es decir, no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y de transporte público, aun si dedicaran la totalidad de sus recursos económicos a este propósito.

Asimismo, 19.5 millones eran pobres alimentarios, es decir, quienes tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si los destinaran exclusivamente para ese fin. De los pobres alimentarios en 2008, 7.2 millones habitaban en zonas urbanas (localidades de 15,000 o más habitantes), mientras que 12.2 millones residían en el área rural.

5 Tello Macías, Carlos. Sobre la desigualdad en México. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2010. ISBN 978-607-02-1510-0.

6 <http://medusa.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/pobrezaporingresos.es.do>

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la pobreza de patrimonio -el porcentaje de personas pobres-, la cual pasó de 42.6% a 47.4%; a su vez, la incidencia de la pobreza alimentaria aumentó de 13.8% a 18.2%. En términos absolutos, el incremento fue de 5.9 y 5.1 millones de personas, al pasar de 44.7 a 50.6 millones de personas y de 14.4 a 19.5 millones de personas, respectivamente.

Entre 2000 y 2008, la incidencia de la pobreza de patrimonio y de la pobreza alimentaria se redujo 6.2 y 5.9 puntos porcentuales, respectivamente, lo cual se traduce en una reducción de 2.1 y 4.2 millones de personas pobres de patrimonio y alimentarios, respectivamente.

Para el periodo 1992-2008, la pobreza de patrimonio disminuyó de 53.1% a 47.4% y la alimentaria de 21.4% a 18.2%. A pesar de ello, se incrementó en 4.5 millones el número de personas pobres de patrimonio y en 880 mil el número de pobres alimentarios.

La desigualdad caracteriza a la sociedad en su conjunto y tiene efectos nefastos sobre la mitad de la población que vive en alguno de los grupos de pobreza y sobre las clases medias que se expandieron considerablemente en la segunda mitad del siglo XX y que al inicio del segundo decenio del XXI están en el borde de la pobreza debido, principalmente, a la incapacidad del sector formal de la economía para generar empleos suficientes, permanentes y dignamente remunerados y a la expansión la economía informal, lindante con lo ilícito. Todo ello en un trasfondo de violencia que es un problema grave en por lo menos la mitad de las entidades federativas y que se debe, tanto al aumento del narcotráfico derivado de la demanda creciente de drogas en Estados Unidos, como a la diversificación de las actividades delictivas resultado de la estrategia unidimensional de confrontación que ha atomizado las organizaciones criminales, las ha puesto en conflicto y las ha inducido a abrir el abanico delincencial hacia la extorsión, el secuestro y dos docenas más de modalidades del crimen.

En estas circunstancias, el tejido social se está desgarrando en diversas partes del país, lo que se expresa en el acentuado deterioro de la convivencia en las comunidades urbanas y rurales y la degradación de la institución familiar que asume dimensiones dramáticas en los grupos marginados de las ciudades, con las más diversas formas de abuso, violencia, alcoholismo, drogadicción.

Uno de los efectos más devastadores de la desigualdad que sufre la sociedad mexicana es que los jóvenes, que podrían ser factores activos para mejorar los índices de bienestar de sus familias y comunidades, se están desarrollando en circunstancias de deterioro acumuladas durante tres decenios. La violencia, sumada a la insuficiencia de espacios en la educación media superior y superior, la baja calidad de la enseñanza en la mayor parte de los planteles escolares y la falta de empleos generada por una política económica que privilegia la estabilidad y la considera antagónica del crecimiento, son el marco en el que transcurre la vida de la juventud mexicana en el siglo XXI.

El hacinamiento en los pequeños espacios habitacionales de las zonas urbanas ocasiona problemas de salud e higiene, conflictos entre miembros de las familias extensas y patologías emocionales que están entre las principales causas de la descomposición de la familia, las adicciones y la delincuencia común y organizada. En el origen están, no hay que olvidarlo, tanto la menguada capacidad de la economía para generar empleos, como la desigualdad expansiva y el cierre o venta de empresas mexicanas que no pudieron sobrevivir a la apertura comercial abrupta.

De los hogares en los que habitan jóvenes, dos de cada diez no pueden sufragar los gastos para la alimentación de la familia, cuatro de cada diez tienen problemas para costear sus requerimientos de vivienda, vestido y transporte y dos de cada diez no pueden satisfacer sus necesidades de salud y educación. Aunque la pobreza y los efectos sociales que ocasiona no se limitan a los jóvenes, en ellos, y aun en los niños y adolescentes, tienen un mayor potencial destructivo, pues al cerrarles las perspectivas de futuro, los convierten en una especie de ejército de reserva para las organizaciones delictivas.

Atrapados en la confusión y la incertidumbre que generan las diversas transiciones por las que atraviesan, numerosos jóvenes crecen en familias disfuncionales o desintegradas, padecen los métodos atrasados de enseñanza y, a menudo, la incompetencia o negligencia del personal docente; no tienen acceso a los escasos programas preventivos frente a riesgos como el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el sobrepeso, la drogadicción, la violencia familiar, comunal y social, la exclusión, etcétera.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

La precariedad económica y la desigualdad en la distribución del ingreso orillan a los jóvenes a uno de tres destinos: la economía informal que, por definición, desborda los márgenes de la legalidad (no pago de impuestos, distribución de mercancías piratas, robadas y de contrabando); la emigración a Estados Unidos, con la cauda de fraudes y abusos de los traficantes de personas, discriminación y hostilidad de los estadounidenses y persecución de las corporaciones policiacas, y como tercera opción, el “empleo” en el crimen organizado que les ofrece dinero, emociones y sexo a cambio de altos riesgos para su libertad y su vida.

En otro contexto, pero sobre el mismo problema, Pedro José Peñalosa observa que

[...] durante los años setenta y ochenta [del siglo pasado] apareció un nuevo actor social juvenil: el joven de las favelas, las colonias y los barrios populares. Ellos habían estado allí por mucho tiempo, pero ahora lograban mayores ámbitos de expresión y construían nuevas formas de recreación y de resistencia cultural, nuevos umbrales de adscripción identitaria. La respuesta social dominante trató de reducirlos a la imagen amenazante de delincuencia y crimen. Su persecución y acoso les permitieron desarrollar nuevos marcos de adscripción, definidos por referentes simbólicos de clase y generacionales [...]⁷

A pesar de todos los factores adversos, numerosos jóvenes tienen que proveer a sus familias de los bienes y servicios indispensables para sobrevivir. Una buena parte de las familias del campo y las ciudades se sostiene de las remesas que envían los trabajadores que emigran a Estados Unidos, aunque a partir de 2008 este renglón de ingresos se ha contraído por la escasez de empleo en el país vecino. Un buen número de jóvenes mantienen a sus familias con ingresos obtenidos en la economía informal, particularmente, en la más sencilla y peligrosa de esas actividades, que es el comercio ambulante; unos más trabajan sin salario o por salarios inferiores al mínimo, como ocurre en las grandes tiendas de autoservicio, en los trabajos domésticos y en el campo.

Como se ha dicho, los jóvenes que viven en la pobreza y en las clases medias de bajos ingresos, habitualmente no reciben los ingresos

7 Peñalosa, Pedro José. La juventud mexicana. Una radiografía de su incertidumbre. Editorial Porrúa. México, 2010. ISBN 978-607-09-0384-7

suficientes para sostenerse a sí mismos y a sus familias y menos aún para acumular activos; no disponen de lugares en las instituciones de educación superior ni en los mercados de trabajo de la economía formal, especialmente en las áreas rurales y semiurbanas y en las periferias decadentes de las ciudades. Al conjugarse todos estos fenómenos, se advierte que el país está transmitiendo la precariedad y la carencia de oportunidades reales de una generación a otra y perpetuando la pobreza.

Las condiciones de precariedad material, en muchos casos extrema, afectan las relaciones intrafamiliares debido a que generan conflictos emocionales que pueden conducir al abuso del alcohol y el consumo de drogas. Los hijos de esas familias saben que no tienen esperanzas de mejorar y tienen una autoestima muy devaluada, lo que se traduce en mal comportamiento en la escuela, menor capacidad intelectual ocasionada por la desnutrición crónica y bajo potencial para establecer relaciones sociales positivas.

De todo ello no puede sino concluirse que los rezagos acumulados representan una deplorable calidad de vida para los jóvenes, que se extiende a sus familias y que significa un fuerte obstáculo para el desarrollo actual del país y con mayor razón para sus perspectivas de futuro. Las políticas públicas de los últimos treinta años han creado una notoria exclusión de los jóvenes respecto a las instituciones del Estado y la sociedad. Si la familia y la comunidad inmediata están degradadas y ni la escuela ni la economía formal tienen espacios para ellos, es entendible que muchos jóvenes se sientan ajenos al orden jurídico e incluso a los valores básicos de una sociedad que los rechaza y tomen caminos que conducen a la destrucción de ellos mismos y al peligroso debilitamiento del país en su conjunto.

Como hemos visto, el bajo crecimiento de la economía y la injusta distribución del ingreso inciden negativamente sobre los jóvenes mexicanos, a lo que se agrega una gran cantidad de factores culturales y sociales que los afectan, como la insuficiencia y baja calidad de la oferta educativa, la carencia de empleos en el sector formal de la economía, los problemas sociológicos –y patológicos– asociados a la indigencia urbana y rural, entre otros. Estos factores son aún más intensos para los jóvenes indígenas debido a las precariedades del medio

Jóvenes: una generación que podríamos perder

en el que nacieron y crecieron y a las discretas pero indudables formas de discriminación.

Según las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años y más hablan alguna lengua indígena, cifra que representa el 6.5 por ciento de la población total; de ellos, poco más del 20 por ciento son jóvenes, casi 11 por ciento son adolescentes y algo más del 10 por ciento, adultos jóvenes. De acuerdo con datos de CONAPO, las entidades con mayor proporción de jóvenes indígenas son Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Yucatán, con porcentajes entre 23 y 20 por ciento

De la población indígena total, casi un millón de personas no hablan español. Debido a los fuertes rezagos económicos, educativos y culturales, así como a la exclusión social y la derivada de su aislamiento geográfico, las comunidades indígenas tienen una dinámica demográfica diferente a la de otros grupos poblacionales, pues en ellas se exageran fenómenos como las altas tasas de natalidad y tasas aún elevadas de mortalidad general e infantil, las emigraciones estacionales para el trabajo como jornaleros agrícolas, la emigración permanente hacia las capitales de los estados con altos índices de población indígena, o a la capital de la República y a Estados Unidos. La parte joven de la población tiene un papel central en todas estas fuerzas demográficas.

En el Distrito Federal, según la fuente censal, 122,411 personas son hablantes de alguna lengua indígena, principalmente náhuatl, otomí y el mixteco y, de ellos, 659 no hablaban español en 2010. A pesar de los problemas del área metropolitana de la Ciudad de México, como las formas degradantes de la pobreza, la capital de la república ofrece oportunidades de trabajo que la población indígena no encuentra en sus lugares de origen y ni siquiera en las capitales de sus estados. Uno entre muchos indicadores de esta situación es que mientras a nivel nacional el 25.8% de la población indígena carece de instrucción escolar, entre los habitantes indígenas del Distrito Federal el índice se reduce al 9%, lo que sugiere, por una parte, que la parte más escolarizada de las poblaciones indígenas tiende a emigrar, y por la otra, que los inmigrantes a la Ciudad de México se ven impulsados a la escolaridad porque así lo exige el mercado de trabajo, incluso en tareas que requieren mano de obra menos calificada.

La pobreza y los extremos de desigualdad en la distribución del ingreso, la educación, la cultura y los bienes de la civilización, que afectan directamente a la población joven, son males endémicos que han alcanzado cifras desmesuradas al inicio del segundo decenio del siglo XXI y que son la causa directa de fenómenos como la informalidad, la fuga de talentos y la inserción de los jóvenes en la delincuencia organizada, que sugieren la urgencia de buscar nuevas formas de organización de la economía y la sociedad en un período de la historia mundial que se conoce como la Sociedad del Conocimiento.

5. VIOLENCIA

Una de las enfermedades que han asumido niveles alarmantes en la sociedad mexicana es la violencia, que a veces expresa desesperación ante una realidad adversa contra la que no parece haber nada que hacer y en ocasiones es síntoma de patologías individuales y sociales, como el alcoholismo y la adicción al consumo de drogas. El hambre que se refleja en los índices crecientes de pobreza y la desarticulación de las clases medias a causa del desempleo y de la caída en picada de los salarios, son poderosos factores de desintegración social que afectan a esta parte de la población.

No es casual que las colonias más violentas de Ciudad Juárez sean aquellas que carecen de servicios públicos o los que tienen son insuficientes y de mala calidad, las que no cuentan con áreas verdes ni espacios para la recreación y convivencia comunitaria, que no cuentan con suficientes escuelas y donde nunca ha habido bibliotecas, museos, salas de teatro o centros promotores de las artes. Éste es el medio más propicio para la formación de pandillas infantiles y juveniles proclives a la violencia, muchas de las cuales se han convertido en comandos paramilitares al servicio del crimen organizado.

Son barrios relativamente recientes que surgieron por la súbita y fuerte presión demográfica provocada por la inmigración de trabajadoras empleadas en las empresas maquiladoras desde mediados del decenio de 1970, y que ya eran o se convirtieron en madres solteras. La condición de migrantes de estos grupos humanos y su rápida expansión hizo que los gobiernos municipales no les dieran un mínimo de atención ni los proveyeran de servicios públicos fundamentales, lo que explica las circunstancias deplorables que guardan en la actualidad.

Tal vez por consideraciones de este corte, los gobiernos estatal y federal no crearon escuelas, centros de salud, áreas de recreación y otros espacios indispensables para la convivencia comunitaria, todo lo cual propició el desastre urbanístico y humano que favoreció el arraigo de organizaciones dedicadas inicialmente al tráfico de drogas hacia el sur de Estados Unidos y que en la actualidad se especializan en decenas de mo-

dalidades delictivas. La circulación de dinero proveniente de la maquila y más tarde de las actividades delictivas, generó la rápida expansión de cantinas, bares, prostíbulos y establecimientos equivalentes.

Por motivos diferentes, en las ciudades de prácticamente todo el país han crecido cinturones de miseria con características como las descritas, que no hacen posible la convivencia comunitaria. Aunque el deterioro urbano y humano no ha alcanzado niveles comparables a los de las zonas donde se han asentado las organizaciones criminales, las carencias de servicios públicos y oferta educativa y cultural en todo el país, sumadas a la insuficiencia de empleos en el sector formal de la economía y la expansión concomitante del sector informal, constituyen el entorno adecuado para la descomposición de la institución familiar.

Esto último destruye a todos los integrantes de las familias pero afecta con mayor severidad a los más débiles: los niños, las mujeres y los jóvenes. Sumada a los factores mencionados, la violencia intrafamiliar en la que viven los niños y adolescentes determina su percepción del mundo y su escala valorativa cuando llegan a la edad juvenil. El abuso sexual en el hogar y la comunidad, la explotación laboral, las adicciones y la prostitución son lacras que los marcan para el resto de sus vidas.

El entorno económico y social adverso y el acceso permanente a los modernos medios de telecomunicación -internet, teléfono celular, etcétera- provocan la visión de dos realidades en conflicto: la que viven a diario los jóvenes, en especial los de condición socioeconómica más desfavorable, y la realidad que transmiten esos medios, que se han convertido en los principales actores de la aculturación y la formación de valores en la juventud, independientemente de las hondas diferencias étnicas, sociales, económicas y regionales.

Por otra parte, la institución familiar ha sido severamente sacudida por la influencia de los modernos medios de comunicación, que han transformado la forma de ser y de vivir de los niños y jóvenes en poco más de medio siglo. Al debilitamiento de los lazos de relación cotidiana dentro de la familia, observado desde los primeros lustros de la era de la televisión, se agrega la desaparición de las familias numerosas predominantes hasta los primeros decenios del siglo XX y la ruptura del núcleo familiar tradicional.

Es probable que la degradación de la institución familiar y de la vida comunitaria se exacerbe entre los grupos de clase media venidos a me-

Jóvenes: una generación que podríamos perder

nos a consecuencia del desempleo o subempleo crónicos. Otros factores igualmente importantes son el alcoholismo y el consumo de drogas, que suelen ser consecuencia, más que causa de la precariedad económica y la segregación social que conlleva. Estos problemas afectan a todos los miembros de las familias, pero en los adolescentes y jóvenes tienen el efecto adicional de reproducirse de una generación a las siguientes.

Como reflejo exacto de la descomposición de las relaciones interpersonales en la sociedad, la escuela se ha convertido en una selva en la que predomina el más fuerte y donde la mayoría de los niños y jóvenes sufren violencia física, psicológica, verbal y sexual, que en ciertos períodos de la vida puede generarles traumas de consecuencias a veces muy graves. Téngase en cuenta que la niñez, la adolescencia y la juventud son las etapas en que se forma la concepción del mundo y de la vida, la cultura, las costumbres y hábitos.

La violencia que sufren los adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas les produce conductas inadecuadas para el trabajo escolar, especialmente problemas de disciplina que, cuando se acentúan, se convierten en motivos para su segregación por parte del resto de sus compañeros y dificultan el trabajo del personal docente, todo lo cual se sintetiza en bajos niveles de rendimiento, cuando no en la reprobación o la expulsión de la escuela. En medio de un entorno tan negativo, los jóvenes procuran sumarse a grupos con los que identifican, en los que se desarrollan antivalores, que abonan el terreno para que individualmente o en grupos (pandillas) realicen actos delictivos y más tarde se integren al crimen organizado.

En estas circunstancias, las condiciones económicas, sociales y culturales de las nuevas generaciones son de inferior calidad a las de sus padres, pero quizás el problema principal sea que estos grupos juveniles se convierten en reservas de recursos humanos para las organizaciones delincuenciales.

Las diversas formas de discriminación, marginación y abuso de la sociedad y los órganos del Estado hacia la población joven se traducen en un debilitamiento de la cultura democrática, desde el autoritarismo original que priva en las familias hasta la exclusión social y la violencia criminal, social y policiaca que colocan al joven como enemigo de la sociedad y no como su principal sostén.

La segregación de los jóvenes por sus maneras de ver la realidad y por su apariencia física los convierte en símbolos de peligro y amenaza y, a partir de la satanización social, la sociedad tolera la violación de las garantías individuales de los jóvenes, no obstante que la Constitución las asegura para todo habitante de la República Mexicana. Esta pasividad general frente al abuso de que son objeto los jóvenes, acaba por convertirse en complicidad.

La exclusión de los jóvenes de la economía formal es una forma de violencia poco aparente pero demoledora. Tener un trabajo seguro y con un sueldo digno es prácticamente imposible para la gran mayoría de los jóvenes, que se ven forzados a buscar ingresos en el sector informal. A todo ello hay que añadir la discriminación de los jóvenes en general por su atuendo, su lenguaje y costumbres, así como los abusos que les infieren a diario los efectivos policiacos y los cuerpos de seguridad privada, tanto en los centros de diversión, como en la vía pública.

Pero sin duda el mayor enemigo de la juventud y del país es la delincuencia. Los enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado y de las fuerzas armadas contra ellos han generado un clima de violencia que se expande inexorablemente en el territorio nacional y cuyas principales víctimas son los jóvenes: ellos son los soldados, marinos y policías que enfrentan a las organizaciones delictivas y ellos son también los sicarios reclutados por los grupos criminales; son jóvenes la mayor parte de las víctimas civiles de este conflicto armado por las características de su edad y por la exclusión que sufren en dos instituciones fundamentales: la escuela y la economía formal.

Una expresión de la violencia que sufren los jóvenes por los conflictos entre las organizaciones delincuenciales y la estrategia del gobierno para combatirlas, fue el hecho de que uno de los seis puntos contenidos en el *Pacto por un México en paz* leído el 8 de mayo de 2011 en el Zócalo de la Ciudad de México por Olga Reyes y Patricia Duarte, madre de uno de los niños muertos en la guardería ABC, exige la atención de emergencia a la juventud y la recuperación del tejido social. Las demandas se sintetizan en dos apretados párrafos:

A.- La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social, que genere oportunidades reales de educación, salud cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos

la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

B.- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes, que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando al menos lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas, y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior, un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales deportivos productivos y sociales, realizados por los propios Jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios comunidades y unidades habitacionales.

En los trabajos preparatorios para la redacción del Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, firmado el 10 de junio de 2011 en Ciudad Juárez, se organizó una mesa para discutir el tema “Alternativas para la juventud y medidas para la recuperación y reconstrucción del tejido social”, en la que sobresalieron las demandas de sustituir el enfoque asistencialista de la política social por uno que propicie la capacidad organizativa de la sociedad, elevar el presupuesto y ampliar la matrícula de las universidades e instituciones de educación superior y legislar sobre la obligatoriedad de la educación en todos los niveles y exigir al Senado la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, entre otros puntos. Se propuso la creación de una Red de Centros Sociales por la Paz con Justicia y Dignidad, la convocatoria a una Coordinadora Nacional Contra la Militarización y a un Congreso Nacional para un Modelo Alternativo de Educación.

Claro que esas jornadas de protesta no cambiaron la violencia asociada al crimen organizado y su combate, ni alteraron la realidad juvenil del país, pero tal vez influyeron para crear conciencia sobre la gravedad del problema. Por lo pronto, una porción de jóvenes trabajadores realiza actividades autodestructivas y lindantes con el crimen organizado, como las distintas modalidades de prostitución, mendicidad y comercialización

de mercancías de procedencia ilícita. Pero cuando aun estas puertas se cierran, los jóvenes se ponen al servicio de la delincuencia organizada, ya sea como vigilantes para grupos de secuestradores, como narcome-nudistas o sicarios, dependiendo de sus facultades físicas y mentales, del entorno inmediato en que viven y de su nivel de desesperación. El narcomenudeo es la etapa inicial del acceso al crimen común y organi-zado y un foco de infección que dispersa las adicciones entre los niños, adolescentes y jóvenes.

Las actividades delictivas envilecen la vida de los jóvenes y sus familias, agravan la inseguridad pública, deterioran el entorno urbano y reducen la calidad de vida de todos, principalmente de los jóvenes más desprotegidos y sus familias, pero también del conjunto de la sociedad porque son factores que contribuyen a crear un clima de violación a las leyes y ausencia de gobierno. Las actitudes y frustraciones que estos fenómenos generan, sumadas a vicios sociales como la corrupción, la violencia y el abuso institucionalizados y no, son los elementos cons-titutivos de la cultura y la visión del mundo, del país y del hombre que adquieren los jóvenes: esos mismos que tienen que sostener a sus familias y los tendrán que hacerlo en los siguientes años y decenios. No es de extrañar que el desencanto y la frustración se ahoguen con el consumo de alcohol o drogas o con los altísimos decibeles de la música que tal vez sirvan para aturdirse y fugarse momentáneamente de su realidad.

El narcotráfico en mayor escala y la delincuencia organizada en su conjunto son válvulas de despresurización del desempleo en las que los jóvenes encuentran o creen encontrar reconocimiento social y autoestima. Los paradigmas creados por esa actividad delictiva dan lugar a que una parte de la juventud prefiera una vida breve pero intensa y con relativa holgura económica que una larga vida de carencias y frustración. Estas nociones se convierten en una verdadera cultura, cuya reversión tardará probablemente decenios a partir de que la sociedad y el Estado se decidan a atender a fondo y de manera integral los problemas de la juventud.

Existe una correlación entre pobreza y delincuencia, pero no es tan alta como se suele pensar, a menos que se consideren delictivas las dis-tintas modalidades de degradación social y moral que genera la miseria. Los jóvenes que no asisten a la escuela, no tienen una ocupación fija, pertenecen a familias disfuncionales y viven en un medio comunitario degradado, son los más vulnerables. Entre la población adolescente más

Jóvenes: una generación que podríamos perder

expuesta a las adicciones están los que proceden de grupos urbanos marginados, los hijos de migrantes y jóvenes de clase media y de altos ingresos que han sido objeto de violencia y abuso por parte de sus padres.

El consumo de enervantes induce a la delincuencia, pues la necesidad de obtener dinero para pagar las drogas obliga a los jóvenes desempleados a realizar cualquier actividad en el comercio ambulante u otras ocupaciones informales -boleros, franeleros, etcétera- que les reporte ingresos, las cuales por lo general están vinculadas a fenómenos delictivos como la venta de artículos “pirata” y mercancías procedentes del robo y el contrabando.

En este ambiente, es fácil que los jóvenes acepten un pequeño sueldo como informantes y allí puede empezar la escalera delictiva: distribución de drogas en banquetas y esquinas, escuelas y centros de diversión, reclutamiento de nuevos vendedores; pandillerismo dedicado a asaltos en la vía pública, a comercios y casas habitación, robo de vehículos, secuestros exprés, extorsión, tráfico de personas, lenocinio.

A medida que se incrementan los ingresos de los jóvenes que caen en estas trampas, aumenta su dependencia de las organizaciones criminales y su riesgo hasta que llegan a un punto de no retorno. Una parte de los adolescentes expuestos a los factores de riesgo opta por el suicidio, comúnmente asociado al consumo de drogas y alcohol, la depresión y otros trastornos siquiátricos.

Este proceso de descomposición se traduce en soledad infantil y juvenil y en la creación de un entorno adverso para la formación de los niños y jóvenes como seres humanos plenos y positivos para la sociedad y como ciudadanos activos, solidarios y respetuosos de las personas y las leyes.

Por todo ello, una de las más apremiantes necesidades nacionales es el diseño y aplicación de una política de prevención de la delincuencia, que pasa necesariamente por la recuperación de la familia como espacio de amor, solidaridad y seguridad, y por el restablecimiento de la escuela, como la puerta de entrada a la cultura, la formación de ciudadanía y la preparación para el trabajo, así como por la generación de expectativas reales y realistas de mejoramiento individual y social a partir del esfuerzo personal.

6. BONO DEMOGRÁFICO

La proporción de jóvenes en el conjunto de la población empezó a disminuir en el decenio de 1980 pero su número absoluto sigue en aumento, tendencia que se revertirá a partir del año 2011, según estimaciones de la Conapo. En dos decenios más, es decir, en 2030, México contará con 16.4 millones de jóvenes que representarán el 13.6 por ciento de la población. En la actualidad, los jóvenes de 15 a 29 años constituyen la tercera parte del bono demográfico, pero esta proporción se irá reduciendo progresivamente en los próximos años.

Hay un cambio de estructuras de la población que la sociedad mexicana no ha reconocido como un gran problema y una oportunidad igualmente importante, como dice el lugar común, en el último tercio del siglo XX tal vez con la idea de que el largo plazo no llegaría nunca, y en lo que va del siglo XXI, quizá porque estamos ocupados con el estallido simultáneo de crisis en los más distintos órdenes de la vida pública e incluso en la institución familiar.

La reducción relativa del número de niños y el aumento absoluto y relativo del número de ancianos deja en medio a la población en edad productiva, es decir, al llamado bono demográfico que, en palabras del demógrafo Roberto Ham-Chandé⁸ “En nuestro caso lo que va del bono se manifiesta en el desempleo, en la pobreza, en la migración forzada hacia Estados Unidos, la quiebra de la seguridad social, y en la madre de todos los otros problemas: la educación”.

El problema no es “ayudar” a los jóvenes, como si fueran un grupo vulnerable, sino reconocer que la clara tendencia al envejecimiento de la población es un problema de ellos, en primer lugar, porque ellos son los que en último análisis tienen que sostener a la población envejecida y en segundo lugar, porque los jóvenes y adultos jóvenes de hoy serán adultos mayores en sólo cincuenta años más, y si hoy no tomamos las previsiones adecuadas para evitarlo, su vejez será de privaciones, enfermedades degenerativas, que son las de tratamiento más costoso y

⁸ Ham-Chandé, Roberto. Foros de reflexión Compromiso por México. Eje Calidad de Vida. Memoria Documental y Gráfica. pág. 70

carencia de recursos. Por ello cuanto se haga en el presente para invertir en educación, salud y en una concepción moderna de la seguridad social, redundará en una vida más razonable para los adultos mayores al mediar el siglo XXI.

Debido a que la población tiende a envejecer, en el mediano y largo plazos el país enfrentará importantes retos en todos los ámbitos de la vida social. En el corto plazo, como se ha dicho, existe una oportunidad demográfica inigualable debido a que México cuenta con una alta proporción de personas en edad productiva (entre 15 y 64 años de edad) que prácticamente duplica a la población en edad económicamente dependiente (de 0 a 14 años y 65 y más años) durante las primeras décadas del siglo XXI.

A principios del decenio de 1960 había una alta relación de dependencia: a cada persona en edad productiva le correspondía poco más de una en edad no laboral, principalmente menores de 15 años. A principios del siglo XXI, hay dos personas en edad de trabajar por cada persona económicamente dependiente, pero el punto de inflexión de la tendencia se presentará a mediados del siglo. Para 2050 la relación será de una persona en edad productiva por 0.6 en edad dependiente, grupo en el que predominarán los mayores de 65 años. Problemas como el de las pensiones, la oferta de seguridad social y servicios médicos, que han empezado a mostrar signos preocupantes, podrían entrar en crisis a mediados del siglo.

La proporción de la población joven en el conjunto demográfico total ha comenzado a disminuir en términos relativos y en poco tiempo se reducirá también su volumen absoluto, puesto que se han contraído las tasas de fecundidad en los últimos decenios, a pesar del moderado repunte habido en la primera década del siglo XXI, tal vez como resultado de la relajación de los programas de inducción al control de la natalidad

Las políticas de planificación familiar adoptadas a partir del decenio de 1970 y la consecuente regulación del número de hijos de las parejas han cambiado los patrones culturales de reproducción, especialmente en las áreas urbanas y en las clases medias, aunque incluso en los poblados más pequeños y apartados se advierte el interés de las mujeres por informarse sobre métodos anticonceptivos.

El Conapo estima que la más alta proporción del grupo de edades de 15 a 24 años se dio a finales de los años 1980 y en la primera mitad del

siguiente decenio, cuando representaba el 21.5 por ciento del total. Después de ese punto máximo, el porcentaje empezó a disminuir. La misma fuente estima que para 2030, la proporción de jóvenes habrá disminuido al 13.6 por ciento (6.9% de adolescentes y 6.7% de adultos jóvenes).

En términos absolutos, la población de 15 a 29 años alcanzó la cifra de 29 669 960 según el Censo de Población y Vivienda de 2010, con un 26.65 por ciento de la población total. El Conapo estima que en 2011 la población joven alcanzó su más alto nivel absoluto de la historia.

La disminución de la tasa de crecimiento de la población joven fue posterior a la contracción de la dinámica de la población total y su descenso fue consecuencia de la caída de los niveles de fecundidad.

De acuerdo con el Conapo, en 1971, la población total crecía en 3.0 por ciento y los jóvenes entre 15 y 24 años lo hacían en 3.9 por ciento y 4.1 hacia 1975. La población adolescente alcanzó un máximo histórico en 1971 con un 4.4 por ciento de crecimiento anual, mientras que los adultos jóvenes llegarían a dicho límite en 1977 con 4.3 por ciento.

Las tasas de crecimiento de la población total y la joven se igualaron en los últimos años del decenio de 1980 y los primeros del de 1990 en alrededor de un dos por ciento anual y desde entonces, el ritmo anual de crecimiento del grupo joven se ha ido reduciendo hasta ubicarse por debajo del uno por ciento.

Después que se logró disminuir las tasas de crecimiento natural de la población en los años sesenta y setenta, la proporción de menores de edad ha disminuido pero los niños que nacieron en el último cuarto del siglo XX son jóvenes que, por su sola edad, constituyen una importante ventaja para el país a la luz del creciente envejecimiento de la población en las zonas más desarrolladas del mundo.

El volumen y dinámica de la población joven han sido determinados por la disminución de las tasas de fecundidad y la transición demográfica. La pirámide de edades muestra una clara tendencia al envejecimiento por el aumento proporcional de los grupos de mayor edad y la disminución relativa de los jóvenes, aunque se estima que el envejecimiento demográfico será más notorio hacia 2030. El peso relativo de los grupos de edad de menos de quince años continuará a la baja como ha venido ocurriendo desde el decenio de 1970.

Debido a la orientación de la política económica y a la incapacidad de la industria para emplear a los jóvenes sea cual fuere su nivel académ-

mico, la economía mexicana ha sido incapaz de aprovechar este “bono demográfico”, no sólo por los efectos devastadores de la crisis financiera global de 2008-2009, sino por la renuencia del gobierno federal a aplicar incluso la modesta política contra-cíclica que anunció.

El “bono demográfico” no es permanente y ya muestra una marcada tendencia al agotamiento debido, por una parte, a la disminución de las tasas de natalidad y el consecuente estrechamiento de la base de la pirámide de edades y, por la otra, a la prolongación de la esperanza de vida de los adultos mayores. Es un desperdicio innecesario y costoso pues, al igual que los recursos naturales, la población joven tiende a disminuir y no es renovable.

La incapacidad de la economía mexicana para aprovechar el bono demográfico sólo se acentuó en la crisis de 2008-2009 y en la profunda recesión que trajo consigo, pero tiene un componente estructural derivado de las políticas de estabilización que se han instaurado en el país desde mediados de los años 1980, pero con mayor rigor -y menos pericia- a partir del año 2001, cuando se advirtió una fuerte contracción de la tasa de crecimiento del PIB, que ha registrado niveles muy bajos como promedio anual.

La política económica de la estabilidad ha sido presentada como un “blindaje” del sector financiero frente a influencias adversas del exterior y, en el ámbito de las finanzas públicas, como un “manejo responsable” o “disciplina financiera”, según la cual, los presupuestos de gasto anual aprobados por el Congreso de la Unión son invariablemente menguados a través de subejercicios y “recortes”, de suerte que no se produzcan déficits en las finanzas públicas y, en lo posible, se generen superávits. Los recursos autorizados y no gastados se congelan en “fondos” y “fideicomisos” que están disponibles para gastos extraordinarios del Ejecutivo, como las indemnizaciones a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro a raíz del decreto presidencial que dio por desaparecido ese organismo público.

A los cálculos tradicionales del desempleo, se agrega un grupo importante de trabajadores que perdieron su empleo, buscaron durante algunos meses obtener otra ocupación y, al no tener éxito -debido a la caída de 6.5 por ciento del PIB en 2009- renunciaron a seguir la búsqueda, lo que los transfirió automáticamente de la Población Económicamente Activa (PEA) a la Población no Económicamente Activa (PNEA) y del

concepto de desempleo abierto al de personas que no buscan trabajo. Este grupo se conoce con el nombre de “desalentados” y, de acuerdo con el reporte “Perspectivas de empleo 2010” de la OCDE, oculta una porción de la tasa de desempleo, pues cuando se agoten los ahorros, las indemnizaciones por despido o el apoyo de las familias a este grupo, volverá a presionar sobre la oferta de empleo. Una parte de los desocupados, estimados en 600 mil personas, se trasladaron al sector informal de la economía, lo que hizo subir el número de empleados informales de 12 millones a 12.6 millones

Se estima que en 2010 existían 5.8 millones de desalentados, 10 millones de autoempleados y 12.5 millones de trabajadores ocupados en el sector informal. La OCDE calcula que para volver a la situación prevaleciente en diciembre de 2007 habría que crear 995 mil puestos de trabajo y, según los registros del IMSS, apenas se habían creado 473 mil en el primer semestre de 2010. Este cálculo no incluye la demanda por nuevos empleos derivada de los jóvenes que alcanzan la edad de trabajar.

La misma fuente advierte que, sin incluir a los desalentados, la tasa de desempleo subió durante la crisis de 2.8 por ciento de la PEA a 5.7 por ciento. Si a esta última cifra se agrega la tasa de subempleo o desempleo parcial -que incluye a las personas que teniendo una ocupación necesitan y buscan otra para completar sus ingresos-, la tasa sube a 13.7% de la PEA. Si se suma el empleo en el sector informal, se tiene que el 33.5 por ciento de la PEA se encuentra sin empleo o tiene empleos de calidad inferior a sus capacidades y competencias e ingreso menor al que tendría en el sector formal de la economía.

Las perspectivas son deplorables, pues el sector dinámico de la economía formal en 2010 ha sido el de las exportaciones, incluyendo a las plantas maquiladoras. Pero los indicadores disponibles en la economía de Estados Unidos han llevado a la Reserva Federal (Fed) a disminuir sus previsiones de crecimiento para el año en su conjunto de un rango de 3.2% a 3.7% a otro de a 3% a 3.5%.

La desaceleración ya ha afectado los índices de consumo y de confianza de los consumidores -éste está en su nivel más bajo en un año- y afectará severamente las importaciones estadounidenses y la contratación de trabajadores migratorios. Uno de los sectores más dañados ha sido el de la construcción de viviendas, ya que el crédito para ese objeto ha

estado cayendo a partir de abril de 2010, no obstante los programas de reactivación económica impulsados por el gobierno del presidente Barak Obama. Se estima que al finalizar 2010, un millón de familias estadounidenses habrán sufrido el embargo de sus viviendas y tres millones más estarán en riesgo de seguir la misma suerte.

A pesar de estos presagios, la recuperación de la economía y el empleo en México sigue dependiendo del sector exportador y, dentro de éste, de las ventas de mercancías a Estados Unidos. Ha habido un rechazo al fortalecer el mercado interno, pues esto implicaría aumentos importantes en la inversión pública, una reordenación a fondo del gasto corriente que actualmente es excesivo en renglones como salarios y prestaciones a funcionarios de niveles alto y medio, un déficit financiero razonable que sería compensado en el mediano plazo cuando la economía se haya reactivado y se puedan generar superávits presupuestarios sin desalentar el crecimiento, una política explícita de generación de empleos, sólo viable con un apoyo efectivo a las pequeñas y medianas industrias, la reconstrucción de los instrumentos de fomento económico del Estado, tanto los dirigidos al sector agropecuario, como al industrial, el cambio a fondo, en síntesis, de la política económica prevaleciente en los últimos lustros.

La incapacidad de la economía para ofrecer empleos productivos, combinada con las restricciones y recortes del presupuesto para las universidades e institutos de educación superior, podrían convertir al bono demográfico en un “lastre demográfico”, pues los millones de jóvenes que carecen de un lugar en la educación superior y de un empleo productivo en la economía formal, así como aquellos afortunados que ingresan a una universidad y terminan sus estudios pero no encuentran ocupación en su área profesional, tienen pocas salidas, todas ellas riesgosas: emigrar a Estados Unidos, opción que tiende a estrecharse, junto con el envío de remesas a sus familias; incorporarse a las actividades informales, cuya capacidad de absorción de fuerza de trabajo se ha agotado en algunas regiones del país debido a la debilidad de la demanda interna; además, las fronteras de legalidad de la economía informal son muy difusas, pues por este conducto se procesan mercancías de contrabando, productos “pirata” y bienes robados a tráileres en las carreteras del país, cuyos niveles de seguridad son muy bajos.

La salida más inquietante y peligrosa de los jóvenes sin escuela ni empleo es su incorporación al tráfico de drogas y otras modalidades del crimen organizado y la delincuencia común. Las organizaciones delincuenciales se han convertido, en México, en auténticas fuentes de empleo e ingresos para grupos cada vez más numerosos de jóvenes que no tienen más salida que las actividades ilícitas. Al principio delinquen por su cuenta o en pandillas que asaltan a transeúntes, automovilistas, negocios y hogares, roban piezas de automóviles o automóviles completos que son desarmados y vendidos como piezas de refacción. Más temprano que tarde se integran a una organización delictiva, que al principio les encarga tareas más bien simples, como la observación y registro de probables secuestrados, la venta de drogas al menudeo en escuelas, parques y centros de recreación. Los más aptos ascienden en las estructuras piramidales de estos grupos delincuenciales, hasta convertirse en sicarios o jefes de distintas divisiones del tráfico ilícito de drogas, armas y personas.

Estos circuitos de desempleo-falta de escuelas-falta de ingresos-delincuencia son las manifestaciones más comunes del derroche del bono demográfico que está haciendo el país, pues en vez de fomentar la inversión y el empleo, el Estado enfrenta a los jóvenes con ellos mismos y con el resto de la sociedad: por una parte, las organizaciones criminales forman auténticos ejércitos con jóvenes que son capacitados por delincuentes con experiencia, muchos de ellos desertores de las fuerzas armadas. El gobierno, por su parte, recluta jóvenes para incorporarlos al Ejército y a la Marina Armada y capacitarlos para el combate a las organizaciones criminales, lo que a final de cuentas implica que los jóvenes mexicanos se matan entre sí en ambos bandos.

De esta suerte, los adultos y viejos que vivirán en México entre 2020 y 2050 ya están entre nosotros y no sólo son los soldados, marinos, policías y sicarios que están en guerra entre y contra las organizaciones delictivas; sino el grueso de los vendedores ambulantes, cuyas actividades lindan con lo ilícito –piratería, contrabando, por señalar las más obvias–; son jóvenes también los taxistas y vendedores de seguros que tienen estudios superiores e incluso de posgrado.

La salud, la educación, los programas asistencialistas, la inexistente política de empleo, de fomento agropecuario e industrial inciden sobre los jóvenes con igual o mayor rigor que sobre el conjunto de la pobla-

Jóvenes: una generación que podríamos perder

ción. Pero ante los apremios de hoy y las tendencias a futuro, lo que el país necesita es que las políticas públicas –todas- asuman el carácter estratégico de los jóvenes, en vez de que se limiten a tal o cual programa, dependencia u organismo.

Es indispensable integrar adecuadamente a los jóvenes a la sociedad, al sistema educativo y al mercado laboral en provecho de ellos mismos y de la colectividad. De lo contrario, el efecto del excedente poblacional en este grupo de edad puede resultar adverso, agudizando los problemas derivados de una futura población envejecida, cuyo perfil educativo será insuficiente, sus posibilidades laborales mínimas. Es probable que los viejos de mediados de siglo representen un serio problema de salud, ya no por enfermedades epidemiológicas, sino crónico-degenerativas.

En la segunda mitad del siglo XX, los peldaños inferiores de la pirámide de edades eran más anchos que los medios y altos, y tendían a expandirse. Pero el proceso de urbanización, los cambios de la estructura de la familia, las políticas de planificación familiar y la implantación de patrones de vida que difunden los medios masivos de comunicación, redujeron casi abruptamente las tasas de crecimiento natural de la población, y ya en los albores del siglo actual se observa una participación relativa decreciente de los jóvenes en el universo demográfico nacional.

Población de 15 a 29 años de edad como proporción de la población total

Año	Población total	De 15 a 29 años	Porcentajes
1960	34,923,129	8,987,229	25.73
1970	48,225,238	12,347,150	25.60
1980	66,846,833	18,615,458	27.85
1990	81,249,645	23 898 078*	29.41*
2000	97,438 412	27,221,012	27.93
2005	103,263,388	27,177,008	26.31
2010	112 336 538	29 669 960	26.65

Fuente: Elaboración con datos de INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda, Conteo de población de 2005, y Censo de Población y Vivienda 2010

*Población de 15 a 29 años. Fuente: INEGI. Indicadores Sociodemográficos de México (1930-2000)

La dinámica demográfica de los años setenta a noventa del siglo pasado generó un aumento constante de la proporción de jóvenes en el conjunto de la población, hasta llegar a 29.41 por ciento en 1990. A partir de este año se produce una reducción relativa de este grupo a poco menos de 28 por ciento del total de la población en sólo un decenio. La tendencia a la baja continuó en el conteo poblacional de 2005 y llegó a 26.65 por ciento en 2010. Es claro que el país vive en medio de una honda transición demográfica y no está preparado ni se está preparando para aprovechar las ventajas y disminuir las desventajas que conlleva.

En las siguientes dos generaciones -cuarenta años- la población empezará a envejecer y esa tendencia se mantendrá en el mediano y largo plazos, pues habrá proporciones menores de niños y mayores de adultos y ancianos, debido al descenso de la fertilidad y a la ampliación de la esperanza de vida resultante de los avances de la medicina, la biogenética y otras disciplinas científicas. Quienes hoy tienen 15 años de edad tendrán 35 en los siguientes dos decenios y 55 a la mitad del siglo. Los mayores entre ellos, que ahora tienen 29 años de edad, tendrán 69 a mediados del siglo XXI.

Hace veinte años los menores de edad eran la población mayoritaria, por eso ahora los jóvenes son el estrato más numeroso. La noción del “bono demográfico” se refiere a que una porción alta y creciente de la población está en edad productiva (de 15 a 64 años) y, por lo mismo, tiene condiciones óptimas para formarse como profesionistas y técnicos y trabajar, a condición, claro, de que se cuente con escuelas de los distintos niveles y grados, personal docente suficiente y calificado y los recursos materiales y financieros que requiere un buen sistema educativo y fuentes de empleo en el sector formal de la economía.

El bono demográfico parece haberse percibido más como un problema que una oportunidad, porque grupos de jóvenes cada vez mayores arriban cada año a la edad de trabajar y la oferta de empleos es muy restringida, y egresan del nivel de educación media superior con intenciones de continuar a la educación superior, pero no existen espacios para ellos.

Sin embargo, tenemos una oportunidad demográfica irrepetible, al menos en las magnitudes actuales y en el futuro, menos cantidades de jóvenes tendrán que mantener a más cantidades de niños y viejos. Para

Jóvenes: una generación que podríamos perder

aprovechar el bono demográfico se requiere crear condiciones sociales y económicas propicias para la preparación de los jóvenes y su integración eficiente al mercado de trabajo, lo que entraña, entre otros requisitos, el desarrollo tecnológico de la planta productiva, lo que a su vez exige expandir la inversión pública y privada en investigación científica.

La educación y la capacitación, vinculadas eficientemente con la economía, permiten convertir a los jóvenes en capital humano, generar empleos estables y de calidad. En último análisis, el bono demográfico significa que los jóvenes construyan hoy lo que los viejos no podrán construir mañana, lo que desencadenaría un proceso a largo plazo de crecimiento de la economía, los empleos, los salarios, el mercado interno y la retroalimentación del circuito.

En este esquema óptimo, el tejido social es firme y la economía produce bienes y servicios para el mercado interno y la exportación y, a la vez, genera fuentes de empleo suficientes y adecuadas para aprovechar los recursos humanos de distintos grados de calificación que ofrece la sociedad. Finalmente, el Estado asegura la vigencia efectiva de las garantías individuales y sociales y asume su papel como rector y regulador de la actividad económica.

Ninguna de estas condiciones existe en el México del siglo XXI, quizá porque las autoridades no han tomado en cuenta la transición demográfica del país ni valorado las ventajas que podría tener para la sociedad en su conjunto. Todos los indicios sugieren que ni siquiera hay conciencia de los problemas que aquejan a los jóvenes ni de la responsabilidad social, política y moral que entraña la pérdida de varias generaciones de mexicanos que están condenados a la informalidad económica, el exilio por necesidades laborales o la violencia en uno u otro lados de la guerra contra el crimen organizado.

La calidad de la educación básica es enteramente insatisfactoria, la educación media no es suficiente para cubrir la demanda de los jóvenes egresados de secundaria ni está debidamente interconectada con la educación superior y la técnica y menos aún con el mercado de trabajo. Éste es reducido y no responde ni a las necesidades de empleo de los jóvenes y adultos ni a los requerimientos de una economía en crecimiento.

De los 47 millones de personas que forman la población económicamente activa, sólo 15 millones tenían empleo en el sector formal de la economía. Los puestos de trabajo registrados por el IMSS después de

la depresión de 2008-2009, eran en su mayoría eventuales, con jornadas menores a 15 horas a la semana y con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. El desempleo abierto, que en 2000 afectaba al 2.3 por ciento de la población económicamente activa, llegó al 5.7 por ciento en 2010. En el tercer trimestre de este año había 2.7 millones de desempleados, 12.4 millones de trabajadores en la economía informal, 3.8 millones de empleados que buscaban otro trabajo para complementar sus ingresos y 3.1 millones de personas que trabajaban sin remuneración. La suma de estas cifras muestra que 22 millones de trabajadores, el 46.71 por ciento de la población económicamente activa, carecen de empleo o trabajan en condiciones de precariedad.

En medio del desempleo, se ha creado una nueva categoría que se denomina indistintamente los “desalentados” o “desmoralizados” y son la parte de la población económicamente activa que buscó empleo durante un largo tiempo y, al no encontrarlo, dejó de buscarlo. En 2007, según datos del INEGI, este grupo sumaba 5 millones 142 mil personas y tan sólo dos años después se elevó en 760 mil personas más.

En este panorama, los jóvenes no han sido vistos como la cantera de capital humano estratégico ni como un espacio propicio para la inversión social y el desarrollo del país, no obstante que desde hace más de 20 años se admite, al menos discursivamente, que el mundo está inmerso en la sociedad del conocimiento y que el desarrollo de los países dependerá cada vez más de los saberes, el avance científico, el desarrollo tecnológico y la innovación.

La desigualdad social expansiva genera condiciones adversas, polariza a los jóvenes y los hace más vulnerables, en especial a los adolescentes. Los problemas son más agudos en las entidades federativas de menor desarrollo que, si alguna ventaja tienen, es que registran mayores tasas de crecimiento natural de la población y van a tener más tiempo el bono demográfico, por lo que pueden no cometer los errores de los estados desarrollados. En el medio rural y las comunidades indígenas, los problemas son mucho más agudos y en todos los casos las mujeres se llevan la peor parte.

Un factor que disminuye artificialmente el bono demográfico en países que no crean las condiciones para aprovecharlo, es la migración laboral de los jóvenes hacia países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, pues su expulsión genera automáticamente el envejecimiento

Jóvenes: una generación que podríamos perder

premature de la población porque acelera la salida del hogar paterno, la formación de pareja y la paternidad. Como hemos visto, el grueso de las corrientes migratorias hacia el extranjero está formado por la población joven.

Las migraciones en nuestro país y en nuestro tiempo obedecen a distintos factores, entre los que sobresalen la falta de oportunidades de educación y empleo en los lugares de origen y, en los últimos años, la expansión de la violencia. El abandono del campo por la política económica, las disparidades del desarrollo regional en aumento y la exacerbación de los enfrentamientos entre grupos delictivos y de ellos con la fuerza pública, han influido en cambios en el fenómeno migratorio de los jóvenes. La cuarta parte de los migrantes internos y el 40 por ciento de los migrantes hacia el exterior, son jóvenes de 15 a 29 años.

Los flujos migratorios de una entidad federativa a otras se reflejan en aumentos del volumen de población a pesar de que el crecimiento natural sea relativamente reducido debido a las bajas tasas de fecundidad. Las migraciones en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México generan importantes problemas a las dos entidades, pues mientras que los lugares de trabajo se encuentran en la capital de la República, lo que significa fuertes corrientes de población flotante, en los municipios conurbados del Estado de México se concentra la vivienda, lo que conlleva aumentos de la demanda de servicios municipales, problemas de vialidad, degradación del medio ambiente, entre otros. La Conapo considera que las migraciones pueden acelerar la transición de los jóvenes a la edad adulta, su inserción en el mercado de trabajo, el abandono de los estudios, la separación del grupo familiar y la formación de su propia familia.

En 2010, las migraciones entre distintas entidades federativas eran de 3.7 personas por millar, pero la tasa de migración juvenil llegó a 4.9 personas por cada mil.

En los últimos decenios han coincidido importantes cambios socioeconómicos en el país con la demanda de fuerza de trabajo no calificada en países desarrollados, especialmente Estados Unidos, a pesar de los efectos de la recesión de 2008-2009 sobre su mercado de trabajo y de la nueva legislación en varios estados para endurecer las medidas policiacas contra los inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, 1,112,273 personas habían emigrado fuera del país, de los cua-

les, 75 por ciento eran hombres y 25 por ciento mujeres. Del total de emigrantes al extranjero, poco más del 10 por ciento, es decir, 119,706, procedían de Guanajuato, 86,152 de Jalisco, 85,175 de Michoacán, 75,694 del Estado de México, 73,458 de Puebla, 58,913 de Oaxaca, 50,281 del Distrito Federal, 43,111 de Guerrero, 40,659 de Hidalgo y 34,044 de San Luis Potosí. Estas diez entidades aportan el 60 por ciento a los flujos migratorios al exterior. Como proporción de su población total, la emigración internacional alcanza niveles muy altos en algunos estados de la República: En Michoacán, Nayarit y Zacatecas, supera el 30 por ciento; en Guerrero, Oaxaca e Hidalgo rebasa el 25 por ciento y en Guanajuato y San Luis Potosí, el 20 por ciento.

Hemos dicho que el grueso de la población que emigra a otras entidades o al extranjero, está formada por jóvenes. Son los más arrojados, los más emprendedores, los más capaces de tomar riesgos y los más decididos a construirse un futuro para ellos y sus familias. Las emigraciones al extranjero constituyen sangrías crecientes de lo mejor de nuestros recursos humanos y la única forma de moderar estos flujos es que el país les ofrezca oportunidades reales de mejoramiento económico, social y cultural, y para ello no hay más vías que la vinculación entre un sistema educativo de alta calidad con planes y programas de estudios pertinentes, con una economía generadora de empleos permanentes y dignamente remunerados en el sector formal.

El instrumento más adecuado para la atención a la población de edades avanzadas es la seguridad social, y nuestra generación tendrá que concentrar en esa función del Estado una gran proporción de su esfuerzo —y sus recursos— no sólo para encarar los problemas de salud y servicios a los ancianos que ya tenemos, sino para llenar lagunas del pasado y preparar a las instituciones para la presión que les espera en los próximos decenios.

La seguridad social debe replantearse bajo la óptica de la protección social y dar preferencia a la población de menores recursos económicos, lo que entrañaría, entre otras decisiones de largo alcance, la pensión universal básica de tres o cuatro salarios mínimos para todos los ciudadanos que rebasen determinado límite de edad, que supondría un gran pacto social con responsabilidades bien definidas para las instituciones del Estado, las organizaciones gremiales, las empresas, el sector financiero, los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

El citado Roberto Ham-Chande pone de relieve la actualidad del pensamiento de un actuario de nombre Dawson, que en un seminario celebrado en 1917, hace casi un siglo, definió que la seguridad social no significaba guardar dinero, sino invertirlo en actividades productivas para que se multiplique y genere los recursos que demandarán las pensiones y la atención a la salud en el futuro. En opinión de Ham-Chande, las sociedades que han logrado altos niveles de desarrollo y bienestar son las que han planeado su futuro con visión de Estado, es decir, a mediano y largo plazos y poniendo los intereses colectivos por encima de los individuales y de grupo, pues de esa manera han podido construir sistemas equitativos y justos.

Cuando se transformó el sistema de pensiones a finales del siglo XX y se crearon las afores, se dijo que el ahorro de los trabajadores, administrado por instituciones privadas, garantizaría el ulterior financiamiento de sus pensiones, el ahorro individual de los trabajadores, el mejoramiento de los servicios de seguridad social y la disponibilidad de grandes masas de recursos para estimular la inversión, aumentar significativamente la producción, el empleo, el ingreso disponible y el mercado interno. Esto no ha ocurrido y las afores se han convertido más bien en financiadoras del endeudamiento público.

Si el país ha de recobrar su viabilidad, tendrá que adoptar, y pronto, un nuevo modelo económico en el que el Estado asuma el papel activo de promoción y moderación que le fija la Constitución, se privilegie la inversión pública sobre el gasto corriente y éste sea ampliamente depurado, se multiplique la construcción de obras de infraestructura económica -camino, presas, energía- y social: escuelas, hospitales y clínicas. Si esta reorientación de las políticas públicas se emprende en lo inmediato, todavía se podrá aprovechar una parte del bono demográfico, pero si se difiere, no sólo se perderá la oportunidad que ofrece la actual estructura de edades de la población, sino que se correrá el riesgo de perpetuar el subdesarrollo a niveles cada vez más bajos en el México del siglo XXI.

7. EDUCACIÓN

El conocimiento del entorno, el lenguaje oral que aun en sus etapas más primitivas fue el medio fundamental de comunicación entre los individuos, la organización de comunidades para la defensa colectiva y la búsqueda de alimentos fueron procesos decisivos para el surgimiento del hombre como especie. Más tarde, los dibujos y mucho después la escritura, permitieron a los grupos humanos compartir saberes con otros que por diversos motivos siguieron sus huellas. Pero la gran virtud del lenguaje escrito fue su capacidad para transmitir conocimientos de una generación a las sucesivas: los vivos pudieron escuchar a los muertos y aprovechar su sabiduría para enriquecer el conocimiento colectivo.

Debido a que las capacidades físicas del hombre -fuerza, velocidad, visión, etcétera- eran más limitadas que las de otros animales superiores, pudo sobrevivir gracias a sus aptitudes para conocer su entorno inmediato y modificarlo. El intercambio de conocimientos entre grupos humanos distintos potenció la capacidad de supervivencia de todos ellos, mientras que los niños y jóvenes aprendían por imitación y, poco a poco, por el adiestramiento y enseñanza que recibían de algunos adultos.

Si el conocimiento fue recurso de supervivencia de nuestros primeros ancestros, a medida que se desarrollaron y estratificaron las sociedades -primero por la ley del más fuerte, luego por la del más apto y más tarde por la del más sabio- el propio conocimiento fue objeto de apropiación de los grupos dominantes. El lenguaje escrito, vehículo por excelencia del saber, se convirtió en patrimonio exclusivo de las élites. En etapas más avanzadas, los tres agentes educadores fueron la familia, el Estado y la comunidad circundante. La expansión de la educación a todos los grupos sociales es muy reciente y en la mayor parte del mundo está circunscrita a la educación elemental impartida por el Estado.

En nuestros días, los índices de educación -acceso a la escuela y calidad de la enseñanza- son un termómetro objetivo del grado en que existe la democracia. Además, existe una alta correlación entre los niveles de educación y el grado de desarrollo de las economías, como lo ha

Jóvenes: una generación que podríamos perder

puesto en evidencia, entre otros instrumentos de evaluación, la prueba PISA aplicada a los países de la OCDE.

En México, la educación básica -únicamente la básica- se hizo obligatoria, gratuita y laica porque así lo estableció el constituyente de 1917 en el artículo 3°, pero el disfrute real de este derecho social tuvo que esperar a la estabilización del país y la consolidación del Estado revolucionario en el tercer decenio del siglo XX. Desde los años treinta, se montaron campañas masivas de alfabetización, se ensayaron “misiones” para llevar la educación -lectura, escritura, aritmética y capacitación para el trabajo de acuerdo con el medio de cada comunidad- a los lugares de más difícil acceso, gracias a la generosidad y patriotismo de los maestros mexicanos. Se abrieron escuelas, se instituyeron los desayunos escolares, se dotó a los niños de libros de texto gratuitos y todos estos medios permitieron elevar los niveles de alfabetismo y escolaridad de la población.

La calidad educativa era insuficiente y la escuela no estaba operativamente vinculada con la economía local, estatal o nacional, pero en los estadios iniciales de la industrialización, bastaba con la preparación escolar básica y la capacitación que los propios empresarios daban a sus trabajadores, para que realizaran tareas cada vez más complejas. Infortunadamente, a pesar de las reformas educativas, no se logró aumentar significativamente la calidad de la enseñanza en materias fundamentales -lenguaje, matemáticas, historia, civismo- ni se avanzó seriamente hacia la vinculación funcional de la escuela con la empresa, en parte por el temor de que el Estado formara personal apto pero acrítico en beneficio de los empresarios y en parte porque no se valoró suficientemente esa necesidad.

La combinación de diversos factores positivos -educación, empleo, urbanización, industrialización- se tradujo en un fenómeno social imprevisto, que si bien coincidió con movimientos semejantes en otras partes del mundo, tuvo raíces propias: la insurgencia juvenil de 1968 que exigía el respeto de las autoridades policiacas a la ley y, de manera más amplia, la democratización del país. El movimiento estudiantil tomó por sorpresa a la clase política cuyos instrumentos tradicionales de control no funcionaron, creyó o dijo creer que la protesta pretendía crear un clima de inestabilidad que impidiera o estorbara la celebración de la XIX Olimpiada, y el poder político optó por la represión.

Con el instrumental analítico de los viejos tiempos de la política mexicana, el nuevo presidente de la República, Luis Echeverría, parece haber entendido que el origen del problema era el envejecimiento de los cuadros dirigentes e intentó la reconciliación a través de dos vías: la integración de jóvenes menores de 30 años de edad a cargos gubernamentales de alta responsabilidad y la apertura de nuevas instituciones de educación superior. Lo que no logró ese gobierno ni el sucesivo fue transformar la planta productiva para integrar eficientemente a cantidades ingentes de nuevos profesionistas. La sucesión de crisis económicas iniciada en el último año del gobierno echeverrista y el vuelco hacia la súbita apertura económica a mediados del decenio de 1980 impidieron que el avance cuantitativo en la oferta de espacios en las escuelas públicas de nivel superior se tradujera en mejoramiento sustantivo de los recursos humanos. Progresivamente, los nuevos profesionistas no encontraban empleo o tenían que ocuparse en tareas ajenas a su profesión.

El golpe de timón de la política económica, primero, y las deficiencias académicas del sistema educativo expandido, después, impidieron el mejoramiento general de la calidad de la educación. Los grandes grupos industriales crearon sus propias instituciones de educación superior y enviaron a sus hijos a hacer estudios de posgrado en el extranjero. La diferencia entre esas universidades y las públicas no era sólo ni principalmente la calidad académica en abstracto, sino la naturaleza misma del conocimiento que se impartía en unas y otras, especialmente en las áreas de economía, finanzas y administración.

En un reciente ensayo⁹, Carlos Tello se pregunta “¿Cómo es que lograron los multimillonarios aumentar tan notablemente su participación en la riqueza y en el ingreso? ¿Cómo lograron ganar el prestigio del que ahora gozan?”.

Él mismo responde con admirable claridad:

[...] Con el propósito de dominar el futuro, las ideas y el pensamiento del mañana, y hacerlo cuanto antes, los ricos y la derecha política se concentraron en la conquista de las universidades (públicas y privadas) y otros centros de enseñanza superior. Lo que se buscaba era prestigiar el pensamiento económico más a modo al de los ricos. En 1974, se le otorga a F. Hayek, quien con mayor energía y virulencia argumentó en contra de la intervención

9 Tello, Carlos. La revolución de los ricos

del Estado en la economía, notablemente en su libro The Road to Serfdom, el premio Nobel de Economía. Dos años después, en 1976, se le otorga el mismo premio a M. Friedman, que se había distinguido por sus escritos Capitalism and Freedom y Free to Choose (este último lo hicieron serie de televisión y tuvo una muy amplia audiencia) a favor de la economía de mercado y la no intervención del Estado, y que fue asesor económico del conservador candidato a la presidencia de Estados Unidos, Barry Goldwater. Ganaba, de esta manera, prestigio el pensamiento neoliberal (neoclásico, diríamos los economistas) que, por lo demás, se difundía ampliamente y con rapidez en las universidades y en otros centros de enseñanza superior, desplazando al pensamiento keynesiano que a la luz de muchos estudiantes, por la influencia de sus nuevos profesores, se desacreditaba. Esto sucedía en Estados Unidos, en buena parte de Europa, en América Latina y, desde luego, en México. Diez años después del movimiento estudiantil de 1968 (i.e., los de la Universidad de Columbia, en Nueva York, la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de París, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional) los departamentos de economía de las universidades en muchas partes del mundo estaban ya dominados por el pensamiento neoliberal. Entre 1974 y 2000, ocho profesores de la Universidad de Chicago y más de once que estuvieron en algún momento asociados a ella obtuvieron el premio Nobel de Economía. Es decir, en veinticinco años se le otorga diecinueve veces el premio a economistas de la Universidad de Chicago. No sólo se prestigió ese pensamiento sino que, además se difundió ampliamente en las aulas de las universidades. También, en paralelo, se desprestigió el pensamiento keynesiano y, ya no se diga, el pensamiento socialista y marxista (ya ha dejado de leerse en México a P. Baran, P. Sweesy, M. Kalecky, M. Dobb, O. Lange, P. Vuskowich, C. Furtado y a otros grandes economistas). [...] También los ricos establecieron (o fortalecieron las existentes) fundaciones dedicadas al fomento de sus ideas y la forma en que ellos quieren orientar, conducir la marcha de las economías nacionales. Fundaciones que se dedican al estudio y análisis de la economía, el papel que dentro de ella debe desempeñar el sector

público, las finanzas públicas (gasto y su financiamiento) y, en general, la política económica y social puestas en práctica. Y así, los ricos encontraron respaldo, para el logro de sus objetivos, en poderosas instituciones académicas, de prestigio (entre ellas están, en Estados Unidos, la Heritage Foundation, Hoover Institution, American Enterprise Institute, The Brookings Institution todas ellas financiadas generosamente por las grandes corporaciones estadounidenses). Lo mismo sucede en otras partes del mundo.

En México, a principio de la década de los años ochenta, se acelera de manera notable -y por cierto muy apoyado por el gobierno- el crecimiento de las entidades de educación superior privadas, que se concentran en las disciplinas propias para los negocios de los ricos, tales como economía, derecho, administración y contaduría. La vertiginosa expansión del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITM) se inicia en esos años y la forma en que lo hace, garantiza el respaldo de los ricos: en las distintas entidades federativas reúne a los ricos de la zona y propone que ellos pongan el capital y el ITM los conocimientos y sus capacidades. Surgen también organizaciones parapolíticas, como Desarrollo Humano Integral, A. C. (DHIAC) y Pro-vida y otras más, que actúan frente al poder público.

Poco a poco los egresados de las universidades e institutos públicos de educación superior fueron siendo rechazados en las grandes empresas y luego lo serían incluso en los cargos de dirección del gobierno. La educación pública superior había perdido la batalla. La sociedad también.

Educación en el siglo XXI

Al iniciarse el segundo decenio del siglo XXI, la vida de las familias mexicanas transcurre en circunstancias muy difíciles debido a que el país está atrapado en un nudo de crisis que se refuerzan mutuamente: bajo crecimiento de la economía, desigualdad social en aumento, violencia social derivada de la actividad criminal y su combate, desempleo y expansión desproporcionada de la economía informal, desintegración de la familia, sea por la migración hacia el extranjero o por fenómenos de descomposición de las relaciones intrafamiliares -violencia, alcoholismo,

Jóvenes: una generación que podríamos perder

adiciones-, fortalecimiento de los poderes fácticos en desmedro del Estado, desigualdad con niveles alarmantes, tanto de pobreza extrema, como de concentración de la riqueza.

La escuela en todos los niveles se encuentra en franco deterioro. Las olas expansivas de pobreza rompen las pautas de convivencia familiar, propician problemas serios de desnutrición y enfermedades en los niños y adolescentes, lo que reduce el rendimiento escolar y genera fenómenos perversos como la deserción y la reprobación que, a su vez, entrañan frustración para los alumnos y desperdicio de recursos para la sociedad. Los maestros -padres y madres de familia en muchos casos- viven y sufren los mismos problemas que el resto de la sociedad, pero reproducen otros en su trabajo escolar, especialmente en lo relativo a la calidad de la educación.

En las actuales circunstancias, el sistema educativo no es capaz de preparar adecuadamente a los estudiantes ni de retenerlos dentro de cada nivel y menos aún entre los distintos niveles hasta la educación superior. Uno de los factores principales de la deserción, la reprobación y la baja estima de los jóvenes por la educación escolar es el divorcio que existe entre educación y empleo.

Este fenómeno es quizá el factor más importante que diferencia a los jóvenes del siglo XXI de los jóvenes de mediados del siglo XX. Mientras que la escuela fue para éstos el recurso fundamental para mejorar sus condiciones materiales de vida y avanzar en la pirámide económica, social y cultural, para los jóvenes de hoy la escuela es un mal que no les ofrece ninguna ventaja tangible. Este hecho disminuye aún más la capacidad de la educación escolar como instrumento de cambio social y condena a los jóvenes a la ignorancia y la incompetencia, con las consecuencias económicas, sociales, culturales y de autoestima que ello conlleva.

El nivel medio de escolaridad ha aumentado a unos diez años, debido en buena medida a la inclusión de la secundaria en el nivel de educación básica gratuita y obligatoria a principios del decenio de 1990, porque se consideró que este nivel educativo era el mínimo para la formación del ser humano en las sociedades contemporáneas y el desarrollo de habilidades y competencias básicas para vivir y trabajar en el mundo complejo de nuestro tiempo.

Sin embargo, la calidad de la educación básica es deplorable y sus insuficiencias se trasladan a los niveles medio y superior, escamotean el

derecho a la educación de millones de niños y jóvenes, disminuyen sus posibilidades de incorporarse al trabajo en la economía formal y generan cuantiosos desperdicios de recursos para hoy y el futuro inmediato.

La capacitación es insuficiente, ocasional, tiene una cobertura estrecha, no está vinculada a las competencias laborales que demandan los mercados de trabajo ni a los avances de la tecnología y carece de una adecuada diferenciación de los variados grados de complejidad técnica del aparato productivo. Los recursos que las empresas y el Estado destinan a capacitar, mejorar y mantener actualizados a los jóvenes trabajadores no alcanzan la masa crítica mínima para que estas actividades tengan algún efecto positivo sobre la calidad del factor trabajo. Estas distorsiones generan desperdicios, desalientan las innovaciones tecnológicas de la planta industrial y de servicios y deterioran la competitividad de la economía nacional.

Educación básica

La educación básica ya no es el recurso de la sociedad para el cambio social transgeneracional y ha dejado de ser, para los jóvenes, una puerta hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida y de sus expectativas de futuro. Ni siquiera es capaz de dotar a los alumnos de las herramientas indispensables para la convivencia diaria en las sociedades modernas, como la comprensión de la lectura y el razonamiento matemático elemental.

De acuerdo con los resultados de la prueba ENLACE de 2010, el 63.1 por ciento de los alumnos tenía un nivel insuficiente o elemental de rendimiento en Español, el 30.2 por ciento tenía un rendimiento “bueno” y sólo el 6.7 por ciento alcanzaba la calificación de “excelente. En Matemáticas el 66.1 por ciento de los alumnos que hicieron la prueba en 2010 tenían un rendimiento insuficiente o elemental, el 30.3 por ciento obtuvieron el nivel “bueno” y apenas el 4.8 por ciento, “excelente”. En historia, los niveles insuficiente y elemental sumaban el 78.9 por ciento, 18.5 por ciento obtuvo un resultado “bueno” y 2.6 por ciento, “excelente”.

Se advierte una mejoría en el quinquenio 2006-2010 en las tres materias. En Español, el porcentaje de alumnos con rendimiento insuficiente

Jóvenes: una generación que podríamos perder

bajó de 20.7 a 17.0 por ciento y con rendimiento elemental, de 58.1 a 46.1 por ciento. Al mismo tiempo, el volumen de alumnos con rendimiento “bueno” se incrementó de 19.6 a 30.2 por ciento y el de rendimiento “excelente”, de 1.7 a 6.7 por ciento. En Matemáticas los cambios también fueron positivos: se redujeron los porcentajes de rendimiento menor y aumentaron los de rendimiento más alto, como puede observarse en las tablas siguientes, pero aun así, la escuela primaria no está cumpliendo satisfactoriamente con la función de proveer a los niños de la preparación mínima necesaria para la vida, pues es inaceptable que en la prueba más reciente, seis de cada diez alumnos obtuvieran calificaciones bajas o muy bajas en Español y Matemáticas, y cuatro de cada diez, en Historia.

Primaria. Rendimiento en Español. Nivel de logro

	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
2006	20.7	58.1	19.6	1.7
2007	20.1	55.3	21.8	2.8
2008	20.8	48.7	26.7	3.8
2009	19.2	48.0	28.1	4.8
2010	17.0	46.1	30.2	6.7

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Primaria. Rendimiento en Matemáticas. Nivel de logro

	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
2006	21.0	61.4	16.0	1.6
2007	20.2	57.5	19.0	3.3
2008	22.8	49.5	23.0	4.7
2009	20.3	48.6	24.9	6.1
2010	19.7	46.4	25.8	8.1

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Primaria. Rendimiento en Historia 2010

Logro	Porcentaje
Insuficiente	16.0
Elemental	62.9
Bueno	18.5
Excelente	2.6

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Los resultados en secundaria son aún más desalentadores. En 2010, el 82.4 por ciento de los alumnos logró un rendimiento insuficiente o elemental, el 16.6 por ciento mostró un rendimiento “bueno” y sólo el 1.0 por ciento, “excelente”. En matemáticas, los resultados son peores, pues en los niveles insuficiente y elemental se encuentra el 87.3 por ciento de los alumnos: casi nueve de cada diez, y en Historia estos niveles suman el 75.5 por ciento, como lo muestran las tablas siguientes.

Secundaria. Rendimiento en Español. Nivel de logro

	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
2006	40.7	44.6	14.0	0.7
2007	36.3	44.8	17.9	1.0
2008	32.9	49.2	17.1	0.8
2009	31.7	49.5	18.0	0.8
2010	39.7	42.7	16.6	1.0

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Secundaria. Rendimiento en Matemáticas. Nivel de logro

	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
2006	61.1	34.7	3.8	0.4
2007	57.1	37.3	5.1	0.5
2008	55.1	35.7	8.3	0.9
2009	54.5	35.5	9.1	1.0
2010	52.6	34.7	10.5	2.2

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Secundaria. Rendimiento en Historia 2010

Logro	Porcentaje
Insuficiente	12.9
Elemental	62.6
Bueno	18.7
Excelente	5.8

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Con estos resultados es difícil imaginar un futuro aceptable para los niños y jóvenes de hoy y para el país en su conjunto, pues existe una correlación positiva entre el dominio de las herramientas básicas del conocimiento y el desarrollo de las economías nacionales y, más aún, sus perspectivas. Los resultados del examen aplicado por la OCDE a una muestra de estudiantes de 15 años, dentro del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), muestran que el 54 por ciento de los jóvenes de Shanghái-China obtuvieron niveles de desempeño “altos” en el dominio de la Lectura, en México sólo el 5.7 por ciento de los estudiantes de la muestra logró resultados equivalentes. En Ciencias, la diferencia es aún mayor: 60.3 por ciento los de Shanghái-China y 3.3 por ciento los de México y en Matemáticas, el 71.2 por ciento de los estudiantes de Shanghái-China obtuvieron resultados altos y el porcentaje para los mexicanos fue de sólo el 5.4 por ciento.

Porcentaje de estudiantes con desempeño en niveles altos

País	Lectura	Ciencias	Matemáticas
Shanghái-China	54.2	60.3	71.2
OCDE	28.3	29.1	31.6
México	5.7	3.3	5.4
América Latina	6.6	4.7	4.7
Chile	10.6	8.9	6.9

Fuente: MÉXICO EN PISA 2009. *Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes* (PISA). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Porcentaje de estudiantes con desempeño en niveles intermedios

País	Lectura	Ciencias	Matemáticas
Shanghái-China	41.8	36.5	23.9
OCDE	52.9	53.0	46.4
México	54.2	49.4	43.8
América Latina	44.6	43.2	32.2
Chile	58.8	58.8	42.0

Fuente: MÉXICO EN PISA 2009. *Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes* (PISA). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Porcentaje de estudiantes con desempeño en niveles bajos

País	Lectura	Ciencias	Matemáticas
Shanghái-China	4.1	3.2	4.9
OCDE	18.8	18.0	22.0
México	40.1	47.4	50.8
América Latina	48.9	52.0	63.1
Chile	30.6	32.3	51.0

Fuente: MÉXICO EN PISA 2009. *Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes* (PISA). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Jóvenes: una generación que podríamos perder

De acuerdo con la misma fuente, entre los años 2000 y 2009, prácticamente no cambiaron los resultados en Lectura, pues la diferencia de tres puntos es inferior al error estadístico. De 2003 a 2009 hubo una mejoría en el área de Matemáticas y en Ciencias el avance fue poco significativo.

Tabla C-4 Resultados de México en PISA 2000, 2003, 2006 y 2009

Puntaje promedio en	2000	2003	2006	2009
Lectura	422			425
Matemáticas	-	385		419
Ciencias	-	---	410	416
Cobertura 15 años	51.60%	58.10%	62.90%	66.20%

Fuente: MÉXICO EN PISA 2009. *Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes* (PISA). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Considerando los niveles medios de rendimiento en Lectura, Ciencias y Matemáticas, los estudiantes de cuatro entidades federativas -Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua y Aguascalientes- mostraron resultados más altos que la media nacional, y los de cinco entidades -San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Chiapas- alcanzaron resultados inferiores a la media nacional. La correlación con los niveles generales de desarrollo es particularmente notable; en el polo alto, el Distrito Federal y Nuevo León y en el bajo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Tabla C-1 Media de desempeño de las Entidades respecto a la media nacional en 2009

Áreas	Media nacional	Entidades por arriba de la media	Entidades por debajo de la media
Lectura	425	D. F. Nuevo León Chihuahua Aguascalientes	San Luis Potosí Oaxaca Tabasco Guerrero Chiapas
Ciencias	416	D. F. Nuevo León Chihuahua Aguascalientes	San Luis Potosí Oaxaca Tabasco Guerrero Chiapas
Matemáticas	419	D. F. Nuevo León Chihuahua Aguascalientes Colima Jalisco	San Luis Potosí Oaxaca Tabasco Guerrero Chiapas

Fuente: MÉXICO EN PISA 2009. *Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes* (PISA). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

La proporción de jóvenes que entran y terminan la secundaria disminuye en razón directa de los niveles más bajos de ingreso familiar y la calidad de la enseñanza es insatisfactoria, como lo muestran las pruebas aplicadas a estudiantes de tercero de secundaria.

A la baja calidad de la enseñanza en el sistema educativo mexicano se agregan otros problemas. Alrededor de 1.5 millones de jóvenes abandonan la escuela antes de concluir la secundaria y la mitad interrumpe sus estudios al terminar la primaria. La deserción escolar continúa siendo un problema sin solución y es atribuible, por una parte, a las precarias condiciones socioeconómicas de las familias, que obligan a los adolescentes a integrarse al trabajo, incluso sin paga, y por la otra, a la falta de incentivos de la propia escuela para la continuidad de los estudios y a

Jóvenes: una generación que podríamos perder

la percepción de que el esfuerzo de cursar tres años de secundaria no se verá compensado con mejores oportunidades de empleo.

Los efectos del modelo económico y de las crisis recurrentes sobre el empleo, el ingreso y el consumo de la población, así como a las actitudes que genera en los jóvenes la inexistencia de oportunidades reales de futuro, acentúan estos fenómenos perversos. El Consejo Nacional de Población estima que en 2009 asistían a la escuela poco más del 40 por ciento de los jóvenes, si bien se observa que la asistencia de las mujeres, que estaba cuatro puntos porcentuales abajo que la de los varones, hoy es ligeramente superior a la de éstos.

La deserción escolar constituye un holgado desperdicio de recursos públicos y un motivo de frustración y baja autoestima de los jóvenes. Además de los problemas económicos y sociales que generan este fenómeno, es probable que las familias y los jóvenes hayan percibido que la educación ha dejado de ser un espacio de tránsito hacia la obtención de un empleo digno en la economía formal. La deserción suele estar acompañada de otros problemas que inciden negativamente sobre la población juvenil, como el desempleo, la exclusión social, el pandillerismo, la violencia. En los jóvenes adultos, el abandono de las aulas suele estar asociado a la necesidad de ingresos para la formación de parejas y la escuela requiere tiempo.

A ello se agregan las condiciones singularmente adversas que genera la marginación social, tales como la estigmatización y la segregación, la irresponsabilidad de los padres, el aislamiento geográfico de las zonas rurales e indígenas alejadas de las vías de comunicación, la violencia intrafamiliar, escolar y comunitaria; el maltrato de los policías. Todos estos factores propician la deserción y la reprobación escolares y son generadores potenciales de conductas antisociales y de la tendencia a la comisión de delitos.

La reprobación, los problemas ocasionados por conductas antisociales y la presión que ejerce la institución escolar sobre los alumnos de familias de menores ingresos contribuyen a la deserción escolar que, a su vez, profundiza la falta de expectativas de estos niños y jóvenes.

Los altos índices de reprobación se deben, en gran parte, a la incompetencia del personal docente para hacer atractivo e interesante el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también a problemas de nutrición y factores socioculturales adversos. Uno de cada cuatro adolescentes

inscritos en las escuelas secundarias no termina este ciclo escolar o lo hace con uno o varios semestres de retraso.

Los alumnos egresados del nivel básico se enfrentan a un doble problema: por una parte, la oferta en las escuelas de educación media superior es insuficiente para recibir a todos los que han terminado sus estudios secundarios, y por la otra, los conocimientos, habilidades y capacidades que tienen al ingresar son insuficientes para la enseñanza propedéutica, lo que obliga a la escuela a corregir las fallas más paralizantes -comprensión de la lectura, expresión oral y escrita, operaciones matemáticas simples- en perjuicio de la calidad y cantidad de los conocimientos que imparten estas escuelas. La deserción y la reprobación son más acentuadas en los grupos y regiones socioeconómicas rezagadas, lo que contribuye a sostener la desigualdad y sus extremos de miseria y riqueza y reduce la potencialidad de esos estratos sociales y áreas geográficas para mejorar su condición en un futuro previsible.

Los problemas de la educación básica se han acumulado a lo largo de muchos años y los esfuerzos para superarlos no han dado resultados por diversos motivos, entre los cuales destaca una relación viciada entre el Estado como empleador y las organizaciones sindicales. Esto ha hecho que el gobierno desperdicie recursos públicos que de suyo son insuficientes y que el país esté perdiendo la oportunidad de aprovechar las altas proporciones de población joven para enfrentar los problemas económicos y sociales que lo agobian.

Los autores del presente estudio sostienen que el magisterio, como estrato social diferenciado, tiene un grado importante de responsabilidad en la decadencia de la educación básica, a partir de las relaciones peculiares del Gobierno Federal con el sindicato magisterial. Son responsables los maestros mismos porque toleran y aun disfrutan de un pacto laboral relajado que encubre un pacto político que sin ser explícito es evidente. Son responsables porque su formación cultural, sus valores y actitudes diarias ejercen una poderosa influencia sobre los alumnos y son, por lo mismo, factores estratégicos para recuperar la noble y eficaz función social de la educación pública.

Los maestros tienen la doble función de servidores públicos y educadores. Como trabajadores del Estado tienen todo el derecho a luchar por sus demandas laborales por todos los medios legales, el primero de los cuales es su libertad para organizarse sindicalmente. Pero estas luchas

Jóvenes: una generación que podríamos perder

-legítimas como las de todo trabajador- no deben interferir y mucho menos obstruir su función educativa propiamente dicha, pues ello no afecta única ni principalmente a su patrón, que es el gobierno, sino a la sociedad y con mayor fuerza a la parte más desprotegida del pueblo mexicano, que tiene en la educación de calidad la única esperanza de que sus hijos superen sus condiciones de atraso en que viven las familias.

En la historia de México, los maestros han estado al lado del pueblo del que proceden y al que se deben, y esta cualidad no entra en conflicto con sus derechos como trabajadores del Estado. Los maestros que México necesita deben ser, al mismo tiempo, los hombres y mujeres patriotas, generosos y conscientes de su responsabilidad como educadores de cientos de mexicanos, y trabajadores que hacen respetar y valer sus derechos a condiciones cada vez mejores de vida. La conciliación de estas dos facetas del magisterio entraña cambios profundos en las pautas mismas de la lucha sindical de estos singulares trabajadores. La nación mexicana, que está por encima de grupos y facciones, necesita con urgencia una nueva cultura magisterial.

El papel de los maestros es fundamental en el análisis y solución de problemas sociales de alto impacto, como la paradoja que se da entre el desempleo y el subempleo, por una parte, y la falta de recursos humanos con capacidades básicas, por la otra. Tampoco puede ignorarse la responsabilidad del magisterio en la corrección de fenómenos sociales altamente destructivos, como el culto a la violencia, el desprecio a la observancia de las leyes y reglamentos, el enaltecimiento del abuso y otros vicios que carcomen el tejido social.

Una de las anclas que tienen inmovilizada a la educación pública básica está constituida por las cúpulas de las dos representaciones sindicales de cobertura nacional: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que satisfacen las demandas laborales de los maestros pero han desviado sus capacidades de movilización a la actividad político-electoral y se han convertido en grupos de presión.

Las poderosas élites sindicales que cumplen las exigencias económicas de amplios grupos magisteriales se sintetizan en una demanda no expresa de mayores privilegios posibles y el menor esfuerzo posible, lo cual degrada el papel del magisterio como agente de cambio social y distancia a los maestros del pueblo del que provienen y al que se deben.

El ausentismo, el fraude laboral en la forma de millares de “comisionados” que reciben salarios y prestaciones sin trabajar, la incompetencia y la resistencia a mejorar la calidad profesional, como no sea en apariencia y como pretexto para ascensos escalafonarios y salariales, las actitudes y la formación cultural de esas multitudes de docentes que propician en los niños y jóvenes la cultura del plantón, la marcha, el vandalismo y la obediencia a los mandatos de uno u otro liderazgos.

Aunque el SNTE es formalmente el sindicato que representa al personal docente federal, la CNTE tiene el control de varias secciones sindicales, incluyendo algunas muy numerosas -y poderosas- como las del Distrito Federal, Oaxaca y Michoacán. La enorme capacidad de movilización y el poder financiero en manos de los dirigentes sindicales son utilizados para la promoción de los intereses políticos de ambos liderazgos y sus grupos, dentro y fuera del ámbito educativo.

El SNTE es una de las estructuras sindicales heredadas del modelo corporativista predominante desde el segundo tercio del siglo XX, cuya función en el proyecto político gubernamental de los años treinta a los setenta fue mantener el control de los trabajadores a fin de moderar sus demandas para no inhibir la inversión de capitales mexicanos, decisiva para la formación de una industria nacional. El modelo sindical se extendió al sector público, pero con restricciones al ejercicio de derechos básicos como el de huelga, con el fin de que la Administración Pública no fuera perturbada por conflictos laborales inmanejables.

Las dirigencias sindicales eran estructuras de poder firmemente estratificadas, para garantizar la más estricta disciplina sindical y política en todos los niveles de la pirámide, en cuya cúspide estaban el líder nacional del respectivo sindicato y los líderes de las federaciones y confederaciones, la más importante y duradera de las cuales fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y, para los sindicatos de gobierno, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). El SNTE fue el sindicato más numeroso y fuerte de ésta última organización nacional.

Para que la estructura piramidal del poder sindical cumpliera su función, todos los líderes reconocían la autoridad superior del presidente de la República, cuya voluntad era acatada por todas las formaciones políticas pertenecientes o cercanas al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Del presidente provenía toda clase de favores, incluida la protección del

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Estado, pero también era la última e indiscutible instancia de todos los conflictos políticos. Los salarios y prestaciones de los trabajadores se negociaban en niveles altos de los sindicatos, las empresas y el gobierno federal y los líderes disponían de dos herramientas para el control de los trabajadores: la cooptación y la represión, a las que recurrían según lo ameritara cada caso.

En este esquema no cabía la democracia sindical, aunque solían hacerse actos de simulación electoral, pero mientras los líderes mantuvieran el control de los trabajadores, podían durar en el cargo de por vida, como fue el caso del más conspicuo de estos dirigentes, Fidel Velázquez.

El mismo modelo, pero en una realidad política enteramente distinta, es el que tiene el SNTE. La dirigente nacional vitalicia, Elba Esther Gordillo, llegada a la cúpula sindical por designación mal disimulada del presidente Carlos Salinas de Gortari y por recomendación del entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, posee una enorme fuerza política, derivada tanto de la capacidad de movilización de la estructura sindical que ella encabeza -y que le otorga una fuerza de movilización política incontestable- como de los compromisos con actores políticos de gran relevancia: diputados, senadores, gobernadores y aun el presidente de la República.

En estos compromisos -y en el manejo de las cuotas sindicales- está el secreto de su poder: ella negocia al más alto nivel político, por encima incluso del secretario de Educación Pública, y obtiene aumentos salariales y de prestaciones muy significativos para las bases y en particular para los cuadros altos y medios del sindicato. Los dirigentes intermedios tienen las dosis de poder adecuadas a su nivel, pero bajo la condición inexcusable de la disciplina a sus superiores en la jerarquía sindical, ninguno de los cuales se aparta un ápice de la voluntad de la dirigente.

La CNTE surgió de la disidencia magisterial, cuyas luchas por la democracia sindical y reivindicaciones laborales empezaron a fructificar a finales de los años 1950 con el Movimiento Revolucionario del Magisterio encabezado por el mítico dirigente comunista Othón Salazar. Formaciones posteriores vinculadas a movimientos políticos de izquierda confluyeron en la insurgencia sindical dentro del SNTE. Gracias a los ingresos por cuotas de las primeras secciones sindicales que conquistó, la CNTE amplió su espacio a lo largo de los años hasta convertirse en una importante fuerza sindical que, pese a sus radicales diferencias

políticas, coexiste con el SNTE y su dirigencia. En los primeros años, Elba Esther Gordillo reconoció la existencia de esa organización y es posible que haya un entendimiento de coexistencia no escrito cuya base primera sería el respeto mutuo al territorio sindical.

Aparte de sus alineamientos políticos, la principal diferencia entre ambas organizaciones es que la señora Gordillo negocia con el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los partidos políticos; los maestros miembros de la CNTE reciben los mismos beneficios que sus colegas del SNTE, más los que les otorgan los gobiernos estatales donde son mayoría. Mientras que el SNTE negocia para lograr reivindicaciones para sus agremiados, reforzar la organización sindical y preservar los liderazgos, la CNTE ejerce presiones a través de paros de actividades, marchas, mítines, plantones y otras expresiones de protesta más o menos belicosas.

Esta descomposición de la lucha sindical ha repercutido en la cultura laboral del grueso de los maestros y ha tenido efectos muy adversos en la educación pública nacional. El gremio magisterial, que participó en el cambio social del siglo XX, del que surgieron amplias y diversificadas clases medias, en la actualidad está burocratizado y asume como eje de sus demandas laborales el menor trabajo posible a cambio de las mayores recompensas posibles. Y las consigue, ya sea por las artes negociadoras de la dirigente del SNTE o por las presiones generalmente masivas que encabezan los dirigentes de la CNTE.

Educación media superior

La Educación Media Superior es el puente entre la educación básica, que dota a los alumnos de los conocimientos y habilidades fundamentales para la vida, y el nivel superior, que forma profesionistas en distintas ramas del saber humano y la actividad económica. Los egresados de este nivel educativo son ciudadanos que deben estar preparados para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos y contar con los saberes básicos para su desarrollo personal y familiar, así como con valores cívicos que les permitan ser agentes positivos para su familia, su comunidad y el país en su conjunto.

Bajo el rubro general de Educación Media Superior se agrupan tres tipos de escuelas y programas: el bachillerato general, que tiene

Jóvenes: una generación que podríamos perder

objetivos propedéuticos y que reúne casi seis de cada diez alumnos inscritos en este nivel, el profesional técnico, que prepara técnicos para el trabajo en diversas ramas y al que acude poco más de uno de cada diez estudiantes, y el bachillerato tecnológico, que reúne características de los dos primeros y al que corresponde la cuarta parte de la matrícula de Educación Media Superior.

En general, las escuelas de este nivel dan cabida a nueve de cada diez egresados de secundaria, que constituyen menos de la mitad de los jóvenes de 16 a 18 años, que deberían concurrir a escuelas de este nivel por razones de edad. Esto se debe, sobre todo, a la cobertura insuficiente, la reprobación y la deserción escolar en el ciclo de secundaria. Aunque son fenómenos multifactoriales, la reprobación está asociada principalmente a las deficiencias en la impartición de conocimientos de educación básica -que se arrastran en cada grado de primaria y secundaria- y la deserción escolar está más relacionada con problemas económicos y sociales de los estudiantes y sus familias.

Un problema fundamental de este nivel educativo es la mala preparación general del personal docente, tanto en los conocimientos que debe impartir como en las técnicas pedagógicas apropiadas. Gran cantidad de profesores de Educación Media Superior son profesionistas que no están ocupados en actividades propias de su especialidad y encuentran una salida laboral en el ejercicio del magisterio en este nivel. La mayor parte de las escuelas no tienen programas permanentes de capacitación y actualización para su planta de maestros.

Entre las principales tareas que se plantean para este nivel educativo destacan la expansión de los espacios y el desarrollo de sistemas a distancia con las nuevas tecnologías de la información para hacer frente a la presión creciente de la demanda, la preparación del personal docente, asociada a mejores remuneraciones, la adecuación de la escuela a las condiciones heterogéneas de un país con profundas diferencias regionales y sociales y la vinculación de la escuela con la economía local, sobre todo en la modalidad técnica.

En el siglo XXI, el acceso al empleo en el sector formal de la economía requiere cada vez con más frecuencia una preparación mínima equivalente a la de la Educación Media Superior, que dé a los jóvenes una formación básica para el aprovechamiento de la capacitación y actualización en el trabajo, necesarios para aumentar la productividad y la

capacidad competitiva de las empresas. La calidad y cobertura de este nivel educativo tienen una gran importancia para el desarrollo económico del país en el mundo altamente competitivo de nuestro tiempo.

Este nivel educativo se caracteriza por una enorme heterogeneidad de instituciones y programas, que no necesariamente responden a las exigencias diferenciadas de las distintas regiones del país, sino más bien a la condición federal, estatal, autónoma y privada de las escuelas, lo que cierra las posibilidades de revalidación de estudios para alumnos que cambian de domicilio o de tipo de escuela. Es urgente la racionalización de los planes y programas de estudios en las tres modalidades de este nivel con miras a establecer un Sistema de Educación Media Superior.

Las deficiencias de calidad de la educación media superior se advierten al considerar que en el ciclo 2008-2009, cinco de cada diez estudiantes que egresaron del bachillerato no tenían una adecuada comprensión de la lectura y la mitad de ellos no sabía multiplicar ni dividir, y las tendencias son crecientes en el tiempo.

Un factor que debe ser estudiado y corregido es el de los altos niveles de rechazo de los jóvenes que egresan del nivel propedéutico y no pasan el examen de acceso al nivel profesional. Este fenómeno ha sido motivo de fuertes conflictos políticos en la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de que el grueso de los estudiantes que ingresan al nivel de licenciatura no presenta exámenes sino que ingresan automáticamente. Para los que provienen de instituciones ajenas a la UNAM, se practican exámenes de selección y los lugares disponibles se asignan a quienes alcanzan puntuaciones más altas.

Independientemente de que se pueda o no, ¿debería cancelarse el pase automático? ¿Sería sensato que la UNAM y las instituciones equivalentes dieran cabida a todos los solicitantes, aunque no contaran con infraestructura y recursos financieros y humanos adicionales? ¿Sería recomendable destinar los recursos públicos que fueran necesarios para atender la totalidad de la demanda?

Ésta es una discusión mal planteada. El país necesita recursos humanos calificados para desarrollarse y masas ingentes de jóvenes tienen derecho a acceder a los estudios profesionales. Pero ni las necesidades del país ni los derechos de los jóvenes se satisfacen con la supresión de todos los requisitos académicos para el ingreso a las universidades. Más bien habría que preguntarse con seriedad si todos los egresados de las

Jóvenes: una generación que podríamos perder

escuelas propedéuticas de la UNAM poseen el mínimo de conocimientos y capacidades para ingresar a la licenciatura. Sin embargo, el hecho de que la capacidad de las instituciones públicas de educación superior permita atender a una porción minoritaria de los solicitantes, demuestra que hay mucho que hacer, tanto en el incremento de los presupuestos, como en la expansión de los servicios educativos a través de las nuevas tecnologías de la información, que no requieren inversiones desmesuradas en infraestructura y gastos administrativos y operativos.

El Estado debería destinar los recursos necesarios para universalizar el derecho a la educación pública desde el nivel básico hasta el posgrado, pero al mismo tiempo habría que reconocer la urgencia de elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los grados y niveles educativos, tanto para evitar que los primeros semestres se ocupen en llenar lagunas de conocimientos de la mayoría de los alumnos y a la postre tenga que disminuir la calidad académica del sistema educativo en su conjunto. La educación sin sistemas adecuados de evaluación y promoción constituiría -en buena medida así ha sido- un monumental engaño a los estudiantes y al país.

La baja calidad de la educación está asociada a los rezagos acumulados de grados y niveles previos, a la incompetencia o irresponsabilidad del personal docente y a otras limitaciones institucionales, pero también obedece, en gran medida, a factores socioeconómicos, principalmente la pobreza y la insuficiencia de recursos de las familias de las clases medias, así como a circunstancias socioculturales adversas, asociadas igualmente a la desigualdad. Por ello no se puede aspirar a mejorar a fondo el sistema educativo si no se contrarrestan simultáneamente los problemas sociales, culturales y económicos del entorno inmediato de los alumnos y en el contexto nacional.

Las desigualdades sociales y regionales tienen una expresión directa en la educación en todos los niveles, lo que constituye un poderoso factor de inmovilidad social: si los niños y jóvenes de las zonas rurales e indígenas y los cinturones de miseria de las ciudades no tienen las condiciones de nutrición y salud mínimas para asegurar un buen aprovechamiento escolar y viven en un medio ambiente adverso -familias desintegradas, adicciones, abusos y violencia, descomposición de las comunidades- no tendrán acceso a oportunidades laborales y culturales que les permitan escapar a la pobreza y la degradación. En el México del siglo XXI se da

un fenómeno social inverso al del segundo tercio del siglo XX, en el que la escuela fue la antesala de la movilidad social transgeneracional.

La desigualdad en la distribución del ingreso se reproduce en el sistema educativo y en particular en los niveles medio superior y superior. Mientras que la escuela pública registra niveles lamentables de calidad, tanto por insuficiencias presupuestarias, como por una gran variedad de razones -entre ellas, el perfil de los sindicatos y la burocratización de las instituciones- las escuelas privadas se dividen en dos categorías: aquellas a las que tienen acceso los hijos de familias de clases medias que por algún motivo -casi siempre falta de preparación- no pudieron ingresar a escuelas públicas, y las de altos niveles educativos y colegiaturas aún más altas, que son exclusivas para los hijos de familias de mayores ingresos. Esta estratificación asegura la preservación de una reducida clase dirigente -en los negocios y la política- y amplísimos grupos de pobres y clases medias que, en gran medida, están llamadas a la pauperización en el corto plazo o en el horizonte transgeneracional.

De acuerdo con los resultados de la evaluación ENLACE en Educación Media Superior, las habilidades básicas de los alumnos de este nivel educativo están muy por debajo del nivel satisfactorio, aunque las cifras mejoraron en los tres años considerados. Aunque en habilidad matemática disminuyeron los porcentajes del nivel de dominio insuficiente, de 46.5 por ciento en 2008 a 40.6 por ciento en 2010, el índice de nivel de dominio excelente sólo alcanzaba el 5.3 por ciento en el último año y el considerado bueno llegaba al 15.1 por ciento.

ENLACE Educación Media Superior
Resultados Nacionales - Habilidad Matemática

Nivel de dominio	2008*	2009**	2010***	2008	2009	2010
Insuficiente	361,275	370,752	347,090	46.5	46.1	40.6
Elemental	293,704	282,571	334,518	37.8	35.1	39.1
Bueno	94,678	112,198	129,050	12.2	13.9	15.1
Excelente	26,627	38,834	45,060	3.4	4.8	5.3
Total	776,284	804,355	855,718	100.0	100.0	100.0

* No se incluyen 32,062 alumnos por haber respondido a menos del 50% de las preguntas de matemáticas

Jóvenes: una generación que podríamos perder

** No se incluyen 31,386 alumnos por haber respondido a menos del 50% de las preguntas de matemáticas

*** No se incluyen 28,945 alumnos por haber respondido a menos del 50% de las preguntas de matemáticas

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

En habilidad lectora, aumentó el porcentaje de insuficiencia en bachillerato general, al pasar de 10.9 por ciento a 11.9 por ciento entre 2008 y 2010, después de un acentuado repunte en 2009 (16.7 por ciento). En este último año, se advirtió un importante deterioro de la habilidad lectora en las tres categorías consideradas en Educación Media Superior por la prueba ENLACE: bachillerato general, bachillerato tecnológico y Bachillerato técnico, lo que probablemente se deba a los criterios de evaluación.

El rendimiento excelente en habilidad lectora mejoró en las tres categorías, pero en un grado muy modesto. En bachillerato general pasó de 8.0 a 10.2 por ciento, en bachillerato tecnológico de 5.2 a 9.3 por ciento y en bachillerato técnico, de 3.0 a 5.4 por ciento.

Habilidad Lectora

Número de alumnos del último grado en cada nivel de dominio

Modalidad	2008	2009	2010
Bachillerato General (Preparatoria)	482,763	496,959	524,159
Bachillerato Tecnológico	242,851	254,752	283,780
Técnico	60,786	62,954	57,496

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Habilidad Lectora
Porcentaje de alumnos del último grado en cada nivel de dominio

Nivel de dominio	Bachillerato General (Preparatoria)	Bachillerato Tecnológico	Técnico
Insuficiente			
2008	10.9	14.1	16.9
2009	16.7	17.5	18.2
2020	11.9	10.7	12.6
Elemental			
2008	33.4	37.5	42.3
2009	31.8	34.5	37.9
2020	30.7	31.0	36.6
Bueno			
2008	47.7	43.2	37.9
2009	43.3	41.9	39.9
2020	47.2	49.0	45.3
Excelente			
2008	8.0	5.2	3.0
2009	8.2	6.1	4.1
2020	10.2	9.3	5.4

Fuente: SEP. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares (ENLACE).

Desde los años 1980, pero con particular rigor en el primer decenio del siglo XXI, la educación, particularmente en el nivel medio superior, dejó de ser el mecanismo de movilidad social que había sido en la mayor parte del siglo XX. Las crisis de la escuela y el trabajo han propiciado el surgimiento o reforzamiento de opciones peligrosas o incluso degradantes para los jóvenes, como la migración, las actividades delictivas e ilícitas o la evasión a través del consumo de drogas y alcohol. Los jóvenes pobres se organizan en sociedades paralelas en la frontera de la ilegalidad y se sienten excluidos -y lo son- de las instituciones y la vida diaria de los adultos, lo que constituye un factor de deterioro de la cohesión social.

Educación superior

La educación superior está formada por tres subsistemas: El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), que forma ingenieros y administradores en perspectiva regional y cuenta con 218 instituciones en el país; las universidades públicas estatales, que tienen funciones de docencia, investigación científica y tecnológica y difusión cultural, y el Sistema de Educación Normal, que cuenta con 273 instituciones públicas que imparten licenciatura en educación preescolar, primaria, primaria intercultural bilingüe, secundaria, especial, inicial, física y artística.

La oferta de educación superior está presionada por tres haces de factores: el demográfico, la urbanización y la tendencia al aumento del número de egresados de educación media superior.

Se estima que a finales de los años cuarenta del presente siglo, la población en edad de cursar educación superior (de 18 a 24 años) continuará aumentando hasta mediados del presente decenio, cuando será de alrededor de 15 millones de personas.

Entre 1959 y 2000, la población se cuadruplicó, al pasar de 25.8 a 100.6 millones de habitantes. En el siguiente medio siglo continuará aumentando, pero a un ritmo considerablemente menor; el CONAPO estima que en 2043 el volumen poblacional alcanzará un máximo de 130.3 millones de habitantes y desde allí empezará a descender. La edad media de la población también ha aumentado: de 23.3 años en 1950 a 26.1 en 2000; al finalizar los años treinta será de 36.5 años para llegar a 42.1 a la mitad del siglo.

El proceso de urbanización, que tuvo un crecimiento explosivo en el siglo XX en congruencia con el proceso de industrialización del país, continuará en el presente siglo, junto con la expansión de las ciudades intermedias y grandes, pero sobre todo de las zonas metropolitanas. En la primera mitad del siglo XXI continuará aumentando de manera constante y acelerada la población urbana como resultado de los cambios en la estructura sectorial de la economía nacional. La concentración demográfica y del ingreso será paralela a la concentración geográfica de las instituciones de educación superior.

En la compleja problemática de la educación superior en México se encuentran los déficits de información, conocimientos y habilidades que arrastra la mayoría de los estudiantes desde los otros niveles educativos.

Existen alumnos con severas deficiencias en el manejo de las matemáticas elementales, en ortografía, habilidad para redactar con un mínimo de claridad y corrección, capacidad de comprensión de la lectura y en otras muchas materias, como biología, geografía, por no mencionar las más especializadas como química y física.

Los alumnos universitarios de la UNAM que provienen de la Escuela Nacional Preparatoria ingresan automáticamente, sin requisito alguno de comprobación de su nivel académico. Si algún fundamento tiene este mecanismo es que la Universidad Nacional Autónoma de México debe avalar las calificaciones que otorgan sus maestros a los alumnos en todos los grados y niveles de la institución, principio que a su vez descansa en el supuesto de que existe un sistema eficiente de medición de resultados estandarizado y válido para toda la institución, hipótesis que no tiene asideros en la realidad. De esta suerte, la formación académica de los estudiantes que ingresan por primera vez al ciclo de licenciatura es muy irregular y depende en esencia de la calidad de la enseñanza y la seriedad de los sistemas de medición de aprovechamiento en los ciclos educativos previos, en particular el medio superior. Siempre que se ha intentado aplicar alguna prueba de evaluación académica para los egresados de las preparatorias de la UNAM, se han creado serios conflictos políticos sin que se haya logrado avance alguno al respecto.

Los estudiantes que provienen de preparatorias o colegios de Ciencias y Humanidades privados o públicos pero diferentes de la UNAM, tienen que someterse a un examen de selección. Su ingreso a la universidad depende tanto del lugar que hayan obtenido en el listado de resultados de mayor a menor y del número de espacios disponibles en la carrera a la que aspiran a ingresar o en otras que se consideran afines. La disponibilidad de espacios depende tanto de la capacidad física de los planteles -que a menudo se ve notoriamente rebasada por grupos excesivamente numerosos, sobre todo en los primeros semestres- como del número de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria que hayan ingresado a las distintas escuelas.

De esta suerte, los niveles académicos reales de los jóvenes que ingresan a la licenciatura son notoriamente heterogéneos, lo cual afecta la calidad académica de la Universidad, sea porque los profesores de los primeros semestres destinen una parte del tiempo de trabajo a compensar las lagunas de los peor preparados o porque ignoren el problema

Jóvenes: una generación que podríamos perder

y se limiten a impartir sus clases sin preocuparse de que sus alumnos hayan adquirido los conocimientos. La baja preparación de los de nuevo ingreso se convierte así en un factor determinante de reprobación y deserción escolar, que son motivos de frustración para los estudiantes y de desperdicio de recursos para las instituciones públicas y, al final de cuentas, para el Estado.

Las insuficiencias socioeconómicas de las familias de los estudiantes de educación superior explican en gran medida los bajos niveles académicos al ingreso y el aprovechamiento escolar insuficiente. Los problemas llegan al extremo de que en muchos casos, los estudiantes tienen serias insuficiencias de alimentación y nutrición y en otros deben abandonar sus estudios para buscar algún empleo y ayudar al sostenimiento de sus familias o de plano hacerse cargo del mismo. Los sistemas de becas no son suficientes para resolver las insuficiencias económicas de los estudiantes o siquiera para ayudarlos a compensar sus necesidades alimenticias, la compra de libros y los transportes.

A los elementos anteriores se agregan las diferencias en la calidad de la educación entre y dentro de las instituciones, la escasa correlación entre planes y programas de estudios, que reduce o impide la movilidad de estudiantes y personal docente incluso en las mismas carreras de licenciatura. Este es un factor importante de deserción escolar, con las consecuencias que tiene para la vida de los jóvenes que abandonan sus estudios y para el personal docente que, por ejemplo, se muda de una entidad federativa a otra.

A pesar de que los jóvenes necesitan incorporarse al trabajo en el sector formal de la economía y la planta productiva requiere personal con distintos grados de calificación, no existe suficiente vinculación entre las instituciones de educación superior y las empresas. Es cierto que a mediados del siglo XX ya se daba este alejamiento entre los mundos académico y empresarial, pero los egresados de las instituciones de educación superior tenían acceso relativamente fácil al empleo en actividades adecuadas a su profesión, debido, por una parte, a que la oferta de empleos era amplia por las altas tasas de crecimiento sostenido de la economía, impulsadas por el mercado interno en expansión y, por la otra, a que la tecnología media era relativamente sencilla y las empresas y entidades públicas se encargaban de capacitar a los trabajadores en los procesos

mismos de trabajo. Esta posibilidad es considerablemente más estrecha con la introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo.

La falta de correspondencia entre los planes de estudios y los requerimientos de la actividad económica, que genera un saldo creciente de profesionistas noveles empleados en tareas ajenas a su formación académica o excluidos del mercado de trabajo formal. Los egresados de licenciatura o posgrado con mejor preparación emigran a países que les ofrecen mejores perspectivas, en especial Estados Unidos; esto representa un cuantioso subsidio anual de talentos -y recursos- de México al extranjero.

La universidad es fundamental para el acceso de los jóvenes a mejores niveles de preparación técnica y humanística y a la vida cultural, pero también para formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes cívicos, el primero de los cuales es la observancia del orden jurídico nacional. No obstante, existe una clara disparidad entre las necesidades de educación superior de la sociedad y los recursos que destinan a ese objeto los gobiernos y congresos de la Federación y los estados de la República, que se ha acentuado con cada ciclo de crisis-recesión y con la apertura de universidades e institutos tecnológicos privados, que cobran cuotas elevadas, y en los que se forman los directivos y técnicos especializados de los grandes complejos empresariales del país.

Carlos Tello Macías⁽¹⁰⁾ se hace algunas preguntas fundamentales a este respecto: “¿Cómo es que lograron los multimillonarios aumentar tan notablemente su participación en la riqueza y en el ingreso? ¿Cómo lograron ganar el prestigio del que ahora gozan? La forma en que lo hicieron fue a través de aumentar significativamente su influencia en la conducción de la economía de los países y orientarla a sus objetivos. En la medida en que exitosamente lo hacían, aumentaba su riqueza”.

En el estudio *Perspectiva de la Educación Superior en México* para el siglo XXI, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados¹¹, informa que el número de instituciones de educación superior privadas ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta representar el 57 por ciento del total en 2005, frente al 43 por ciento

10 Tello Macías, Carlos. La revolución de los ricos. Ensayo inédito

11 Cámara de Diputados. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. <http://www.diputados.gob.mx/cesop>

Jóvenes: una generación que podríamos perder

de las instituciones públicas de este nivel educativo. Mientras que las universidades y tecnológicos privados constituían el 37.5 por ciento del total en 1990, cinco años más tarde llegaron a ser el 48 por ciento y el 54 por ciento en el año 2000. En términos absolutos se triplicaron en sólo 15 años, al pasar de 464 a 1 mil 681. El número de escuelas privadas con el nivel de posgrado se multiplicó por siete en veinte años: de 89 a 651 entre 1990 y 2005. En cuanto a la matrícula, de acuerdo con la misma fuente, en el ciclo escolar 2005-2006, las instituciones públicas federales, estatales y autónomas captaban el 67.5 por ciento y la de las privadas el restante 32.5 por ciento.

Debe tenerse presente, además, que en todos los niveles educativos existen escuelas privadas que defraudan a los alumnos y a los padres de familia por los bajos y a veces ínfimos grados de calidad de la labor docente, no obstante lo cual expiden certificados y títulos profesionales que, al no estar respaldados por los conocimientos, habilidades y competencias correspondientes, carecen de toda validez práctica, ya sea para continuar los estudios en escuelas serias o para la inserción de los egresados en los mercados de trabajo profesionales.

Los intereses mercantiles de los propietarios de esos establecimientos no pueden justificar el engaño masivo que se da a través de la distribución de títulos profesionales a jóvenes carentes de la preparación necesaria para el desempeño de tareas para las que se les supone preparados. Es necesario que el Estado cree mecanismos de certificación que garantice que los títulos profesionales sólo se otorguen a quienes acrediten, en exámenes debidamente diseñados, poseer los conocimientos y habilidades que exige cada carrera profesional. Un paso en esa dirección sería limitar el uso del nombre de “universidad” a las instituciones que demuestren una calidad media razonable en sus actividades docentes y de investigación.

Durante varios lustros, las instituciones públicas de educación superior han visto restringidos sus presupuestos, lo que las ha obligado a compensar, así sea parcialmente, la insuficiencia de sus ingresos ordinarios, con la venta de servicios académicos y de investigación tecnológica a organismos y empresas públicos y privados, aunque estas actividades son más la excepción que la regla, y no son de largo plazo, sino que por lo general están limitadas a proyectos específicos de corta duración. Para el país como un todo, este mecanismo de financiamiento tiene un alto costo,

pues los organismos o empresas que contratan investigaciones exigen, con razón, secrecía, debido a que los nuevos conocimientos que así se generan son secretos industriales y, en todo caso, de su propiedad. Esto impide la libre circulación del conocimiento y desgasta la autonomía de las instituciones de educación superior para determinar sus programas de investigación científica y humanística.

En México se están abatiendo los gastos en educación superior en términos reales. El rector de la UNAM, José Narro Robles, dice: “se recortan fondos designados a la educación superior, en distintos puntos del país, como en Ciudad Juárez, se vive un verdadero juvenicidio de menores de 25 años porque no hay alternativa de desarrollo mediante la enseñanza y la cultura”.

Pese a que la obtención de un título profesional ha dejado de ser un recurso para el logro de un empleo adecuado y para la movilidad social transgeneracional, la demanda supera con mucho a la disponibilidad de espacios en las instituciones públicas de educación superior y obliga al uso intensivo de los recursos humanos y la infraestructura disponible, en perjuicio de la calidad académica.

En educación superior se requieren cambios de calidad para que los estudiantes puedan pasar con éxito evaluaciones internacionales y ponerse en sintonía con nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Los jóvenes profesionistas mexicanos no sólo tienen que competir en un mercado de trabajo limitado con los de otras universidades del país, sino con los egresados de las universidades del mundo entero, por lo que no sólo son necesarias las evaluaciones internacionales de la calidad de la enseñanza, sino que cada universidad debe identificar las escuelas y áreas de menor nivel académico y elevar la calidad cuando menos al nivel más alto de la propia institución.

Las universidades deben revisar sus planes y programas de estudios a la luz de una nueva realidad global en la que el conocimiento se ha convertido en factor decisivo del desarrollo económico, social y político de los países, lo cual entraña una revaloración del capital humano y el conocimiento mismo, producto de la investigación, que generan las instituciones de educación superior.

En la era del conocimiento, México está a la zaga en áreas tan importantes como la investigación científica y tecnológica. Mientras que en 2005 México invertía apenas un 0.4 por ciento del PIB en investigación

Jóvenes: una generación que podríamos perder

y desarrollo, Japón invertía 3.3 por ciento, Estados Unidos 2.6 por ciento y los países de la OCDE, en promedio, el 2.26 por ciento. En ese mismo año había un científico por cada mil personas que formaban parte de la Población Económicamente Activa, en Finlandia el índice era de 16, en Islandia de 13, en Suecia de 12, en Japón de 11 y en Dinamarca de 10. De las 48 mil 281 patentes que se registraron en el mundo en ese año, México sólo aportó diez.

Para el final del segundo decenio del siglo, la ANUIES reconoce que

Nos ubicamos en el contexto de una sociedad del conocimiento en pleno proceso de desarrollo, en la cual las exigencias educativas serán cada vez mayores no sólo en términos de los niveles de educación formal de la población sino de su educación durante toda la vida. Así, nuestro sistema de educación superior deberá realizar un esfuerzo extraordinario para proporcionar una formación de la mejor calidad que deberá combinar en todas las carreras elementos de índole humanista, científica y técnica. Ello requerirá hacer un uso extraordinariamente eficiente de los recursos sociales dedicados a este nivel educativo para atender una demanda de educación terciaria de jóvenes en la cohorte de edad 20- 24 años que mínimamente habrá de duplicarse en los próximos veinte años. Será necesario construir un sistema de educación superior de carácter abierto en el que todas las instituciones y sectores participantes puedan aportar, a la vez que recibir elementos valiosos para un funcionamiento más homogéneo del conjunto. Así, las características más notables de este sistema serán la cooperación intensa entre las instituciones, la movilidad de académicos y estudiantes y la innovación permanente de formas de enseñanza-aprendizaje.¹²

Una de las urgencias nacionales es replantear la educación superior, tanto por lo que se refiere a los presupuestos que los gobiernos y congresos federal y estatales destinan a las universidades e instituciones públicas de educación superior, cuanto en lo que hace a los planes y programas de estudios, la constante integración

¹² Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES.

de los mejores profesionistas jóvenes a la planta de profesores e investigadores, la vinculación entre las instituciones educativas y el entorno económico y social en el que operan y el reforzamiento significativo de los recursos para investigación científica y desarrollo tecnológico. Es cierto que las instituciones de este nivel educativo pueden vender servicios a las empresas y allegarse recursos adicionales por este medio, pero esto no releva al Estado de sus obligaciones de financiamiento a la educación superior.

En cualquier caso, es tiempo de que la prioridad reconocida de la educación en todos sus niveles, lo mismo que de la generación y difusión de la cultura, pase del discurso oficial a los hechos, pues de lo que hagamos hoy al respecto dependerá en gran medida la capacidad del país para trascender los graves problemas que lo agobian y acceder a niveles superiores de desarrollo económico, social, cultural y político.

8. DEMOCRACIA

Al finalizar el siglo XX, México vivió uno de los momentos de mayor esperanza de su historia reciente y en los primeros años del XXI empezó a sufrir una decepción del mismo calibre. Muchos hombres y mujeres de la política, la academia y los medios y el grueso de la sociedad creyeron que el cambio acarrearía por sí mismo las soluciones a los viejos problemas -la pobreza y la desigualdad, los más lacerantes de todos- y no se pusieron a pensar en el rumbo.

Estrenábamos democracia pero nos quedamos con los partidos políticos y ninguno de ellos acertó a plantear propuestas serias que permitieran a la sociedad decidir su propio rumbo eligiendo entre alguna de las opciones. Se creyó que bastaría con remover a la vieja, enorme y heterogénea coalición política que había gobernado al país durante setenta años, y los ciudadanos acudieron a las urnas para concretar esa decisión; nadie pareció advertir que en ausencia de ideas, los electores tuvieron que escoger personas y optaron por aquella que les pareció más simpática, menos solemne, con el talante más opuesto a la noción tradicional del político mexicano.

El país no avanzó hacia ningún lado; se estancó en casi todos los ámbitos, en especial el de la economía, se profundizó la concentración del ingreso hasta niveles sin precedentes, se expandió la pobreza y se inició un proceso de pauperización de las clases medias que doce años después de la alternancia, no tiene visos de concluir.

Contra lo que podría esperarse, el advenimiento de la transición democrática en México no repercutió en un aumento significativo en la actividad política de los jóvenes. Más aún, las encuestas y sondeos disponibles sugieren que los jóvenes no tienen interés en los asuntos políticos o que los consideran tan pervertidos, que prefieren darles la espalda. Una explicación es que, a pesar de la aparición de nuevos rostros en los distintos partidos, la política la siguen haciendo los adultos y, peor aún, la hacen con criterios y prácticas del pasado, mientras los jóvenes sólo participan de manera marginal y subordinada.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Juventud, cuatro de cada cinco jóvenes encuestados declararon no haber participado en ninguna manifestación, marcha o mitin y tres de cada cuatro no tienen interés en temas políticos ni menos aún en los partidos. No obstante, casi nueve de cada diez jóvenes se dijeron dispuestos a participar en movilizaciones a favor de la paz y en defensa de los derechos humanos.

Estas cifras podrían ser reflejo de un doble fenómeno contemporáneo: por una parte, el desprestigio creciente de la política y de los partidos, que son vistos por amplios estratos de la sociedad como entidades de corrupción y manipulación, y por la otra, por el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos humanos y en otras áreas relativamente nuevas como la protección al medio ambiente, el respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías e incluso la promoción de patrones culturales para el cuidado de la salud.

Pero no cabe duda de que en el México de 2012, la disposición de los jóvenes a participar en movilizaciones por la paz, está directamente relacionada con la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, así como la comisión de crímenes atroces que conmueven a una sociedad que en menos de un lustro se ha ido acostumbrando a la difusión de noticias sobre homicidios, secuestros, torturas, extorsiones y dos docenas de modalidades de la delincuencia que han lesionado la tranquilidad de las familias y han costado decenas de miles de vidas humanas.

Mientras que los jóvenes ven con recelo a las instituciones políticas, en especial los partidos y los diputados, así como toda clase de cuerpos policiacos, declaran tener mayor confianza en la familia, los médicos y la escuela. Estas preferencias reflejan la lejanía de las actividades políticas tradicionales respecto a la vida diaria de los adolescentes y jóvenes, así como las agresiones de que son objeto por parte de las autoridades policiacas y de los grupos de seguridad privados.

Llama la atención que los jóvenes continúen manifestando su confianza en la familia a la luz del deterioro que ha sufrido esta institución, tanto en las áreas rurales debido a la inmigración interna e internacional, como en las zonas marginadas de las ciudades, en las que se han degradado tanto la vida comunal como las relaciones en la familia, debido a la violencia intrafamiliar que, a su vez, encuentra su explicación en fenómenos socioeconómicos sumamente adversos.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Es igualmente sorprendente que la escuela siga siendo una institución confiable para buena parte de los jóvenes, cuando ha dejado de ser un espacio para la movilidad social, se han deteriorado los métodos de enseñanza y ha cundido la violencia, especialmente en el nivel básico de Educación. Es posible que las respuestas favorables sobre la institución escolar reflejen más las aspiraciones que la realidad en que se desarrolla la función escolar.

El desánimo de los jóvenes por la política se expresa en la opinión de que la democracia no protege sus derechos ni soluciona sus necesidades y no le ven gran utilidad. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados por el IMJ consideran que es un sistema preferible a otras formas de gobierno, pero debería ser motivo de estudio y preocupación el hecho de que los demás (46%) dicen lo contrario. Habría que entender si estas respuestas son sólo irreflexivas o encierran alguna proclividad a las formas autoritarias de gobierno.

Es inquietante la posibilidad de que el entorno hostil en que vive la mayoría de los jóvenes mexicanos y los patrones culturales que imponen el cine y la televisión, en los que se suele exaltar la violencia y de manera menos evidente pero indudable, el racismo y la xenofobia, influyen en las opiniones políticas y sociales de los jóvenes mexicanos.

Uno de los grandes problemas de la relación de los jóvenes con la democracia es que la mayor parte de los partidos políticos los convocan como masas para los actos públicos y la obtención de votos, especialmente en períodos electorales, y no recogen sus necesidades y exigencias; peor aún, pasadas las elecciones y convertidos los candidatos en gobernantes o legisladores, los jóvenes y en general los simpatizantes y militantes de los partidos son ignorados.

La población de 18 a 29 años de edad representa aproximadamente la tercera parte de los votos potenciales, pero entre ella no predomina alguna preferencia partidaria, sino que es quizá el sector de la ciudadanía con menor estabilidad en una u otra posiciones político-electorales, lo que la convierte en un conjunto muy atractivo para los distintos partidos.

Aún no se ha dado en México un fenómeno semejante a los del norte de África, España y Portugal, en el que los jóvenes decidieron espontáneamente protestar, sea contra las viejas dictaduras en algunos países o contra los efectos de las medidas de ajuste económico en otros, pero los comunes denominadores fueron el predominio de los jóvenes,

la ausencia de una organización política previa y el uso intensivo de las redes sociales.

Aunque el intenso tráfico de información en los países y entre ellos sugiere que un estallido social de un corte similar puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, no es posible predecir si los jóvenes mexicanos seguirán los pasos de sus coetáneos españoles o confiarán en los mecanismos de la democracia.

El punto es inquietante porque en vísperas de las elecciones federales de 2012, confluyen en el país problemas de diversa índole, pero todos de gran profundidad: la pobreza, la desigualdad creciente, la lenta recuperación de la economía, la marcada insuficiencia de empleos en el sector formal y la precariedad de los que se están creando -menos de tres salarios mínimos, menos de 15 horas de trabajo a la semana, contratación eventual. Y como trasfondo de todo esto, la violencia asociada al crimen organizado y su combate.

Por estas razones y por el peso relativo de los jóvenes en el padrón electoral, los partidos políticos deberían revisar autocríticamente sus relaciones con los jóvenes y percatarse de que, si alguna vez se vieron representados a través de políticos de corta edad encargados de puestos públicos relevantes, hoy el país y la juventud arrastran una carga de rezagos -que podría derivar en resentimiento- que exige una nueva visión. Baste tener presente que la juventud podría definir los resultados de una elección en el momento en que hubiera una convocatoria eficaz, un programa que la incluyera y una chispa, como las que han encendido los movimientos de rebelión en otras partes del mundo.

9. POLÍTICAS PÚBLICAS

Los jóvenes no viven en un mundo aparte; son una fracción numerosa y activa de la sociedad, pero han sido ignorados en lo fundamental por los hacedores de las políticas públicas, que en el mejor de los casos los consideran como un sector vulnerable de la población y, en consecuencia, los encasillan entre los beneficiarios de la política social que, de suyo, está parcializada hacia programas asistencialistas y no de desarrollo del potencial humano.

Las políticas “para jóvenes” se reducen a programas deportivos y recreativos, lo que dificulta el conocimiento de la juventud y disminuye las posibilidades de canalizar sus energías creativas hacia la solución de sus propios problemas y de los del conjunto de la sociedad. Esa visión parcial ocasiona un desperdicio colosal de las potencialidades de desarrollo para el país en todos los órdenes. En algunos casos se considera a los jóvenes como un factor dentro del tema más amplio de la educación superior, pero este enfoque también es equivocado, pues excluye a los jóvenes que no tienen acceso a las aulas universitarias o de otras instituciones de educación superior, que son la mayoría.

El desconocimiento de “lo joven” en nuestros días no sólo se explica por la ausencia de políticas pertinentes, sino también por los fenómenos derivados tanto de los grandes cambios globales, de las transformaciones culturales profundas que ha experimentado la sociedad mexicana en el último medio siglo y por los desaciertos de las políticas públicas.

El grave deterioro de la calidad de la educación y de la responsabilidad del magisterio en todos los niveles escolares dificulta la formación de ciudadanos impulsores de la democracia, solidarios entre sí y con otros pueblos del mundo, tolerantes de la diversidad, respetuosos de las minorías y defensores del medio ambiente. Estos elementos sugieren que la sociedad mexicana del segundo cuarto del siglo XXI podría alejarse de lo que hasta ahora hemos conocido como cultura nacional y estaría fincada sobre una escala de valores ajenos a nuestra historia y a los intereses nacionales e incluso a la convivencia democrática.

Existen, por supuesto, instituciones y programas dedicados a la atención de la juventud, pero no se cuenta con una política explícita que conjugue la educación y el empleo, por lo que muchos jóvenes son en la práctica excluidos de la economía formal, del sistema educativo y, en consecuencia, del Estado de Derecho. Y una sociedad que excluye a sus jóvenes se mutila a sí misma, especialmente en la perspectiva de futuro.

Los programas específicos para atender “la cuestión juvenil” no están coordinados y, salvo excepciones muy meritorias, están atrapados en las inercias burocráticas y quienes están a cargo de ellos no parecen tener una noción clara de la importancia que tiene su trabajo para el futuro muy cercano del país y su sociedad.

En este panorama sombrío, sobresale el trabajo del Instituto Mexicano de la Juventud, que no sólo ha formulado programas y empujado propuestas, sino que en coordinación con el INEGI, levantó la Encuesta Nacional de la Juventud, que es referente obligado para resolver la problemática juvenil y definir políticas públicas eficaces para la atención de la quinta parte de la población y canalizar su energía al logro de objetivos comunes de la nación.

Tanto el Estado como la sociedad deberían reconocer que tienen una gran deuda con los jóvenes que, al mismo tiempo, representan una oportunidad que, hasta ahora, ha sido casi por completo desaprovechada.

El solo hecho de que sean parte de la población -hijos de los adultos, nuestros hijos- nos impone la necesidad de atender a los adolescentes y jóvenes teniendo presente que viven una etapa de formación que será decisiva para su futuro como adultos, pero a ello debe agregarse que el buen desarrollo de los jóvenes de todas las condiciones socioeconómicas es un seguro de vida para la sociedad en su conjunto.

Como lo han planteado numerosos estudiosos del tema, los problemas juveniles no pueden encararse con la creación o expansión de uno o varios organismos públicos; por el contrario, las políticas para la juventud deben cruzar todas las instituciones, estrategias, planes y programas, con la coordinación de un mecanismo interinstitucional pequeño, ágil, con capacidad de seguimiento, supervisión, evaluación de resultados y decisión, en lo que se refiere al capítulo juvenil de los planes y programas de gobierno.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

Esta propuesta tendría repercusiones administrativas, financieras, operativas y políticas de gran alcance, y su adopción entrañaría reformas en los mecanismos de determinación de las políticas públicas y exigiría una reforma administrativa que libere al Estado de las inercias burocráticas y de la cultura de la irresponsabilidad, la complicidad vertical y horizontal en las estructuras de gobierno, la impunidad y otros vicios sociales que no sólo se reproducen en el mundo de las burocracias, sino que a menudo allí se generan.

Por todo ello, la cuestión juvenil debe ser considerada en su especificidad, especialmente en programas que inciden directamente en su vida cotidiana y en su porvenir, como los de salud, educación en todos los niveles y empleo en la economía formal. Debido a la importancia estratégica de la juventud, es un grave error de los gobiernos y congresos esgrimir insuficiencia de recursos como pretexto para marginar, en lo presupuestario y lo operativo, los programas públicos que tienen incidencias directas en este grupo de población.

SALUD

Como los demás grupos de edad -niños, ancianos- los jóvenes tienen problemas de salud semejantes a los del conjunto de la sociedad y, al mismo tiempo, están más expuestos a factores de riesgo que afectan la salud, como las adicciones, y las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, el aborto clandestino, la violencia intrafamiliar y social, la delincuencia. Esta realidad sugiere que los programas de salud deberían tener un apartado especial para los jóvenes, lo que por cierto representaría una inversión redituable a largo plazo para la sociedad.

En el segundo tercio del siglo XX mexicano se presentaron fenómenos sociales que han tenido desarrollos inesperados. Los avances de la ciencia y en particular de la medicina redujeron fuertemente las tasas de mortalidad perinatal y a consecuencia del embarazo y, al mismo tiempo, ampliaron significativamente la esperanza de vida al nacer de la población. La reducción general de la mortalidad obedeció a los éxitos de las campañas epidemiológicas, pero los efectos positivos a largo plazo de estos fenómenos están

acotados por el deterioro socioeconómico general que se aprecia en el país a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado y que se ha agudizado en el primer decenio del presente.

El mejoramiento de las condiciones de salud de la población en general incluye, por supuesto, a los jóvenes, pero la calidad de vida y las probabilidades de supervivencia de este grupo poblacional se ven afectadas por factores sociales y educacionales como la alta incidencia de accidentes automovilísticos, las lesiones en riñas callejeras, el alcoholismo, así como los problemas de salud asociados al embarazo a edades tempranas, así como las enfermedades infecciosas, en especial el VIH/SIDA que, si bien se ha atenuado con la generalización del uso del condón y la difusión de prácticas sanitarias en la sexualidad, continúa afectando a una parte de la población joven.

No obstante, el país no ha desarrollado políticas y programas de prevención y los que existen son poco significativos por su dimensión o están dirigidos a grupos muy pequeños de la sociedad. Se requiere un gran esfuerzo de las instituciones de salud públicas y privadas para crear una nueva cultura preventiva que reduzca la exposición de los jóvenes a los riesgos para la salud y que, en el mediano plazo, disminuya las presiones de la demanda de servicios sobre la oferta disponible.

Los problemas de sobrepeso y obesidad derivados de la expansión de las industrias productoras de alimentos chatarra y la formación de hábitos alimenticios que fomentan el consumo de estos productos, afectan a un alto porcentaje de jóvenes, en particular del sexo femenino. A ello se suman los efectos perniciosos del consumo excesivo de alcohol y tabaco sobre la salud, así como el predominio de patrones culturales que favorecen el sedentarismo, como es el caso de la permanencia de varias horas frente al televisor.

Estos factores propician la aparición temprana de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Estas tendencias mórbidas en las mujeres jóvenes embarazadas influyen negativamente, tanto en la salud de la madre, como en la del producto y pueden provocar deficiencias serias de salud en los recién nacidos y e incluso la muerte.

La necesidad de poner en marcha programas de orientación y prevención de la salud entre los jóvenes se debe a que entre los 15 y los 29 años suelen ocurrir transiciones de gran trascendencia: la primera relación sexual, la formación de una nueva familia, el nacimiento del primer hijo y el inicio de las prevenciones anticonceptivas. Estos fenómenos ocurren en contextos regionales, sociales, económicos y culturales muy diferenciados en los que viven los jóvenes. En todo caso, las transiciones conllevan riesgos mayores para los grupos de población marginados de los medios rural y urbano, debido a las deficiencias de información y a las circunstancias adversas del entorno familiar y comunitario.

La actividad sexual entre las jóvenes mexicanas se inicia, en promedio, hacia los 19 años, aunque la primera relación sexual suele ser anterior a esta edad. Sobre todo en las zonas urbanas, se ha generalizado el uso de anticonceptivos, principalmente el condón que no sólo evita el embarazo sino también las enfermedades de transmisión sexual. Como resultado de los programas de planificación familiar iniciados en los años setenta del siglo pasado, las tasas de fecundidad de las jóvenes mexicanas se han reducido en forma apreciable, en particular en la adolescencia, pero todavía uno de cada cuatro embarazos en este grupo es involuntario y uno de cada diez es indeseado.

Los embarazos involuntarios o no deseados son una causa frecuente de problemas para las adolescentes y sus parejas, especialmente en las zonas y grupos sociales de menores niveles socioeconómicos, incluyendo la población indígena, debido quizá a la falta de información, al difícil acceso a los anticonceptivos y a factores culturales.

Aunque la oferta de anticonceptivos en el mercado y en las instituciones públicas de salud se ha incrementado en los últimos veinte años, se estima que una de cada diez mujeres en edad fértil no los tienen disponibles. Gran parte de las adolescentes y la población femenina de menor escolaridad, residente en zonas rurales e indígenas, no tienen acceso real a los métodos anticonceptivos aunque desean no tener hijos o espaciar los nacimientos, lo que constituye un ejercicio desigual de los derechos reproductivos de la población. ⁽¹³⁾

13 Véase CONAPO. Nuevas estimaciones de las necesidades insatisfechas de anticonceptivos en México. Primera edición. Marzo de 2010. ISBN en trámite.

También ha aumentado el índice de atención de parto por profesionales de la salud, pero aún existen brechas, especialmente en el medio rural y las comunidades indígenas. Un grave problema para las jóvenes en gran parte del país, sobre todo en áreas rurales, indígenas y de bajos niveles de desarrollo es la penalización indiscriminada del aborto, que obliga a muchas adolescentes y mujeres jóvenes a tener un hijo no deseado o a acudir a servicios clandestinos que por lo general no disponen de condiciones mínimas de higiene y atención profesional.

Las estadísticas sobre el acceso de los jóvenes a la seguridad social son muy inquietantes. De acuerdo con datos y proyecciones de la Secretaría de Salud, de una población de 28.2 millones de personas con edades de 15 a 29 años en el año 2000, aproximadamente la mitad tenía acceso a la seguridad social; para 2011, sólo el 42.6 por ciento de ese grupo de edad tiene servicios de alguna institución de seguridad social. Mientras que la población de este grupo de edad sin acceso a la seguridad social aumentó en 20.6 por ciento, al pasar de 14.0 millones de personas en 2000 a 16.8 millones en 2011, la población asegurada se redujo de 14.2 a 12.5 millones de personas y las proyecciones para 2012 muestran la misma tendencia.

Población joven, según acceso a la Seguridad Social. 2000

Grupos de edad	Total	%	Sin seguridad social	%	Con seguridad social	%
15-19	10,175,909	100.0	5,047,919	49.6	5,127,990	50.4
20-24	9,366,775	100.0	4,712,148	50.3	4,654,627	49.7
25-29	8,663,486	100.0	4,212,672	48.6	4,450,814	51.4
Suma	28,206,170	100.0	13,972,739	49.5	14,233,431	50.5

Fuente: Elaboración con datos del Sistema Nacional de Información sobre Salud. Secretaría de Salud. Datos demográficos

Población joven, según acceso a la Seguridad Social. 2011

Grupos de edad	Total	%	Sin seguridad social	%	Con seguridad social	%
15-19	10,416,858		6,013,860	57.7	4,402,998	42.3
20-24	9,830,472		5,642,261	57.4	4,188,211	42.6

Jóvenes: una generación que podríamos perder

25-29	9,119,581		5,198,212	57.0	3,921,369	43.0
Suma	29,366,911	100.0	16,854,333	57.4	12,512,578	42.6

Fuente: Elaboración con datos del Sistema Nacional de Información sobre Salud. Secretaría de Salud. Datos demográficos

Población joven, según acceso a la Seguridad Social. 2012

Grupos de edad	Total	%	Sin seguridad social	%	Con seguridad social	%
15-19	10,370,658	100.0	5,974,671	57.6	4,395,987	42.4
20-24	9,859,381	100.0	5,634,177	57.1	4,225,204	42.9
25-29	9,176,356	100.0	5,227,899	56.9	3,948,457	43.1
Suma	29,406,395	100	16,836,747	57.3	12,569,648	42.7

Fuente: Elaboración con datos del Sistema Nacional de Información sobre Salud. Secretaría de Salud. Datos demográficos

Es claro que en México no está garantizado el derecho a la salud que establece la Constitución y que la capacidad de las instituciones de seguridad social para atender a la demanda actual y futura de servicios médicos es insuficiente. Estos hechos obedecen a diversas razones, como la insuficiencia general de recursos públicos debida a las bajas tasas de recaudación tributaria, pero también a que el eje de la política social se ha desplazado desde el binomio escuela-economía hasta fórmulas asistencialistas y esto entraña una disminución de los recursos potenciales para ampliar la oferta de servicios de salud, en especial la preventiva, y mejorar la calidad de su prestación. Para los adolescentes y jóvenes, lo mismo que para los adultos mayores, estas insuficiencias tienen repercusiones negativas muy importantes.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Las políticas y programas tradicionales “para jóvenes” han perdido toda eficacia -si alguna vez la tuvieron- porque en el país y en el mundo se viven realidades tecnológicas, económicas y culturales distintas a las que predominaron en la posguerra y las mutaciones más drásticas se dan entre los jóvenes que nacieron en pleno proceso de globalización.

Las respuestas que fueron eficaces hasta hace poco tiempo, las estructuras mentales y gran parte de las instituciones están en franco deterioro, tanto por las profundas transformaciones que se hicieron evidentes en el mundo y en el país en el último cuarto del siglo XX, como por los graves errores de conducción que han relegado a México en prácticamente todos los órdenes: la economía, el empleo, el mercado interno, las finanzas públicas, la distribución del ingreso y el bienestar, la seguridad pública, la educación, la salud, el prestigio internacional del país. Los jóvenes son el manantial de imaginación e ideas frescas que urgen para romper las inercias autodestructivas en las que estamos atrapados.

Sorprendentemente, ni los políticos ni los académicos ni los intelectuales ni los medios de comunicación se han planteado el problema juvenil en su integralidad y, por lo mismo, todo lo que hacen la sociedad y el Estado en materia de jóvenes va a la deriva, a veces con aciertos aislados y efímeros y las más veces con serios errores y aun con desdén. Lo más frecuente es que se les considere como una más de las minorías, pese a su notoria importancia numérica y a la enorme porción de la energía social que tienen.

Mientras no se entienda y atienda a los jóvenes, los programas y acciones seguirán correspondiendo a los estereotipos y valores que definieron “lo joven” a finales de los años sesenta, cuando emergieron como un segmento con personalidad propia en países de distintos grados de desarrollo en el mundo entero. En la revolución de las telecomunicaciones, los jóvenes de países con culturas y grados de desarrollo muy heterogéneos, han vuelto a presentarse, pero ahora ya no como en 1968

Jóvenes: una generación que podríamos perder

para afirmar su propia identidad, sino como el sector más avanzado y activo de sus sociedades.

Al inicio del siglo XXI la juventud tiene un mosaico de culturas e ideas que rompen los modelos tradicionales, tal vez a consecuencia de la profunda transformación de instituciones básicas como la familia y la escuela. Estos fenómenos exigen que los científicos sociales, los académicos, políticos y comunicadores se den a la tarea de entender a la juventud, con nuevos paradigmas y luces, lo que requiere un gran esfuerzo de reinterpretación y re-conceptualización.

La desatención del Estado a la cuestión juvenil desde la activa creación de nuevas instituciones de educación superior en los años 1970 en respuesta al movimiento estudiantil de 1968, ya ha generado fenómenos de reproducción transgeneracional de la precariedad y la desigualdad, más acentuados en las entidades federativas de menor crecimiento económico, las comunidades indígenas y rurales y las áreas marginadas de las grandes ciudades que han sido gravemente afectadas por fenómenos como el pandillerismo, el consumo de drogas ilícitas y la violencia generada por el crimen organizado y su combate.

Recomendaciones

Es necesario y urgente generar reformas y nuevos arreglos institucionales que multipliquen las oportunidades laborales, educativas y culturales para los jóvenes. Las instituciones del Estado tienen pendiente la tarea de integrar un marco de garantías para los jóvenes que se exprese en actividades específicas de los programas de gobierno.

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de transformar los planes y programas de estudios y los métodos de trabajo académico para garantizar a los jóvenes una efectiva adquisición de los conocimientos, competencias y aptitudes que exige el mercado formal de trabajo, así como los valores para la formación de ciudadanía. Entre las grandes ventajas que ofrece la escuela, está el sentido de pertenencia que inculca a los alumnos, maestros, administradores y directivos, y ese es un activo social que debería aprovecharse intensamente.

El tema de la juventud debería ser analizado en espacios de discusión ordenada y seria en todo el país, con la participación de los propios jóvenes y con vistas a elaborar un diagnóstico nacional actualizado,

regionalizado y diferenciado a escala local, así como para construir una agenda integral y comprehensiva que defina tareas en los campos educativo, laboral, de salud, cultural, reconstrucción de las relaciones familiares y comunitarias y desarrollo humano.

Es necesario definir con precisión las garantías que la sociedad está dispuesta a reconocer a los jóvenes y darles fuerza jurídica a través de medidas legislativas apropiadas.

Parece evidente la necesidad de dejar atrás las ideas tradicionales sobre la "cuestión juvenil" y los viejos enfoques de la "política para jóvenes", para acceder a nuevas ideas de reforma social vinculada a las políticas y programas de educación y promoción del desarrollo económico. Los jóvenes no son un problema, sino el estrato etario de la población con mayor potencial en todos los órdenes, y deben considerarse como una oportunidad.

Proposiciones

1. El Estado mexicano debe definir una política juvenil que reconozca a los jóvenes como un sector determinante para el desarrollo nacional.
2. Los programas de educación, empleo, salud, vivienda, agricultura, industria, servicios, combate a la pobreza y la marginalidad deben estar cruzados por los objetivos nacionales del desarrollo de la juventud.
3. Los jóvenes son los más numerosos y el Estado y la sociedad deben destinar más recursos para invertirlos en ellos, mediante planes ambiciosos, incluyentes, serios y consistentes, de larga duración y continuidad transexenal.
4. El Legislativo debe hacer adecuaciones jurídicas y presupuestarias para las políticas para jóvenes.
5. La elaboración y ejecución de las políticas y programas juveniles debe ser descentralizada hasta niveles municipales y delegacionales y tal vez de localidades y barrios
6. Es necesario formar un observatorio de la juventud en el que haya debate y acuerdos entre distintos sujetos, grupos y organizaciones relacionadas con la política juvenil, se identifiquen los temas relevantes y se hagan propuestas que retroalimenten las acciones de la política juvenil.

Jóvenes: una generación que podríamos perder

7. Se requiere impulsar la formación de ciudadanía entre los jóvenes, democratizar la información y hacer patente la función de la juventud en el desarrollo nacional.
8. Es preciso vincular las instituciones educativas con los sectores productivos, establecer compromisos y generar sinergias para el desarrollo de los jóvenes, y desarrollar instrumentos como becas-trabajo y programas de capacitación a través de fórmulas de concurrencia de las instituciones públicas y las empresas.
9. La cuestión juvenil debe ser estudiada y atendida por los colegios de profesionistas, las fundaciones altruistas, los clubes de servicio, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientalistas y las iglesias.
10. La educación media y superior debe formar ciudadanos promotores de la democracia, solidarios, tolerantes, respetuosos de la pluralidad y la diversidad y activos protectores del medio ambiente.

Los jóvenes mexicanos en el siglo XXI
se terminó de imprimir en febrero del 2012.

El tiraje consta de 500 ejemplares
y la impresión estuvo a cargo de

Grupo Impreso
Monrovia 1101-bis
Col. Portales, México, D. F.

ISBN: 978-607-8066-02-5



Los autores del libro compartieron el criterio de que la juventud es un estrato social definido no sólo por razones etarias sino también culturales y socioeconómicas, lo que la convierte en un conjunto humano sumamente heterogéneo. Los dos tuvieron en común la preocupación de que la insuficiente o deficiente atención institucional a la problemática juvenil representa una automutilación de la sociedad como un todo.

